OIET
OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

TRÁFICO DE DROGAS Y YIHADISMO EN ÁFRICA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

OIET
OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

TRÁFICO DE DROGAS Y YIHADISMO EN ÁFRICA

ANA AGUILERA

© de la edición: COVITE, 2022
COVITE
Apdo. de Correos 3358
20080 San Sebastián (Guipuzkoa) (España)

© de los textos: Su autor
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, sea electrónico, mecánico, reprográfico, fotoquímico, óptico, de grabación o cualquier otra forma de almacenamiento de información o sistema de recuperación, sin el permiso previo y por escrito del editor.

Texto: Ana Aguilera
Coordinación: Carlos Igualada
Diseño: Romina da Silva

Sobre el proyecto

El presente documento investiga la relación entre el tráfico de drogas y el yihadismo en África Subsahariana, realizando una evaluación de riesgos a través de las tendencias analizadas que permita formular unas líneas de acción estratégicas adecuadas a la magnitud del desafío objeto de estudio.

Sobre la autora

Investigadora junior en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET). Coordinadora de la Red de Jóvenes Investigadores. Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III de Madrid y graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos.

Resumen

De todos los tipos de actividad criminal que se contemplan, el tráfico de drogas se ha afianzado como uno de los mayores retos que afectan a la seguridad regional de buena parte de África, un desafío que por su naturaleza transfronteriza queda fuera del ámbito nacional.

Estos cárteles de la droga que operan en el continente a menudo se sirven de la colaboración de otros grupos locales asentados en ciertas zonas grises de la geografía africana, como milicias rebeldes o grupos terroristas. La expansión de la presencia yihadista en gran parte del África Subsahariana, desplazando el centro gravitatorio de su actividad desde los enclaves en Siria e Irak hacia países como Nigeria, Níger, Mali, Somalia o Mozambique, entre otros, está a su vez intensificando sus vínculos con el crimen organizado, amenazando con la consolidación de una estructura criminal integrada y paralela a cualquier otro tipo de actividad de la economía legal.

El presente documento ofrece un análisis transversal en clave regional sobre la relación entre el tráfico de drogas y el yihadismo, identificando los vectores que impulsan ambos tipos de actividad criminal, analizando el grado de cooperación existente entre ellos y desglosando los diferentes riesgos que se desprenden de esta relación. El análisis va acompañado de una serie de recomendaciones destinadas a orientar las líneas de acción estratégica de España y el resto de sus socios y aliados internacionales, gracias a una comprensión integral de la problemática que permitirá resolver algunas de las numerosas incógnitas que rodean al fenómeno objeto de estudio y promover la presencia de España en la lucha contra este fenómeno incluido en su panorama de riesgos externos.

Summary

Considering all types of criminal activity on the African horizon, drug trafficking has established itself as one of the greatest challenges affecting the regional security over a large part of Africa, a challenge that, due to its cross-border nature, is outside the national sphere.

These drug cartels operating in the continent often make use of the collaboration of other local groups based in certain grey zones of the African geography, such as rebel militias or terrorist groups. The expansion of the jihadist presence across sub-Saharan Africa, shifting the gravitational center of their activity from hot spots in Syria and Iraq to countries such as Nigeria, Niger, Mali, Somalia or Mozambique, among others, is in turn intensifying their links with organized crime, threatening the consolidation of an integrated criminal structure parallel to any other type of legal economic activity.

This document offers a comprehensive regional analysis of the situation between drug trafficking and jihadism, identifying the driving forces that fuel both types of criminal activity, analyzing the degree of cooperation between them, and breaking down the different risks arising from this relationship. The analysis is followed by a series of recommendations aimed at guiding the strategic lines of action of Spain and the rest of its international partners and allies, thanks to a cross-cutting understanding of the phenomenon that will make it possible to resolve some of the uncertainties and promote Spain's presence in the fight against this phenomenon included in its strategic panorama of external risks.

TABLA DE CONTENIDO

PRINCIPALES HALLAZGOS.....9
1. INTRODUCCIÓN.....11
2. PRINCIPALESTENDENCIAS.....13
3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL RIESGO.....15
3.1. Yihadismo y narcotráfico: ¿cooperación o dependencia?
3.2. Desventajas de la cooperación entre los cárteles de la droga y el yihadismo
4. VECTORES DEL NARCOTRÁFICO EN ÁFRICA SUBSAHARIANA.....23
4.1. África como espacio proclive a albergar el crimen organizado
4.2. Los distintos actores relacionados con el narcotráfico
5. LA AMENAZA YIHADISTA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA.....41
6. ANÁLISIS DE TENDENCIAS ACTUALES DEL TRÁFICO DE DROGAS.....50
6.1. Cannabis
6.2. Opiáceos
6.3. Cocaína
7. EVALUACIÓN DEL RIESGO.....71
7.1. África Occidental
7.1.1. Mali
7.1.2. Nigeria
7.1.3. Guinea-Bissau
7.2. Norte de África
7.3. África Central, Oriental y Sur
8. IMPLICACIONES DE LA COOPERACIÓN ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y EL TERRORISMO.....93
8.1. Dimensión social
8.2. Dimensión económica
8.3. Dimensión institucional y política

8.4. Dimensión de la seguridad
8.5 Dimensión geopolítica
9. LINEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA.....106
9.1. Instrumentos internacionales vigentes en la lucha contra el tráfico de drogas y el yihadismo
9.2. El papel de España en la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo
9.3. Recomendaciones
10. CONCLUSIONES.....129
11. REFERENCIAS.....133
12. ANEXOS.....144
13. AGRADECIMIENTOS.....146

PRINCIPALES HALLAZGOS

- El crimen organizado destinado a actividades de tráfico de drogas, aprovechando las zonas grises con bajo o nulo control estatal, se alimenta de las vulnerabilidades económicas y sociales que imperan en sus zonas de interés estratégico.

- Existen una serie de vectores que facilitan la penetración del tráfico internacional de droga en el espacio de África Subsahariana, especialmente aquellos relacionados con su proximidad geográfica, fragilidad política y endeble economía social.

- Los países costeros de África Occidental se consolidan como las principales vías de entrada de cocaína que benefician a actores terroristas y otros grupos armados en el Sahel Occidental. Por su parte, el cannabis producido mayoritariamente en el norte de África se transporta a lo largo de la geografía africana, especialmente a través de la ruta saheliana, mientras que la heroína se introduce desde Asia vía tres corredores principales que tienen como ruta intermedia o final África Occidental. Por tanto, esta región, a pesar de no contar con un importante volumen de incautaciones en comparación con otras regiones africanas, resulta indispensable para la distribución de los tres principales grupos de droga, con Nigeria como importante centro neurálgico en las tres categorías.

- Que África se encuentre como un espacio productor y consumidor de droga en aumento, en vista de la creciente amenaza terrorista sobre buena parte del continente, amenaza con intensificar y consolidar vínculos más estrechos entre organizaciones criminales transnacionales y grupos yihadistas.

- La relación entre el yihadismo y el tráfico de drogas es un desafío transnacional y, por ello, las políticas deben apostar por una contundencia y persecución a nivel multilateral que aúne esfuerzos tanto del aparato estatal como de organismos internacionales y la sociedad civil en combatir las redes y conexiones existentes en la gran mayoría de sectores de la economía informal.

1. INTRODUCCIÓN

El Fórum Internacional por la Paz y la Seguridad que tuvo lugar en Dakar en el año 2014 reunió a más de 400 especialistas de cuarenta países, partiendo de la premisa de que las principales amenazas a la seguridad respondían al terrorismo, el tráfico de drogas y la piratería marítima (Semmami, 2015). Años más tarde, el triángulo de amenazas permanece no solo latente sino en ciertos casos, como el yihadismo, en constante aumento.

Similarmente, la Estrategia de Seguridad Nacional de España de 2021 apunta a la convergencia entre el terrorismo y el crimen organizado como una amenaza creciente, favoreciendo en ciertos casos su cooperación y la descentralización de sus operaciones para facilitar la financiación del terrorismo (Estrategia de Seguridad Nacional, 2021:65).

La transnacionalización que ha sufrido el crimen organizado en África desde principios de siglo resulta incuestionable, teniendo en cuenta que el continente no se constituía hace unas décadas como una de las principales rutas del narcotráfico debido, entre otros, al sólido canal de suministro de droga proveniente de América Latina y Asia hacia el interior de los mercados europeos por otras vías que no requerían necesariamente de su paso por África[1].

Sin embargo, el nuevo siglo trajo consigo un cambio en el paradigma del tráfico de la droga hacia el interior del continente europeo, asumiendo África un fuerte papel en el establecimiento de este negocio ilícito a medida que la descolonización y la consolidación de los incipientes aparatos estatales de los nuevos países comenzaban a dar sus primeras muestras de debilidad. Desde

1 En el caso de la cocaína, anteriormente al rol de África como espacio de tránsito intermediario eran recurrentes los vuelos directos desde los países productores en América del Sur (Colombia, Perú y Bolivia) hacia los destinos europeos.

entonces, el negocio de la droga se ha convertido en un desafío endémico y estructural en muchas zonas geográficas de África Subsahariana, favorecido por la ausente alternativa económica que pueda ser capaz de suplir, en volúmenes similares, las necesidades de la población local y de una creciente ausencia de confianza en las instituciones por parte de la sociedad.

Estos negocios han convivido a menudo con otro tipo de organizaciones locales que, a pesar de albergar unos objetivos diferentes desde el plano ideológico, encuentran en el negocio de la droga una ventana de oportunidad y los lleva a establecer lazos de colaboración y cooperación con las redes criminales que operan en la región. Es el caso de grupos armados y actores terroristas compuestos por ciertos individuos cuya cooperación con el negocio de la droga se muestra manifiesta y definida. Este vínculo, tal y como recoge el presente informe, sumado a las condiciones actuales en las zonas de paso de las rutas subsaharianas, añade nuevos desafíos para combatir ambos tipos de actividad criminal.

El aumento de la presencia de grupos yihadistas, los cuales están ganando cada vez mayor terreno y espacio de influencia en una buena parte de África Subsahariana en detrimento de las autoridades estatales y otros actores involucrados en la región, llevan tratando en la historia más reciente de consolidar un control y una expansión del territorio, así como de las zonas fronterizas con otros países de la zona. Este es el caso concretamente de las firmas de Al Qaeda y Daesh en el Sahel Occidental, operativas en su mayor parte a lo largo de la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso y con ambición expansiva hacia países como Mauritania, Senegal y los países costeros del Golfo de Guinea. La relación que puedan mantener ambos colectivos criminales supone, pues, una fuente incesante de conflicto e inestabilidad a nivel interno y favorece que el efecto trasnacional del crimen organizado en las porosas y

permeables fronteras africanas se perpetúe en el tiempo.

La presente obra ofrece un marco integral para la comprensión de la relación entre el tráfico de droga y el yihadismo en África, entendiendo tanto el nivel de cooperación como las motivaciones finales para tejer estas alianzas, especialmente por parte del yihadismo, una práctica fundamental a la hora de orientar las líneas de actuación prioritarias en materia de política exterior española en la región y contribuir a la divulgación de conocimiento sobre el fenómeno objeto de estudio. Asimismo, el informe permitirá definir el papel que juega la Unión Europea y España dentro de ella a la hora de minimizar este riesgo potencial para su seguridad nacional y contribuir a su presencia en la zona, estableciendo las líneas de acción estratégicas en materia de lucha antiterrorista, seguridad regional y lucha contra el crimen organizado.

2. PRINCIPALES TENDENCIAS

Se determina un contexto de mayor competencia entre actores terroristas en un entorno de inestabilidad prolongada en África Subsahariana, acentuado por el proceso de globalización imperante durante las últimas décadas, lo que deteriora la situación y evolución de la lucha antiterrorista en la región. Asimismo, se ha determinado una relación de ciertos individuos pertenecientes a organizaciones terroristas y grupos armados con el negocio de la droga, tal y como se verá más adelante, especialmente en África Occidental y más concretamente en la región del Sahel Occidental, el Golfo de Guinea y el norte de África.

Las proyecciones futuras advierten que, para 2030, África será el continente que experimente en mayor medida un consumo de drogas con respecto al resto de continentes, estimando una subida del 40% de población víctima del

consumo de drogas (UNODC, 2021a:3). Sin embargo, el consumo de drogas no es la única tendencia alcista en esta parte del mundo, pues el continente como espacio de tránsito de esta mercancía al resto del mundo es un componente que está experimentando similarmente un fuerte ascenso agravado por las condiciones que ofrecen los espacios por los que transitan. En este sentido, se ha podido constatar una serie de puntos clave en torno a la relación entre ambos grupos criminales en África Subsahariana, una colaboración que resulta inquietante para las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales y regionales.

Uno de los principales riesgos en torno a la cooperación entre el tráfico ilícito de la droga y los movimientos yihadistas es el rol que adopta el primero, pues existen evidencias suficientes para constatar que el negocio de la droga juega un papel preferente tanto para financiar a grupos rebeldes como para financiar la persistencia de una élite política a la que les permite mantenerse en el poder. El caso maliense es el más llamativo y el más revelador: se ha podido constatar una red de tráfico de influencias que ha aupado a diversos individuos o a los propios traficantes en altos cargos políticos del norte del país (International Crisis Group, 2018:15). De trasladar el negocio de la política de la droga al ámbito del terrorismo, existe un riesgo evidente de contar con señores de la guerra fuertes y robustos respaldados por una red de tráfico de droga que les haga aumentar en poder e influencia. En este sentido, el Acuerdo de Paz y Reconciliación de 2015 entre el Gobierno maliense y los movimientos rebeldes progubernamentales en la región septentrional conocida como Azawad, tenía entre sus principales objetivos erradicar esta retroalimentación entre la industria de la droga y el yihadismo. Sin embargo, los recientes golpes de Estado en 2020 y 2021 evocan un incierto panorama de tendencias futuras que alimenta una mayor consolidación de esta cooperación y corre el riesgo de convertirse en una relación simbiótica.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL RIESGO

En la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también conocida como la Convención de Palermo) celebrada en el año 2000 se subrayaba el creciente vínculo entre el terrorismo y el crimen organizado transnacional (UNODC, 2004:2). Este hecho no pasaba por tanto desapercibido en el panorama global y en los instrumentos multilaterales patrocinados por organizaciones internacionales de tan relevante calado mundial como las Naciones Unidas, la cual exhortaba a los actualmente 147 Estados firmantes del tratado a reconocer la existencia de tal vínculo (UNODC, 2004:3). Más recientemente, el informe de la Situación del Terrorismo y Tendencias de la Unión Europea (TESAT, por sus siglas en inglés) de 2021 incidía en la creciente interrelación y nexo entre el crimen organizado y las diferentes tipologías que rodean al terrorismo, aludiendo no solo al terrorismo de carácter yihadista sino también al terrorismo de extrema derecha y de corriente neonazi (TESAT, 2021:83).

Belmojtar ilustra el ejemplo más referente en el vínculo entre el yihadismo y el crimen organizado. Apodado como "Mr. Marlboro", a este terrorista se le atribuyó durante la pasada década actividades de tráfico de cigarrillos, armas, personas y narcóticos, con una importante red de conexiones asentada con los grupos tribales tuareg de la zona a fin de asegurar vías de tránsito de mercancía ilícita que financiara las actividades delictivas del grupo terrorista (UNODC, 2018).

La coexistencia, cooperación e incluso convergencia entre el negocio de la droga y el terrorismo se entienden como fenómenos prolongados en el tiempo y en constante desarrollo, y el fundamentalismo islámico, que a nivel dogmático prohíbe cualquier tipo de uso, venta o consumo de narcóticos, ha terminado por racionalizar esta actividad criminal en aras de una causa mayor y en beneficio de la organización. Se han registrado numerosos casos donde la venta

y el tráfico de cocaína de Colombia servían para los intereses de Hezbolláh, tal y como puso de manifiesto una investigación de fuentes de inteligencia internacionales que reveló cómo el narcotráfico en la triple frontera de América del Sur (Argentina, Paraguay y Brasil) servía como fuente de financiación de la lucha armada del movimiento. Posteriores investigaciones demostraron cómo la vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el movimiento libanés quedó en evidencia, e incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concibió el modus operandi del grupo terrorista como un cártel de droga (Blanco, 2015:13). En el caso del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), el grupo terrorista y separatista kurdo se ha servido del tráfico de heroína, incluyendo su cultivo y distribución, para beneficio de la organización mediante su venta y cobro de peajes en su camino hacia el consumidor final en Europa (Reitano, Clarke y Adal, 2017:18).

Si alejamos el foco de la organización y fijamos la vista en los terroristas autónomos, son numerosos los casos de involucración de los individuos con el crimen organizado convencional, más concretamente con el tráfico de droga. El terrorista suicida de los ataques de París de 2015, Brahim Abdeslam, regentaba un bar en Molenbeek (Bruselas) que fue clausurado por la policía una semana antes de los ataques tras constatar una venta ilegal de drogas en el establecimiento (Cottee, 2016), mientras que varios combatientes que se unieron a las filas de Daesh, en especial aquellos que buscaban operar en territorio europeo, se brindaban de una flexibilidad económica mediante el tráfico de drogas en una fórmula delictiva acuñada como “microfinanciación del Califato” (Ranstorp, 2016:13).

3.1. Yihadismo y narcotráfico: ¿cooperación o dependencia?

De lo anterior se desprende un vínculo entre el negocio de la droga y ciertos grupos terroristas que se han beneficiado de él para financiar sus movimientos insurgentes, aunque no demuestra necesariamente una dependencia del terrorismo en la industria del narcotráfico. En este aspecto, existen dificultades a la hora de encontrar evidencias empíricas de que el narcotráfico sirva como fuente de financiación debido a las limitades capacidades de profundizar en su grado exacto de vinculación, y a menudo resulta complejo incluso demostrar que existe una relación entre ambos (Pagola y Muñoz, 2014). De hecho, la relación de dependencia entre el narcotráfico y el yihadismo es un debate abierto en el seno de la comunidad académica, y a menudo su confluencia termina por no ser una teoría compartida por muchos especialistas. Fuentes entrevistadas por Global Initiative en Bámako (2019) no encuentran una relación directa que implique un aprovechamiento de los ingresos generados por la droga por parte del yihadismo salvo ciertos pagos a cambio de protección a través de las rutas controladas por los terroristas de manera puntual (ENACT, 2020:13). Por el contrario, dichas fuentes afirman que las mayores fuentes de financiación del terrorismo[2] son los secuestros a cambio de un rescate, el patrimonio de ciertos miembros del grupo terrorista o el pago de arrendamientos (ENACT, 2020:13). Por otro lado, fuentes consultadas para este proyecto afirman la utilización de la droga como parte de la microfinanciación que caracteriza a individuos de ciertos grupos terroristas, no tanto a la organización en sí (Comisión General de Información, 2021). Hablaríamos así de una relación de conveniencia, no de un vínculo establecido a nivel formal, para cuya alianza el fenómeno de la globalización ha facilitado la expansión, diversificación e internacionalización de sus actividades delictivas.

2 Para profundizar en la investigación sobre financiación del terrorismo, pueden consultarse las siguientes lecturas recomendadas: Use of kidnapping and extortion as a tool for financing terrorism: the case of the PKK de Koseli et al o Terrorist Financing in West and Central Africa del Grupo de Trabajo de Acción Financiera.

Sin perjuicio de lo anterior, otras fuentes consultadas para este proyecto sostienen que los vínculos sí suponen un problema integral, donde existe un triángulo entre militantes yihadistas, grupos rebeldes y el crimen organizado cuya relación triangular y difusa pone constantemente la voz de alarma al vecindario más próximo por su carácter permeable y ámbito transnacional (Díez, 2021). En este sentido, la mutación que sufren los militantes de un colectivo a otro del triángulo impide conocer con avanzada precisión donde termina el terrorismo y empieza el crimen organizado, lo cual agrava a su vez la capacidad de clasificar tanto la pertenencia a un grupo u otro como el nivel de criminalidad que se desprende de ellos. Esto conlleva connotaciones en múltiples ámbitos, especialmente a la hora de perseguir los delitos asociados al individuo, pues las leyes no son tan punitivas en los delitos relacionados con el crimen organizado como lo son las condenas por delitos relacionados con el terrorismo.

Así, fuentes especializadas en el estudio del fenómeno objeto de estudio alegan que el narcotráfico supone a menudo un balón de oxígeno financiero para el yihadismo, lo que provoca una sintonía y simpatía entre ambos colectivos (Díez, 2021). De hecho, según el informe sobre financiación terrorista del Grupo de Acción Financiera de 2008 (Financial Action Task Force, organismo administrativamente dependiente de la OCDE), se afirmaba que el grado de confianza en el tráfico de drogas como una fuente de financiación terrorista ha ido en aumento a medida que el terrorismo alentado desde el aparato estatal disminuía (FATF-GAFI, 2008:15).

En cualquier caso, un hecho compartido por la mayoría de especialistas conocedores de los vínculos entre el tráfico de droga y el yihadismo es que en caso de existir tal vínculo, no existen evidencias de que los grupos yihadistas como entes organizados realicen por norma general actividades de tráfico de dro-

ga, sino que más bien se limitan a ejecutar las funciones de cobro de peajes y asegurar las rutas de paso de la mercancía ilícita en aquellos espacios bajo su control. Esto sucede en zonas como Gao o Kidal, en la región septentrional de Mali conocida como Azawad, de las que se hablará posteriormente a lo largo de este documento, pero también ocurre en espacios inhóspitos de la geografía libia, los cuales a menudo son complicados de monitorizar y evaluar debido a la elevada carencia de información sobre lo que ocurre en la zona.

3.2. Desventajas de la cooperación entre los cárteles de la droga y el yihadismo

Cuando la insurgencia islamista tomó el control de la Palma, en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, en marzo de 2021, especialistas que seguían de cerca los acontecimientos alertaron de un posible aprovechamiento del tráfico de droga que se sucedía en esa zona por parte del yihadismo (Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2021). Sin embargo, esto no fue así, sino todo lo contrario, pues la red criminal de narcóticos se desvió hacia otras rutas lejos de la insurgencia para asegurar el tránsito de su mercancía.

No existen evidencias de que los grupos yihadistas como entes organizados realicen por norma general actividades de tráfico de droga, sino que más bien se limitan a ejecutar las funciones de cobro de peajes y asegurar las rutas de paso de la mercancía ilícita

Lo anterior revela cómo uno de los principales inconvenientes que se ha detectado a raíz de la investigación sobre el tráfico de drogas y su posible cooperación con la insurgencia islamista radica en el hecho de que los primeros no suelen tener interés en hacer negocio con los segundos. El hecho de que las organizaciones yihadistas sean objetivo constante de operaciones antiterro-

ristas y buena parte de ellos sean vigilados de manera sistemática son dos de las razones fundamentales que frenan una mayor oportunidad de negocio entre ambas partes, aunque no se ha detectado como un impedimento a la hora de producir la droga, pues este negocio sí termina por resultar más rentable con sinergia que sin ella. Además de la vigilancia, un posible trato al crimen organizado como grupo narcoterrorista o con actividades propias de estar relacionadas con el terrorismo tendría serias consecuencias en la aplicación de las leyes competentes, mucho más estrictas que las que combaten el crimen organizado, tanto por la gravedad de sus penas como por la atención pública que el terrorismo suscita con sus actuaciones.

Por otro lado, el terrorismo por su propia naturaleza busca ganar atención mediática y la expansión de su mensaje a cuantos más lugares del planeta mejor, algo que choca frontalmente con la estrategia del narcotráfico que se basa esencialmente en pasar inadvertidos y con una discreción llevada al extremo. Es por todo lo anterior por lo que el trato con dirigentes y la élite política de ciertos países africanos sí constituye un buen nicho de negocio para las organizaciones criminales, ya sea por la permisividad de entrada, salida y circulación de la droga por parte de cierto sector del aparato político como por el apoyo logístico, financiero y operacional así como por la influencia que numerosas personalidades de renombre pueden proporcionar a los narcotraficantes. Por ello, en la práctica se ha evidenciado cómo resulta más conveniente para el tráfico de drogas hacer negocio con ciertos sectores del aparato estatal que con el yihadismo.

Sin embargo, es común encontrar una fórmula basada en la coexistencia entre el tráfico de droga y el yihadismo más que en una cooperación, dándose una situación mediante la cual el terrorismo existe en una zona donde la delincuencia organizada está presente pero que en ningún caso implica una coope-

ración mediante el pago de peajes u otras fórmulas delictivas y mucho menos una convergencia donde crimen y terrorismo se integran bajo un mismo sistema de operación. A pesar de ello, las organizaciones criminales transnacionales reconocen la necesidad de tejer alianzas con grupos terroristas ya sea por protección o por permiso de paso, por conocer la rica y a veces inhóspita geografía del terreno objeto de tránsito y también porque a menudo el terrorismo controla de facto buena parte del territorio considerado como zonas grises o sin autoridad estatal, imponiendo su ley para preservar el orden local, por lo que por activa o por pasiva, la cooperación estratégica entre el narcotráfico y el terrorismo se ha convertido en una realidad a lo largo del tiempo.

Por su parte, el yihadismo también tiene serias limitaciones morales para relacionarse con la industria de la droga, tanto a nivel dogmático en su concepción ideológica de lo que significa la droga y el código moral de sostener a la misma como algo prohibido por el islam como por los efectos que pueda tener sobre su propia militancia el estar ante una exposición tan directa de este tipo de sustancias adictivas y encontrarse así sin un nivel total de convencimiento de su causa yihadista, razón central de su motivación para llevar a cabo la lucha armada. Aun así, no toda consideración del consumo de droga se concibe como algo negativo, y ha sido frecuentemente registrado el uso de sustancias psicotrópicas por parte de grupos terroristas precisamente para que sus combatientes mantuvieran un elevado e intenso nivel de entrenamiento y pudieran así llevar a cabo sus actividades terroristas con éxito (González, 2020). Para los terroristas, las drogas son una sustancia prohibida según su doctrina fundamentalista, considerando pecadores a aquellos que la consuman o se beneficien de ella. Sin embargo, estas consideraciones morales quedan en entredicho cuando el narcotráfico consigue reportar cuantiosas sumas de dinero o armamento que les permiten expandir sus capacidades operativas y recursos humanos. A su vez, y como se evidencia en el ejemplo anterior, el consumo de

narcóticos por parte de su militancia les permite mantener unos niveles de entrenamiento extremos y un control de los combatientes para conseguir dar su máximo en el campo de batalla, un estado mental que sin el consumo de drogas sería prácticamente imposible de asegurar. Por tanto, el beneficio supera al pecado, y existen numerosos registros que evidencian no solo el tráfico sino también la producción de la droga por parte del terrorismo[3].

Actualmente, el terrorismo de corte yihadista controla vastos espacios de la geografía africana, especialmente en el Sahel Occidental, así como las rutas que conectan territorios de África con el continente europeo, por lo que las redes criminales tienen un interés genuino en disponer de algún tipo de pacto con los extremistas y proteger su cargamento mientras transite por estas vías, más cuando se trata de una ruta de tránsito en constante crecimiento. A cambio, los traficantes suelen retribuir este servicio mediante dinero, armas o la misma droga, elementos que pueden ser perfectamente utilizados para llevar a cabo la lucha armada. Por su parte, los grupos yihadistas reciben una cuantiosa suma de ingresos por el cobro de impuestos de circulación de bienes y mercancías, importando relativamente poco el contenido de la misma, por lo que es común ejecutar el impuesto independientemente del cargamento que transporten.

El continente africano presenta así ciertos elementos que hacen idóneo este tipo de realidad, una relación que puede resultar más compleja de establecer en otros escenarios como Europa o Norteamérica, a pesar de que el tráfico de las drogas tenga como ruta de destino principal estos mercados. Por ello, es importante conocer aquellos factores que propulsan este negocio ilícito en el continente africano, unos elementos que no cuentan con un peso homogéneo

3 Los talibán son un grupo que se beneficia directamente del cultivo de opio en Afganistán. Para más información, véase *Cuando el terrorismo se nutre del negocio de la droga: el caso de los Talibán y el negocio del opio en Afganistán* de Ana Aguilera.

en todos los países del continente y razón por la cual su penetración en los sectores de la economía informal son mayores en unos países que en otros.

4. VECTORES DEL NARCOTRÁFICO EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

Según la lógica de la geopolítica de las drogas, Alain Labrousse identificaba en 2011 el control del espacio para el cultivo y tráfico de drogas como una realidad de los movimientos transnacionales donde el foco dejaba de ponerse en cuestiones Estado-céntricas para dejar paso a la actuación de los actores de carácter no estatal (Labrousse, 2011:17). El conflicto de poder emergente entre gobiernos y organizaciones criminales generado por el control de las riquezas de este negocio hace entrever que la realidad se enfrenta a una problemática de carácter multidimensional, cuyas redes y conexiones se pueden llegar a encontrar en puntos distantes que nada tienen que ver con las fronteras políticas establecidas por los países, y donde la transnacionalidad y la mutación se establecen como los puntos débiles para su persecución y posterior enjuiciamiento por las autoridades estatales competentes.

El tráfico de drogas es un negocio tan criminal como lucrativo, con unos beneficios que ascienden a millones de dólares anuales a nivel mundial, lo que ha abocado a miles de individuos a caer en estas redes delictivas y a hacer de este sector de la economía informal su modo de vida. Sus rutas y métodos de tránsito son variados, teniendo como destino final preferente a los países más ricos en Europa y América del Norte. Sin embargo, el continente africano no jugaría un papel de relativo peso hasta mediados de la década de 1980, por lo que organizaciones criminales de todo el mundo han atraído su atención al nicho de negocio en el territorio de África desde hace relativamente poco tiempo.

Desde la década de los 1950 se comenzaba a constatar el papel que jugaban países de África Occidental en la producción y el tráfico de estupefacientes, particularmente de cannabis, para ser exportados a los mercados domésticos (Blanco y De la Corte, 2013:5). A partir de la década de 1980, sin embargo, la región del África Subsahariana comienza a expandirse como espacio de tráfico de una gran variedad de narcóticos, destacando, además del cannabis, la heroína y la cocaína, y siendo a principios del actual siglo cuando esta zona del planeta comienza a constituirse como una importante ruta de paso para la mercancía destinada a Europa sobre todo y a Asia y Norteamérica en menor medida.

4.1. África como espacio proclive a albergar el crimen organizado

El continente cuenta con una serie de factores que incentivan la proliferación del crimen organizado. Es un escenario habitual de tráfico ilícito de mercancía, armas o seres humanos, así como un espacio donde a menudo confluyen grandes infraestructuras criminales que buscan explotar los recursos naturales que se encuentran en su interior.

Cualquier tipo de actividad criminal suele buscar explotar aquellos espacios sin un control estatal efectivo, a menudo denominados como “zonas grises”, unos espacios sin ley donde confluyen zonas fronterizas entre países con una porosidad lo suficientemente extensa como para albergar un aparato criminal que actúe con relativa impunidad al margen de la legislación nacional e instrumentos internacionales o zonas geográficas lo suficientemente extensas y despobladas como para carecer de una fuerza de seguridad efectiva que controle lo que ocurre en su interior. A pesar de este “desgobierno” en los territorios donde a menudo opera la industria del narcotráfico, lo cierto es que estos

sí cuentan con una estructura definida y organizada en cuanto a la cadena de mandos y redes clientelares que les permite protegerse unos a otros de cara a cualquier intento de aplicación de la ley por parte de las autoridades estatales y repartirse los ingresos generados, así como de evadir la responsabilidad o la realidad de los hechos que pretenden denunciar observadores internacionales u ONGs.

En la actualidad, el aumento en el tráfico de droga puede verse reflejado en los niveles de incautaciones oficiales que se han dado en los países de la región de estudio. En la diseminación de las tendencias globales sobre incautaciones de diversos tipos de droga en 2019 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (de aquí en adelante UNODC), se ha podido constatar que diversos países han sufrido un fuerte aumento en la confiscación de diversas sustancias narcóticas. En países del Golfo de Guinea como Ghana o Costa de Marfil, las incautaciones de cannabis y sus derivados han sufrido un incremento de más del 50%, así como en Argelia en la región del Magreb y en el sur de África. Por su parte, la cocaína ha experimentado un gran descenso en comparación con el año anterior en los países costeros, mientras que en el Sahel Occidental y en el Magreb, países como Argelia, Mali, Ghana o Namibia sufrieron un aumento en la incautación de la misma. Finalmente, el tráfico de opiáceos se erige como una de las drogas más notorias en la industria del narcotráfico en el continente, habiéndose confiscado en grandes cantidades en países como Argelia o Ghana y, más especialmente, en Benín.

Los datos más recientes vienen a determinar que sigue habiendo un riesgo latente de tráfico ilícito de narcóticos que usan a varios países africanos como ruta de paso para su consumidor final. Esto a su vez lucra a diferentes organizaciones criminales asentadas en el país, que se aprovechan del ecosistema de crisis social, subdesarrollo endémico, conflictos armados y fragilidad polí-

tica e institucional imperantes en las zonas más porosas del continente africano. Las condiciones económicas que ofrece el negocio de la droga, además, atrae a parte de la sociedad, tanto en el entorno civil como en el ámbito militar, que ven cómo este negocio resulta mucho más provechoso en términos de beneficios económicos en un contexto de pobreza social cada vez más marcado. Aun así, cuando se habla de actores armados involucrados en el narcotráfico, a menudo se habla más de "individuos" involucrados que de "grupos" en su conjunto, de ahí que haya una disparidad y heterogeneidad muy marcada a la hora de definir las rutas de tráfico en África. También incide en este sentido el hecho de que sus rutas de distribución varían frecuentemente, puesto que la utilización de ciertas rutas para los cárteles de la droga a menudo coinciden con las vías de paso de otros negocios criminales como el tráfico de armas o de seres humanos, con una mayor presión policial y por tanto sujetas a experimentar variaciones considerables en los itinerarios de la droga.

De entre todos los factores que inciden en este contexto de desarrollo criminal en África, algunos de ellos convienen ser considerados, especialmente aquellos que facilitan la aparición y consolidación de estas redes delictivas.

Factores geográficos

Una de las principales razones por la cual África se erige como un provechoso espacio para el tránsito y distribución de droga responde al factor geográfico. En el caso de la cocaína, el continente se encuentra más próximo para América del Sur que Europa, y los controles marítimos y aéreos de entrada son menos férreos que los que las organizaciones criminales encuentran en los mercados finales de los países más ricos (Blanco y De La Corte, 2013:14). Asimismo, la facilitación de los contactos y redes de la droga en África proveen a los cárteles extranjeros de cierta protección en las rutas de paso del carga-

mento y en su distribución, que junto con la colaboración de actores locales, son motivos sustanciales que permiten la consolidación del teatro africano como espacio de entrada y salida de la droga hacia los mercados exteriores. Asimismo, la porosidad y permeabilidad de las fronteras y la naturaleza transfronteriza de la actividad criminal acentúan la operabilidad de África como eje conductor del tráfico de drogas, pues el continente cuenta con numerosos espacios inhabitados e incomunicados por donde resulta relativamente sencillo transportar cualquier tipo de cargamento sin ser avistado por las autoridades locales. Los traficantes, por tanto, se benefician de explotar espacios infragobernados o sin ley, operando en unas fronteras permeables con cierta predictibilidad que les permiten alcanzar el siguiente punto de la cadena de suministro.

Factores políticos e institucionales

Al factor geográfico para la consolidación de África como puerta de entrada y salida a los mercados extranjeros de la droga, especialmente hacia Europa, le complementan unas condiciones políticas favorables que juegan un papel importante en el establecimiento de vías de tránsito del cargamento a través de África. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional más reciente, los países de África Subsahariana cuentan con unas cifras preocupantes en torno a los niveles de corrupción percibida: países limítrofes con el Océano Atlántico como Guinea, Guinea Bissau o Liberia se encuentran en las posiciones 150, 162 y 136 respectivamente sobre los 180 países analizados, lo cual indican unos bajos indicadores de transparencia, rendición de cuentas e integridad política de los sectores públicos (Transparencia Internacional, 2021). Los anteriores datos, unidos a una carencia de control a nivel estatal, confluyen negativamente en que el negocio ilícito del narcotráfico prevalezca en su afán por envenenar a los poderes públicos.

Las situaciones de conflictos armados y guerras civiles constituyen similarmente factores facilitadores de la propagación del narcotráfico en vastos espacios de la geografía africana. La crisis política interna imperante en Libia, por ejemplo, con una guerra civil constante desde hace más de una década, una economía frágil y un terreno demasiado extenso como para controlar, contribuyen como factores idóneos para que los traficantes puedan actuar con relativa impunidad. Lo mismo ocurre con el caos y desorden político generado a partir de los sucesivos golpes de Estado en países como Guinea, Chad, Sudán, Burkina Faso o Mali entre 2021 y 2022, generando una serie de conflictos políticos sin resolver y un vacío en un control efectivo del aparato estatal del cual se benefician grupos armados y organizaciones criminales. De hecho, en este último país, existen evidencias que sugieren que la complicidad estatal con el crimen organizado jugó un papel importante en la desestabilización y posterior estallido del conflicto político en la región septentrional del país conocida como Azawad en 2012, por lo que el narcotráfico es capaz de actuar tanto como una causa como consecuencia en la erosión de las instituciones estatales y degradación de las circunstancias políticas que desembocan en conflictos intercomunitarios y crisis internas. La pobre capacidad de control aduanero y fronterizo, unido a la porosidad de las fronteras, la falta de recopilación de inteligencia y una baja priorización de la lucha contra el tráfico de droga completan la realidad favorecedora de este tipo de lucrativos negocios prolongados y extendidos a buena parte de los rincones del continente.

Finalmente, su pasado histórico de países descolonizados y las dinámicas que propiciaron los procesos de independencia de varias naciones africanas siguen actuando como elementos decisivos en la falta de cohesión y unificación de las sociedades y las diferentes tribus étnicas que los aparatos centrales pretenden controlar. Las diferentes realidades históricas que facilitaron la creación de nuevos Estados a menudo han desembocado en países con un

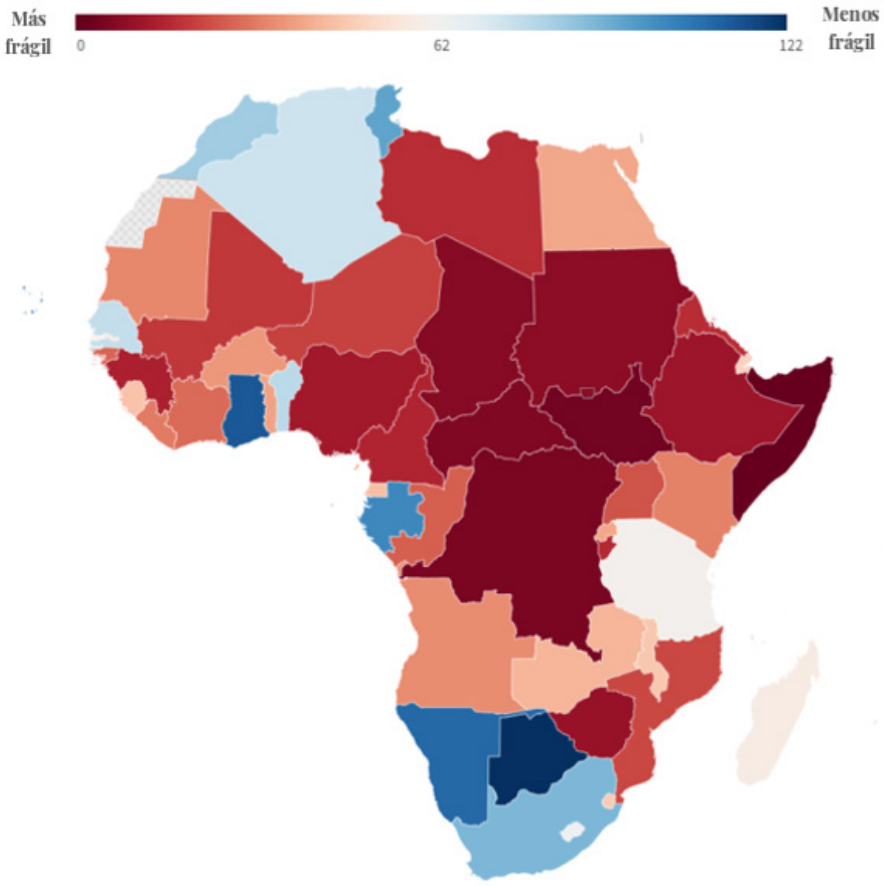
sistema político endeble, una pobreza endémica y unos problemas estructurales crónicos parcialmente influidos por las épocas de esclavitud y altos índices de desigualdad, a lo que en la actualidad se le unen unos bajos índices de gobernabilidad, democracia y unos elementos desestabilizadores como la insurgencia armada y los grupos rebeldes.

En cuanto a las instituciones, países como Nigeria, Mali, Guinea o Guinea Bissau ocupan algunas de las posiciones más altas del ranking en indicadores relacionados con la falta de cohesión (como debilidad del aparato estatal, élites fragmentadas o división de las sociedades), la falta de apertura política que otorgaría una cierta legitimidad estatal con la ciudadanía o la ausencia de una protección y respeto por los derechos humanos fundamentales y la preservación del estado de derecho. Por su parte, los Estados del espacio central y oriental se encuentran en el top 10 de un listado de 180 países en cuanto a fragilidad estatal se refiere, con países como Somalia, Chad o Sudán ocupando la segunda, séptima y octava posición del ranking respectivamente[4] (Índice de Estados Frágiles, 2021). En términos generales, África Subsahariana recibe los peores resultados a nivel cuantitativo, por lo que no es de extrañar que la economía sumergida se encuentre entre los cálculos de ciertos funcionarios gubernamentales y amplios sectores de la sociedad.

4 De los 180 países del mundo a los que el índice hace referencia, se han incluido aquellos comprendidos en el espacio africano donde el que está en el puesto 122 / 180 (es decir, Botsuana), se refleja en el azul más intenso, mientras que el que está en la posición más cercana al 0 (en segunda posición, Somalia) se indica a través del rojo más intenso.

Gráfico 1. Ranking de Estados frágiles en África, 2021

Según su posición en un ranking de 180 países



Fuente: Índice de Estados Frágiles (2021)
Mapa: Elaboración propia

OIET

Existen varios desafíos a nivel político que influyen en la confluencia y expansión de actores no estatales tales como el yihadismo y el crimen organizado. Las turbulentas experiencias políticas de las elecciones en Guinea Bissau en 2020 son un claro ejemplo de este tipo de fenómenos, hasta el punto de encontrar un desgaste en la seguridad y control del país como un elemento desestabilizador e íntimamente relacionado con la inefectividad de las funciones democráticas de carácter público. En el caso particular de este país, hay informes que advierten que el tráfico de droga protegido y alentado desde las altas esferas políticas, especialmente de cocaína, pudiera agravarse después de las disputadas elecciones que se dieron a principios de 2020. No tanto por

la relación del polémico mandatario Umaro Cissoko Embaló sino de su círculo, donde se podría crear un paralelismo con el que se conoce como "el golpe de Estado de la cocaína" del anterior primer ministro del General Antonio Indjai en 2012 (Shaw y Gomes, 2020:4).

En Mali ocurre algo similar, pues élites locales y agentes estatales a menudo deciden entrar en el negocio del narcotráfico beneficiados por sus privilegios de poder político y el beneplácito y protección institucional. En este sentido, los vínculos entre hombres de negocio relacionados con el narcotráfico y alcaldes de la región de Gao, milicias formadas en Timbuktú o individuos clave próximos al anterior presidente Amadou Toumani Touré son algunos de los ejemplos más reveladores de este aprovechamiento político de la protección, gestión y permisión del negocio de la droga, con todas las degradaciones de rendición de cuentas e impunidad percibida que ello implica.

En Mauritania, el sobrino del antiguo presidente y oficial de enlace de la INTERPOL Sid'Ahmed Ould Taya fue acusado de estar involucrado en una transacción de cocaína a través del segundo aeropuerto más grande del país en 2007, mientras que en Níger, operaciones destinadas al contrabando de armas y narcóticos llegaron a vincularse con el asesor del antiguo presidente Mamadou Tandja así como a sugerir que existía una nueva ruta de tránsito entre la capital y Trípoli gestionada por figuras prominentes del partido del gobierno de entonces y antiguos altos mandos de milicias rebeldes tuareg (Lacher, 2013:8). De hecho, en enero de 2022 se incautaron más de 200 kg. de cocaína por valor de más de 8 millones de dólares transportada en un vehículo oficial del alcalde de la ciudad de Agadez, una región situada en el centro del territorio considerada como el epicentro de contrabando de droga y otras mercancías ilícitas del país[5] (REUTERS, 2022).

5 Para ampliar: Destrijcker, L. *Welcome to Agadez, smuggling capital of Africa* en Politico.

La Declaración de Praia en las Elecciones y Estabilidad en África Occidental de 2011 ha sido uno de los avances que materializa la denuncia de la Conferencia Regional que tuvo lugar en Cabo Verde, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas en África Occidental, sobre las posibles relaciones entre el poder político y el tráfico de droga en ciertos países objeto de estudio. También recopilaba en sus recomendaciones la necesidad de prevenir la financiación de partidos políticos y sus campañas por redes criminales, en particular de las redes de tráfico de drogas (UNOWA, 2011:3). Así con todo, los numerosos episodios registrados entre el tráfico de droga y altos cargos de la élite política africana evidencian un problema mucho más allá de la oportunidad y el clientelismo, y termina por convertirse en unas prácticas abusivas de empleo relativamente continuado y en ausencia de una rendición de cuentas efectiva.

Factores sociales y económicos

Los factores sociales resultan determinantes y contribuyen de una manera sustancial en el análisis de los vectores del narcotráfico en el espacio que nos ocupa. El desencanto de la clase social en el discurso político constituye uno de los principales factores que contribuyen a la perpetuación de este tipo de economía informal, una frustración que encuentra consuelo en la narrativa de los cárteles de la droga que aseguran bonanza, desarrollo y prosperidad a la población local. El negocio de la droga es tan lucrativo como peligroso, pues alberga serios riesgos tanto para la seguridad de los países y sociedades afectadas como para la salud global. El primer factor responde a la dependencia de este tipo de actividad criminal como método de supervivencia socioeconómica en la población, que termina por ensombrecer otro tipo de actividades que contribuyen a la economía local y perjudica a la estabilidad y la prosperidad de los países afectados. El segundo factor está ligado al empobrecimiento de la calidad de vida, así como a factores demográficos en declive y una buena

parte de la sociedad con graves problemas de enfermedades y adicción que a la postre pueden derivar en riesgos para la productividad humana y unos costes económicos que pondrían en grave riesgo el futuro laboral de la mano de obra del país y una carga para los servicios públicos, especialmente en los países más vulnerables.

A nivel económico, desde la última década los países subsaharianos llevan experimentando unas fluctuaciones a la baja en cuanto al porcentaje de crecimiento de su PIB anual, situándose en un 1.15% en 2016, una cifra muy lejana de la que registraban a principios del presente siglo, cuando creció un 6.65% en el año 2002. En 2020, de hecho, este porcentaje es negativo (-2.01%), lo cual evidencia un progresivo deterioro del desarrollo de las economías africanas y un balance negativo en cuanto a prosperidad económica se refiere (Banco Mundial, 2021a). Para 2030, el Banco Mundial estima que dos tercios de la población más pobre vivirá en condiciones frágiles y en situaciones aquejadas por los conflictos, lo cual sumado a la débil gobernanza local, constituye la tormenta perfecta para la proliferación de redes ilícitas de la economía informal (UNODC, 2021b:6).

Si tenemos en cuenta los indicadores que evalúan la salud, educación e ingresos, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés) ofrece unas cifras similarmente desalentadoras para la región de estudio. Según se estimó en su informe más reciente, la región del África Subsahariana fue la región que menos IDH registró en el año 2019 en todo el planeta, encontrándose la mayor parte de los países catalogados con un "desarrollo humano bajo" en África Subsahariana, a excepción de Haití, Afganistán y Yemen (UNDP, 2020:277).
El balance económico y social, acentuado desde la irrupción de la crisis sanitaria global de la COVID-19, genera a menudo unos sentimientos de margina-

lización y vulnerabilidad generalizados que provoca la búsqueda de fuentes económicas alternativas, una necesidad a menudo aprovechada por las redes ilícitas de tráfico de drogas y para la cual todavía se espera que evolucione de manera desfavorable hasta que los distintos países puedan implementar políticas de recuperación efectivas y restauradoras.

Factores demográficos

La inmersión del tráfico de las drogas en el espacio subsahariano ocurre en un contexto de exponencial crecimiento demográfico en el continente. En la región del África Subsahariana que nos ocupa, se pasó de 383 millones de habitantes en 1980 a 665 millones en el 2000. A fecha de 2020, la cifra se ha duplicado hasta alcanzar los 1.136 millones de habitantes, con una proyección que no hace más que mantener la misma tendencia alcista (Banco Mundial, 2021b).

En países como Níger, la tasa de fertilidad llegó incluso a los 7.4 hijos por mujer en 2017, lo cual supone un problema para los gobiernos a la hora de tomar medidas que fomenten el desarrollo económico, alivien la presión migratoria y creen oportunidades laborales que alejen a la sociedad de potenciales reclutamientos de jóvenes y niños por parte de actores armados y grupos terroristas (UNODC, 2017a:3).

En términos generales, la población en África se ha duplicado en número durante los últimos 30 años, llegando hasta los 1.3 billones de habitantes, y se prevé que esta cifra volverá a duplicarse en los próximos 30 años. Con la mitad de su población menor de 20 años, se teme que la falta de oportunidades laborales y desarrollo económico, unido a una desorbitada presión migratoria,

pueda provocar que niños y jóvenes se vean abocados al crimen organizado, violencia y abuso de drogas (UNODC, 2021b:6).

Los anteriores factores contribuyen a limitar sustancialmente el control efectivo sobre lo que ocurre a nivel transnacional en este espacio geográfico, convirtiendo a la región de África Subsahariana en una fuerte candidata a añadir el narcotráfico a su larga lista de problemas estructurales y vulnerabilidades nacionales. La imposibilidad de monitorización y control sobre la magnitud del problema, especialmente en las rutas más remotas, favorece la consolidación de estas zonas grises de tránsito de mercancías ilícitas. Por tanto, al desplazar el narcotráfico a la autoridad estatal de la ecuación, obtenemos el siguiente desafío al que se encuentra el narcotráfico en su consolidación de las rutas de tránsito a través de África: la protección de la mercancía.

Asegurar el cargamento en su vía hacia el consumidor final, así como disponer del apoyo logístico necesario, no es tarea fácil en un contexto donde confluyen una gran variedad de actores con unos intereses divergentes, y el desconocimiento de las dinámicas locales por parte de los cárteles extranjeros les obliga a establecer pactos de colaboración con aquellos conocedores del terreno. Así, la naturaleza eminentemente lucrativa en el negocio del crimen organizado termina por verse envuelta en conflictos locales, intereses políticos y financiando directa o indirectamente a ciertos grupos no estatales a cambio de protección, grupos que son a menudo de carácter armado y emplean la violencia para conseguir sus objetivos.

4.2. Los distintos actores relacionados con el narcotráfico

Los traficantes son capaces de adaptarse a nuevas realidades y circunstancias, tal y como quedó de manifiesto con el cambio de régimen que se dio en Mali tras el colapso del aparato político en 2012. Cuando el yihadismo se impuso en pueblos y aldeas, aquellos involucrados en el tráfico de drogas fueron capaces de recalibrar sus fuerzas y continuar su actividad, especialmente entre la tribu Lamhar, perteneciente al subgrupo árabe Tilemsi, alineados con el terrorismo local. Una vez las tropas internacionales lideradas por Francia irrumpieron en el teatro regional bajo la Operación Serval para restablecer el orden político maliense en 2013, los señores del narcotráfico consiguieron alinearse con las fuerzas extranjeras y mostrarse indispensables en su afán por luchar contra el yihadismo en el país (ENACT, 2020:10). Actuar como un mercenario a la voluntad del actor victorioso del momento les ha permitido, sin lugar a dudas, establecerse como una de las fuerzas más activas y dinámicas de la región septentrional del Estado saheliano.

Uno de los elementos que complica el análisis del tráfico de drogas en África Subsahariana, más concretamente en el Sahel Occidental, reside en la multitud de actores que forman parte de este entramado delincuencial, actores con distintos intereses y capacidades y que a menudo encuentran una relación con actividades criminales más allá del tráfico de droga, incluyéndose también contrabando de cigarrillos, armas o seres humanos.

Por un lado se encuentran individuos pertenecientes a la esfera política, los cuales a menudo son los actores preferentes por parte del crimen organizado por su elevado nivel de influencia y poder y su alta capacidad de discreción a la hora de contribuir a la red del narcotráfico. Desde alcaldes hasta presidentes y líderes de importantes movimientos políticos se han encontrado

envueltos en operaciones que han incautado elevados niveles de droga en países como Níger, Mali o Guinea-Bissau, sin contar con todos aquellos que continúan haciéndolo de manera clandestina o con un alto blindaje del poder judicial. Los elevados niveles de corrupción y clientelismo contemplados en el apartado cuarto del presente documento confirman la enorme capacidad del narcotráfico para obtener colaboradores institucionales sobre el terreno, que suelen variar dependiendo del país y del grado de colaboración real que se manifieste entre ambos, pudiendo encontrarse una colaboración mediante sobornos puntuales a autoridades aduaneras o patrullas locales hasta auténticas simbiosis entre el crimen organizado y la propia institución del Estado, como ha ocurrido en Guinea-Bissau (Blanco y De la Corte, 2013:19).

Por otro lado encontramos casos de colaboraciones entre grupos rebeldes e industrias del narcotráfico, donde los primeros aseguran la protección del cargamento a cambio de armas o blindan a individuos de interés para que tengan el suficiente poder como para seguir ofreciendo vía libre al flujo de droga a través de los territorios bajo su dominio y control, casos que se expondrán en la sección séptima del presente documento. Además de actores intervinientes en las dinámicas políticas de los países, los grupos terroristas también cuentan con ciertas figuras que ejercen un papel relevante en el entramado del tráfico de drogas en el tablero africano. Tal y como se examinará de manera sustancial a lo largo de los siguientes apartados, grupos como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Ansar al-Din o MUJAO (Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental, rama que se escindió de AQMI) han registrado vínculos con el tráfico de droga a cambio de dinero, armas e influencia.

Finalmente, los colaboradores y las redes criminales locales asentadas en África Subsahariana permiten a los cárteles extranjeros de droga introducir su cargamento y confiar en estas redes para distribuir su mercancía, conexio-

nes que a menudo se nutren de lazos y vínculos de amistades o de parentesco con un nivel elevado de hermetismo que dificultan a las fuerzas de seguridad llegar hasta ellas. Los casos de Nigeria, Ghana o Guinea-Bissau son un buen ejemplo de ello, con unos colaboradores que a menudo se dispersan y mimetizan con el entorno y consiguen servir como eficientes intermediarios para el tráfico de droga en el interior del continente.

El crimen organizado transnacional a menudo confluye con otros actores locales que poseen una agenda de intereses y motivaciones contrapuestas, mutuamente excluyentes, pero también saben sacar provecho de los beneficios económicos provistos del negocio del narcotráfico. Se trata de clanes y grupos étnicos influyentes en las dinámicas de las regiones donde habitan, añadiendo una dimensión étnica al conflicto y la lucha por los beneficios del tráfico de drogas. El ejemplo de Mali también se presenta revelador en este sentido, llegando a observarse una cooperación entre actores locales de las tribus árabes y tuaregs mayoritariamente, que han mantenido posiciones antagónicas en el pasado: en el caso de Ahmoudou Ag Asriw, Jefe del Estado Mayor militar del Grupo de Autodefensa y Aliados Imghad Tuareg (GATIA, por sus siglas en francés), se estableció un vínculo cooperativo con redes vinculadas a la Coordinación de los Movimientos de Azawad (CMA) para transportar conjuntamente remesas de hachís (fórmula concentrada de la resina de la planta del cannabis) a través de las regiones de Gao y Kidal entre 2018 y 2019, a pesar de mantener ambos posturas rivales en el marco de los Acuerdos de Paz y Reconciliación de Mali de 2015 (Tinti, 2020:11). Años antes, en 2010, el alcalde de Anafis y líder de la comunidad Kounta, una de las tribus tradicionalmente más importantes del norte del país, Baba ould Sidi Elmoctar, era secuestrado de su residencia por miembros de las tribus árabe Tilemsi y tuareg Imghad como represalia por una emboscada, liderada por su hijo, contra un

convoy controlado por estos que transportaba armas automáticas y cocaína (The Guardian, 2010).

Además de actores políticos y grupos yihadistas, hay que añadir una tercera parte que contribuye a desestabilizar el contexto de seguridad: la violencia intercomunitaria. Grupos y milicias de autodefensa que se ven forzados a armarse como fórmula de protección frente a los ataques terroristas que se dan en sus tierras y contra su población. En Mali, y en ausencia de fuerzas estatales eficaces para combatir el terrorismo, milicias comunales como Dan Na Ambassagou o "cazadores" locales compuestos por comunidades dogon y bambara se organizan para llenar el vacío dejado por el gobierno, presentándose como la autoridad alternativa de facto para la comunidad local con una creciente presencia y expansión que aporta una perspectiva étnica en el contexto de degradación de la seguridad regionales. Mientras que los yihadistas constituían el objetivo principal de Dan Na Ambassagou, el hecho de que los primeros sean principalmente de etnia fulani ha dado lugar a partir de 2018 a la persecución de civiles y personas inocentes pertenecientes a esta etnia por su supuesto apoyo a los grupos islamistas (International Crisis Group, 2020:13).

Además de los militantes de Dan Na Ambassagou, también existen otros cazadores locales en zonas de las regiones de Segou y Mopti. Compuestos por comunidades dogon y de habla bambara, estos volátiles milicianos realizan ataques deliberados contra las comunidades fulani y tuareg, operando principalmente en Niono y Macina (Segou) y Djenné (Mopti). Son autores de casi dos tercios del total de ataques ocurridos en 2021 cometidos por las milicias de base comunal, lo que pone de manifiesto el potencial de crecimiento de la escalada de violencia intercomunitaria y étnica de las milicias en la actual Mali. Aunque las milicias dogon comparten objetivos con Dan Na Ambassagou, las

primeras se centran en atacar a pastores, agricultores y civiles de etnia fulani presumiblemente como extorsión por negarse a dar dinero a su causa, pero no comparten la violencia contra la población por no unirse a su causa como el segundo.

El objetivo de ambos, teniendo en cuenta tanto los ataques de 2021 como en años anteriores, es el pueblo peul. Los peul – o fulani – han experimentado una oleada de violencia sin precedentes contra sus comunidades ante la pasividad de las autoridades, y representan el grupo más marginado por motivos étnicos en la actualidad. Las comunidades fulani se consideraban como uno de los grupos más numerosos y arraigados de Mali no hace mucho tiempo, mientras que hoy constituyen el grupo étnico más perseguido. Se les acusa constantemente de proteger a los yihadistas, puesto que la mayoría de ellos son de etnia fulani, y terminan por ser señalados como el enemigo por las milicias dogon, en particular por Dan Na Ambassagou. Lo anterior parece indicar que el conflicto prolongado y el panorama de violencia política en Mali está contando cada vez con más actores violentos y grupos armados que ponen en entredicho la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad malienses, en medio de un estado de retroceso social y económico que lejos queda de resolverse por parte de la clase política.

Existe una opinión mayoritariamente apoyada por especialistas y observadores internacionales operativos en Mali en relación a la incorporación del negocio de la droga en redes superpuestas a nivel subregional (Tinti, 2020:11), y no como tónica general por parte de uno u otro actor. Y lo cierto es que la penetración del crimen organizado en ciertas áreas ejerce un efecto llamada a otros tipos de actividades criminales que facilitan la consolidación de una economía ilegal realmente regulada en leyes no escritas dependientes de redes de patronazgos y vínculos personales, lo cual hace pensar que realmente

el poder reside en la capacidad de influencia individual de los líderes de comunidades y grupos locales, un poder del cual carecerían en caso de cesar sus vínculos comerciales con el tráfico de la droga. Por ello, el fenómeno se vuelve complejo de erradicar, en tanto que el crimen organizado ofrece una relevancia política y social y unos beneficios económicos que no son posibles de encontrar por otros métodos de relevancia pública o medios formales económicos.

Así, ciertos individuos pertenecientes a los actores que intervinieron en los Acuerdos de Paz como la Plataforma o la CMA y grupos armados se entrelazan e interactúan en una especie de neutralidad estratégica mediante alianzas de conveniencia que les brindan una multitud de privilegios tanto para los propios individuos como para su causa, y facilitados por una serie de riesgos manifiestos en el actual contexto de inseguridad, especialmente en lo concerniente a la amenaza yihadista.

5. LA AMENAZA YIHADISTA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

Las milicias rebeldes y la insurgencia islamista que opera en buena parte del continente africano han desafiado numerosas misiones de mantenimiento de la paz y fórmulas militares de países y coaliciones tanto a nivel regional como a nivel internacional que siguen trabajando para tratar de mantener unos mínimos parámetros de seguridad y estabilidad en los lugares de conflicto. La historia y las transformaciones sociopolíticas experimentadas en el continente africano, sumado a la actividad histórica más reciente que ha azotado a numerosos países que componen el Sahel, hacen que este espacio se presente no solo como uno de los espacios de droga frecuentemente transitados, sino también un importante foco de presencia yihadista en el continente. En este sentido, los análisis más recientes han llegado a apuntar a la región del Sahel

como el epicentro de la actividad yihadista global en la actualidad (Igualada, 2021:12), desplazando el centro gravitatorio de su fuerza observada en ciertas zonas de Siria e Irak a lo largo de la década pasada para trasladarla en clave regional y descentralizada a puntos calientes de la geografía subsahariana.

La actividad yihadista en los países que componen la región del Sahel se ha multiplicado casi por siete desde el año 2017, identificando los dos principales focos de actividad en la región de Liptako-Gourma y la cuenca del Lago Chad. En el primer foco, la región también conocida como la "Triple Frontera" engloba las zonas fronterizas entre Mali, Níger y Burkina Faso, donde el terrorismo de carácter yihadista perpetró más de 600 ataques solo en 2020, cobrándose la vida de más de 1.800 personas (Igualada, 2021:17-21). En la cuenca del Lago Chad, donde hacen frontera Nigeria, Níger, Chad y Camerún, los ataques ascienden a más de 500, con un balance total de alrededor de 2.500 víctimas (Igualada, 2021:17-21).

Los dos movimientos terroristas transnacionales de mayor actividad en la región del Sahel Occidental son Al Qaeda y Daesh, ambos operando a través de sus filiales o ramas territoriales. En la zona de Liptako-Gourma, Al Qaeda lo hace a través del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (también conocido como la coalición JNIM, por sus siglas en árabe), mientras que Daesh tiene desplegada su rama territorial del Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS). En la cuenca del Lago Chad, el grupo armado local Boko Haram y la filial de Daesh Estado Islámico de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) son los dos grupos que se disputan el dominio territorial, acentuando un elevado nivel de violencia y conflictividad en Nigeria, Níger y Chad.

Los análisis más recientes han llegado a apuntar a la región del Sahel como el epicentro de la actividad yihadista global en la actualidad

En Mali, el estallido del conflicto político durante 2012 permitió que grupos yihadistas se aliaran con movimientos separatistas de la región septentrional del país conocida como Azawad. En su afán por ejercer su derecho a la autodeterminación, el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) se alió con Ansar al-Din (también conocido como "Defensores de la Fe"), un grupo tuareg terrorista liderado por Iyad Ag Ghali. El objetivo de esta organización, que buscaba establecer un Estado de corte islámico en Mali regido por la sharia, le llevó a emprender una serie de episodios violentos contra todo aquel que supusiera un obstáculo para sus intereses, en particular los civiles occidentales y las fuerzas de paz.

Su alianza con el MNLA permitió la toma del norte de Mali tras el golpe de Estado de 2012, estableciendo un Estado Islámico de Azawad en el norte. A partir de entonces, surgieron una serie de discrepancias entre los grupos rebeldes y los actores terroristas, ya que estos últimos se mostraron reacios a gobernar en un Estado no secular, y las alianzas se reconfiguraron significativamente a medida que el MNLA perdía el control del territorio que acabó bajo el dominio y la influencia de Ansar al-Din. La Operación Serval liderada por Francia y las tropas internacionales frenaron al grupo yihadista en 2013, expulsándolo de su dominio territorial. Reflejando estrechamente la agenda ideológica del islamismo radical, una vez expulsado Ansar al-Din terminó fusionándose con otros grupos afines, fundando el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, o coalición JNIM. La presencia de JNIM desde su concepción en 2017 se ha fortalecido en el corazón del país y en la región de Liptako-Gourma, especialmente como consecuencia de los enfrentamientos con EIGS, su rival regional, a lo largo de 2019 y 2020. Aparte del EIGS, JNIM ataca principalmente a militares extranjeros y a milicias comunales, aunque los civiles constituyeron casi una cuarta parte del total de víctimas de sus ataques en 2021. Ansar al-Din, como parte de la coalición JNIM, no ha cesado su panorama de perspectivas

de violencia yihadista, centrando su actividad en la región desértica del norte de Kidal, zona cercana a Gao que una vez estuvo bajo su dominio, y desempeña un papel importante en el avance de la agenda ideológica de la coalición JNIM hasta la frontera con Argelia.

En Mali, el movimiento terrorista más activo en términos cuantitativos es Katiba Macina. Dirigido por Amadou Kouffa, el grupo ha consolidado su campo de operaciones en la región de Mopti, en el centro del país. A pesar de formar parte de la coalición JNIM, la fuerza del grupo se proyecta de forma autónoma para distinguir sus ataques del resto de la organización.

La actividad de Katiba Macina comenzó a percibirse con mayor intensidad en 2015, cuando reivindicó un ataque conjunto con Al Murabitún contra el hotel Byblos de Mopti (Le Roux, 2019). Desde su concepción, los atentados bajo su firma han tenido como objetivo a civiles y a las milicias étnicas que operan en la región, especialmente las milicias de autodefensa dogon y bambara por un lado y Dan Na Ambassagou, también dogon, por otro. Katiba Macina ha conseguido refugiarse en las regiones centrales del país, Mopti y Segou, en parte aprovechando las vulnerabilidades y los conflictos intercomunitarios derivados de la percepción de falta de justicia social y de gran desafección, a lo que debe añadirse el descontento de las minorías más marginadas y perseguidas, especialmente la población local fulani. Se prevé que la tendencia de los atentados de Katiba Macina y su organización matriz, la coalición JNIM, aumente aún más la amenaza yihadista hacia los países vecinos, especialmente hacia Mauritania, Senegal y los países del Golfo de Guinea, a pesar de la presión genuina de las fuerzas de seguridad malienses e internacionales sobre el terreno.

Tanto JNIM como los grupúsculos que componen esta franquicia de Al Qaeda en el Sahel Occidental no quedan exentos de enemigos armados. La coalición lleva haciendo frente desde 2018 a su principal adversario en términos de poder, influencia y territorio: el EIGS, la huella de Daesh en la región. El EIGS reivindica su presencia en el enclave de Mopti, en Tombuctú y en las regiones de Gao, especialmente en esta última. El grupo tiene como objetivo predominante a los civiles como extorsión por no unirse al movimiento, pero también entra en confrontación abierta con su rival regional, la coalición JNIM y sus ramificaciones. No es muy activo en comparación con sus adversarios, pero su fuerza ha crecido sustancialmente en Mali desde la concepción del grupo en 2015, ampliando sus operaciones territoriales desde la zona de Liptako-Gourma hacia el este.

El contexto de proliferación yihadista creciente resulta incuestionable tanto para Mali como para su vecindario más cercano desde 2012, y la competencia por las áreas de influencia de unos grupos y otros ha terminado por deteriorar el entorno de seguridad en buena parte del país y de los países más cercanos, especialmente en Níger y Burkina Faso.

En Nigeria, Boko Haram tiene desplegado un largo historial de ataques terroristas desde su concepción en 2002. Centrado en los secuestros a cambio de rescates, el grupo consiguió ganar una gran atención mediática en el 2014 durante el secuestro de más de 200 niñas de un orfanato en Chibok, de las cuales habría liberado a la mitad. Boko Haram mantiene una intensa actividad terrorista en la triple frontera entre Nigeria, Níger y Chad, siendo en 2020 la organización que más ataques perpetró en el panorama de violencia yihadista registrado en África Subsahariana (Summers, 2021:51). Sin embargo, su principal rival regional, el Estado Islámico de África Occidental (ISWAP), ha logrado recientemente debilitar a Boko Haram en capacidad, recursos y moral,

especialmente tras la muerte de su líder Abubakr Shekau en 2021, autoinmolado tras rechazar someterse a su captura por parte de ISWAP, lo cual habría otorgado al segundo una mayor presencia en buena parte del territorio previamente dominado por Boko Haram (Summers, 2022:66). Desde entonces, los enfrentamientos y la expansión de la violencia no hacen más que acelerar el contexto de degradación en la seguridad en el extremo norte del país, con un volumen de víctimas que ascendió a 767 en el año 2021.

Finalmente, Burkina Faso representa a día de hoy el país del Sahel Occidental más perjudicado en términos de actividad yihadista, asumiendo un tercio de los más de mil ataques registrados en esta región (Summers, 2022:76). Con una fragilidad estatal manifiesta y una incapacidad de las fuerzas de seguridad de responder ante el avance yihadista de JNIM y EIGS, a lo que se añaden los recientes golpes de Estado tanto en este país como en sus vecinos Guinea, Chad, Sudán o Mali, Burkina Faso se enfrenta a un riesgo crítico de proliferación yihadista que lo posicione, en ausencia de orden y estabilidad en la gobernanza, en el primer puesto de la escala de países africanos más golpeados por el terrorismo en los próximos años.

En el espacio central del continente, a lo largo de 2021 se ha producido una irrupción de organizaciones transnacionales que hasta la fecha no habían tenido una presencia tan marcada. Ha ocurrido en países como República Democrática del Congo y Uganda, que han sufrido los primeros atentados suicidas vinculados a Daesh en el año 2021. Por su parte, Sudán también ha sido blanco de ataques por parte de Daesh, mediante su franquicia de Estado Islámico en África Central (o ISCAP), lo cual revela que el germen yihadista continúa su expansión territorial en espacios cada vez más extensos de la geografía africana (Aguilera, 2022:139).

El yihadismo en África se ha convertido a lo largo de los últimos años en un fenómeno diversificado e híbrido que ha conseguido mimetizarse en las dinámicas locales de las zonas de conflicto y alimentarse de sus vulnerabilidades a nivel social y económico. Sin embargo, no suele contar con un amplio respaldo de la sociedad local. En muchas ocasiones es la propia población, junto con las fuerzas de seguridad del Estado, las principales víctimas de los ataques, mientras que en otros casos la negativa de engrosar las filas de los grupos terroristas por parte de los civiles provoca que los yihadistas realicen masacres y ejecuciones públicas, especialmente de los más jóvenes delante de sus familias y amigos, a modo de castigo ejemplarizante para aquellos que pretendan negarse a formar parte de la actividad armada.

Un ejemplo del pánico y rechazo social a los grupos terroristas ocurre en la zona norte de Mali, uno de las focos de conflicto más aquejados por el auge del fundamentalismo islamista. En este espacio hay una ausencia de base social que apoye el movimiento, fuertemente golpeado por la inestabilidad y conflictividad, lo cual impide al yihadismo conseguir recabar los apoyos necesarios para llevar a cabo su lucha armada y hace que la sociedad local termine por convertirse en las víctimas en primera línea de este conflicto. En la región de Liptako Gourma, que junto a la zona de la cuenca del Lago Chad representan los dos focos más intensos de actividad yihadista en el continente africano, el yihadismo no se recibe positivamente por parte de la sociedad local, por lo que por el momento no se puede hablar de un apoyo social a la militancia yihadista (Díez, 2021). Sin embargo, eso no necesariamente se traduce en un apoyo a las instituciones estatales del gobierno maliense, a quien se le atribuye una sistemática incapacidad de control y consecuente abandono de la zona norte del país que hace proclive el ascenso del yihadismo por la zona gris que provee este espacio de grupos armados y movimientos yihadistas.

La región del cuerno de África tampoco queda exenta de la virulencia yihadista. El grupo local Ansar al Sunna en Mozambique (también conocido como Al Shabaab a nivel local, vinculada a ISCAP) continúa sembrando el pánico entre la población, beneficiado por la desintegración política del país. La violencia de este grupo terrorista ha terminado con la vida de más de 2.600 personas, causando una situación de inseguridad e inestabilidad crónicas en la provincia costera mozambiqueña. En Somalia, el movimiento Al Shabaab muestra una voluntad expansionista en este Estado, catalogado como fallido durante varias décadas, que pone en grave riesgo la seguridad y estabilidad de su vecindario más próximo.

El yihadismo en África se ha convertido a lo largo de los últimos años en un fenómeno diversificado e híbrido que ha conseguido mimetizarse en las dinámicas locales de las zonas de conflicto

El norte de África no se puede definir como una región con características homogéneas en torno al fenómeno terrorista, pero en términos comparativos con regiones como el Sahel Occidental o el cuerno de África, el Magreb experimenta un periodo de cierto alivio de actividad yihadista en los últimos años. Libia sigue liderando la comparativa de países más golpeados por la violencia yihadista en la región, aunque sus cifras no son tan elevadas si lo comparamos con los registros de mediados de la década anterior. A Libia le siguen Argelia y Túnez, mientras que Marruecos solo ha contado en 2020 con un ataque terrorista en casi dos años y ninguno ha sido registrado en 2021 (Summers, 2022:68). La relativa calma en cuanto a la actividad yihadista en la región del norte de África se explica en gran medida por la intensa lucha antiterrorista de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales, que han conseguido desbaratar un gran volumen de planes de células terroristas durante los últimos años. Un ejemplo de ello ocurría en diciembre de 2021, en el marco de una

operación en diversas ciudades marroquíes que permitió el arresto de docenas de militantes de Daesh (Kasraoui, 2021). Este elevado nivel de combate contra el terrorismo proporciona una gran estabilidad para la región y para su vecindario más cercano, especialmente en Europa. De hecho, la proximidad geográfica hace del Magreb una región de interés para España y Europa en su conjunto, por lo que la inestabilidad sufrida por la constante amenaza yihadista sobre zonas fronterizas, como el área de Liptako-Gourma o la cuenca del Lago Chad, implica tanto un desafío en términos de ataques a intereses regionales como por el desplazamiento del terrorismo hacia el espacio europeo, proyectando un riesgo que por su carácter transnacional y variables locales se hace complicado de erradicar (DSN, 2021:48).

Ciertos focos de actividad y conflictividad armada presentan a África Subsahariana como un espacio en constante amenaza terrorista e intercomunitaria, limitando las labores de protección de las fuerzas de seguridad y menoscabando una seguridad y estabilidad que permita a los países afectados impulsar unas capacidades de desarrollo económico próspero. Esta amenaza potencia a su vez otra serie de actividades criminales que como el tráfico de droga se benefician del caos y la inestabilidad reinantes en espacios fronterizos y vastas áreas deshabitadas, por lo que resulta esencial analizar, teniendo en cuenta el actual contexto de proliferación yihadista y los vectores que facilitan la penetración del crimen organizado, las principales tendencias que se desprenden de estos flujos de actividad.

6. ANÁLISIS DE TENDENCIAS ACTUALES DEL TRÁFICO DE DROGAS

Desde el cambio de siglo, el continente africano se ha convertido en un espacio creciente de tránsito global de un gran volumen de drogas, con unas redes criminales establecidas desde varias décadas atrás que han permitido a su vez un mercado pujante con un consumo doméstico en desarrollo (INTERPOL y ENACT, 2018:10). Las zonas grises con bajo o nulo control estatal y la porosidad de las fronteras de ciertos países pertenecientes a la franja del Sahel o al norte de África son potenciadores en el impacto de un crimen organizado tan vasto como exponencialmente continuado, operando en un entorno de grupos criminales, milicias rebeldes y organizaciones terroristas asentadas en la zona.

Durante la década de 1990, el recorte de presupuesto para el subsidio argelino causó un gran revuelo en términos económicos, pero el embargo impuesto en Libia favoreció la consolidación del contrabando de armas en el triángulo fronterizo entre Argelia, el norte de Níger y Mali que venía cimentándose varios años atrás y supliría las carencias de ingresos provenientes de otras fuentes de la economía formal (Lacher, 2012:9). Este contrabando sigue a fecha de hoy, intensificado con el conflicto político imperante en el norte de este último, y al igual que el tráfico de drogas, el contrabando de armas, cigarrillos o tráfico de personas se han convertido en negocios enriquecedores en la región que conviven con la economía formal y, en varios casos, la sustituyen.

En términos generales, son tres los principales grupos de droga transitados de manera ilegal a lo largo y ancho de África: el cannabis (tanto la planta como la resina), los opiáceos (predominantemente la heroína) y la cocaína, monito-

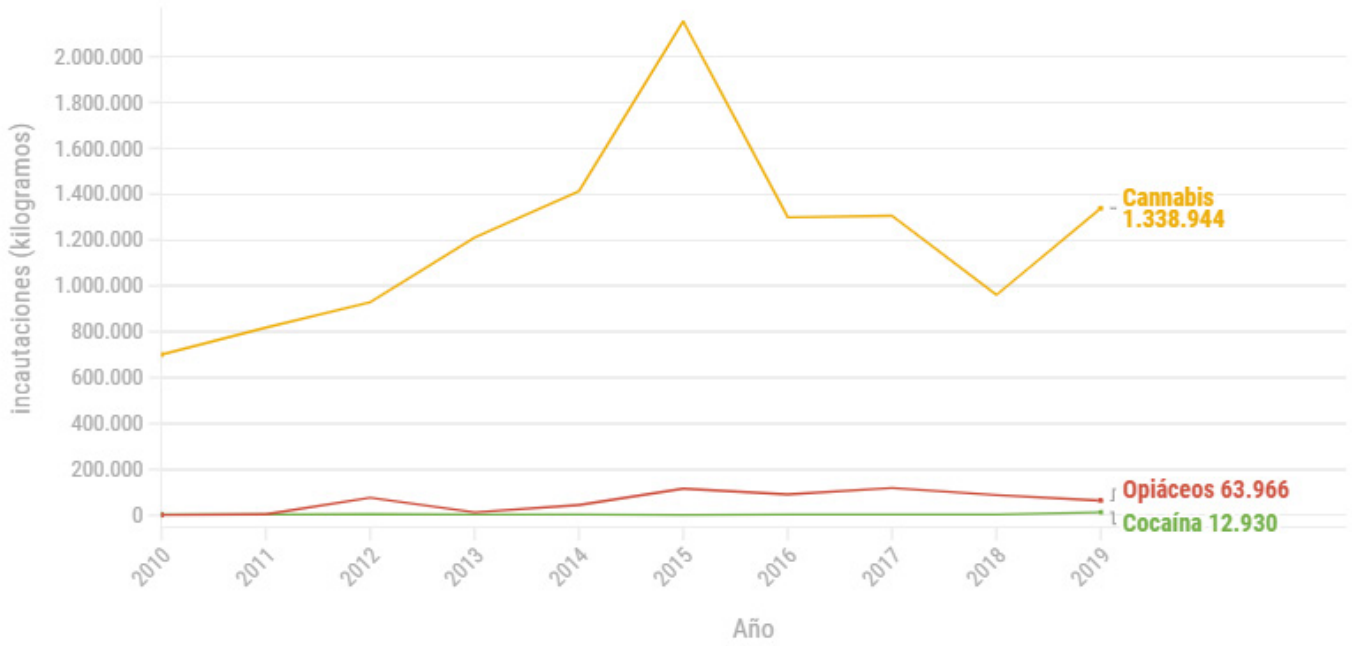
rizados principalmente por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sin embargo, se ha podido comprobar, tal y como destaca la propia organización, que una gran cantidad de Estados africanos no han compartido sus datos en la evaluación del suministro y demanda que dirige la organización a través de su Cuestionario de Informe Anual, por lo que el análisis no ha podido ser verificado con datos cuantificables en su totalidad[6]. El informe de EUROPOL sobre el mercado de la droga más reciente avala una serie de transformaciones sufridas en las rutas de tráfico ilícito del cargamento durante los últimos años, aunque existe similarmente un gran déficit de datos empíricos que avalen ciertos países como Libia y países del Sahel (como Mauritania o Mali) y la parte occidental del Sáhara que actúan como protagonistas en esta reconversión. Esto se debe en gran parte a que son los propios Estados los que deben proporcionar la información sobre el volumen de las incautaciones confiscadas anualmente, algo que no muy a menudo son capaces de monitorizar. Además de la imposibilidad de llegar a cuantificar el fenómeno por no controlar la totalidad del territorio de un Estado, también puede deberse a la reticencia de compartir este tipo de información a nivel público, y en definitiva resulta complejo llegar a determinar con exactitud el volumen tanto de demanda como de suministro de la droga en buena parte de los países objeto de estudio. En otros casos, se teme que los países no compartan el volumen total de las incautaciones reales por temor a que se haga pública la verdadera magnitud del problema.

6 Para 2019, los siguientes países de objeto de estudio no ofrecieron respuestas al Cuestionario de Informe Anual de la UNODC: Angola, Benín, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauricios, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Tanzania, y Zimbabue. Por su parte, otros países ofrecieron parcialmente sus respuestas, especialmente en el apartado de "suministro" de la droga: Costa de Marfil, Egipto, Mozambique, Senegal y Túnez. Fuente: Statistical Annex, UNODC.

Aun así, la combinación de las respuestas que la UNODC ha podido obtener junto con otras fuentes de información (como EUROPOL, INTERPOL y los resultados cuantitativos y cualitativos de otros centros de investigación) han permitido perfilar las principales tendencias del tráfico de droga, su proyección en el escenario regional y los diferentes niveles de tránsito de cada uno de los países que forman parte del entramado de la droga en África, con unos beneficios calculados en casi 2.000 millones de dólares al año según la UNODC (Priego, 2019:78).

Gráfico 2. Evolución de las incautaciones de droga en África

Volumen de incautaciones desde 2010 a 2019*



Fuente: UNODC (2021), * Las cifras son las registradas a nivel oficial por la UNODC, teniendo en cuenta que algunos Estados no han compartido sus datos.
Gráfico: Elaboración propia

En este contexto, se han venido a determinar dos flujos de droga en el continente africano: por un lado, en la zona este, la heroína es la droga más transitada, proveniente de Asia. Por otro lado, el Sahel se ve seriamente afectado por el tráfico de cocaína, a través de países como Chad, Nigeria y Mali (Blanco y De la Corte, 2013:61), con un potencial creciente de tránsito en el Magreb. Mientras tanto, la resina de cannabis (o hachís) se produce en el norte de África y se distribuye hacia el sur del continente, principalmente a través del Sahel, para sus consumidores finales o hacia el Mediterráneo, con destino a Europa.

Para comprender las principales rutas y su posterior fuerza de intersección con las organizaciones terroristas, es necesario desglosar los diferentes tipos de droga y sus rutas de tránsito, por lo que los siguientes apartados ofrecen un análisis pormenorizado de los tres diferentes grupos de droga predominantes en el continente y la evolución de sus rutas de tránsito durante los últimos años.

6.1. Cannabis

El cannabis (tanto la planta como la resina) es, por excelencia, la droga más antigua y de mayor volumen de tránsito en el tráfico ilícito de mercancía a través de África, por su relativa facilidad en el cultivo y la preparación. Su producción y distribución se han ido abriendo paso en el espacio africano para constituir, según los datos más recientes de la UNODC, el continente donde se ha dado el segundo mayor volumen de incautaciones de la planta del cannabis en el mundo (por detrás de América del Norte) y donde el volumen de incautaciones no ha disminuido, al contrario que en el resto del mundo, sino que ha aumentado (UNODC, 2021a:14). El espacio occidental y central del continente son las principales víctimas del exponencial volumen de tráfico de cannabis,

especialmente Nigeria, Ghana y Sudán[7], desplazando las tendencias de tráfico desde la zona noreste africana, colindante con la Península Arábiga, hacia este espacio del continente.

Sin embargo, si hay un país que se ha consolidado como el principal productor de la cannabis es Marruecos, donde la evolución positiva en las incautaciones de esta droga entre 2017 y 2018 ha dado paso a un aumento de más del 10% en el año 2019. Marruecos opera como uno de los más importantes centros de producción y distribución de esta droga tanto en el interior del continente como hacia los mercados europeos, siendo una de las principales rutas de tránsito de esta droga, especialmente de la resina de cannabis, vía terrestre desde Marruecos y pasando por Mauritania, la frontera maliense-argelina y Níger hasta llegar a Libia. En términos totales, y a pesar de no contar con información precisa ni indicadores disponibles, la UNODC ha llegado a identificar a Marruecos y Nigeria como los dos principales países productores de cannabis, en ese orden, observándose un consumo estimado a nivel doméstico de casi el 11% en este último (UNODC, 2019d:18).

El informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas alertaba de esta tendencia: en 2018 se incautó una valija de aproximadamente diez toneladas de resina de cannabis que transitaba en paquetes y cajas (denominadas en el argot policial como "valises marocaines") desde Marruecos a través de Mauritania, Mali y Burkina Faso hasta llegar a Niamey (Níger). En esta operación se arrestó a Abdelali Boutafala, famoso narcotraficante, y se pudo establecer un vínculo entre los traficantes e individuos de grupos armados en Mali, como Ahmadou Ag Badi (vinculado al Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados, GATIA) y Hanoun Ould Ali Mahara, líder clave del Movimiento Árabe de Azawad MAA-Plataforma (Panel de Expertos, 2019:16). Entre los principales

7 En Sudán los datos más actualizados son de 2018, pues no hay datos de incautaciones proporcionados por el país para 2019. Fuente: UNODC

destinos de la resina de cannabis marroquí se encuentra España, a la que se identifica como el principal punto de salida y tránsito de esta droga hacia el resto de Europa, seguida por Países Bajos y Francia (UNODC, 2021a:18).

En el norte de África, Argelia sigue a Marruecos en cuanto a incautaciones de cannabis. En este país, la planta de marihuana transita a lo largo del norte de África para su consumo doméstico y la resina de cannabis se exporta al mercado europeo principalmente para elaborar el preparado, entre otras sustancias, del hachís. Se estima que Argelia, de hecho, destina el 80% de la droga al continente europeo, mientras consume solo el 20% restante, por lo que este país y su homólogo marroquí representan los principales países exportadores de resina de cannabis a Europa (INTERPOL y ENACT, 2018:12). Europa, principalmente vía España por proximidad geográfica, es uno de los continentes más afectados por la importación de hachís en el interior de su territorio, confiscando miles de kilogramos por valor de varios cientos de miles de euros (Fernández, 2019).

Como se mencionaba anteriormente, Libia actúa como uno de los enclaves más importantes en la distribución del cannabis en la región, al recibir cargamento tanto por el oeste desde Marruecos como por el este desde el Líbano, otro gran protagonista de la industria del cannabis en el panorama de producción a nivel global. El flujo de esta droga, mayoritariamente de resina de cannabis procedente de Marruecos, tiene como una de sus principales entradas a territorio libio el "Paso de Salvador", cruce fronterizo entre Argelia, Níger y Libia, para posteriormente ser distribuida a Egipto y Europa a través de los puertos de Al-Khoms y Tobruk y la ciudad próxima de Bani Walid. El tránsito también se realiza a través del distrito de Kurfa en enclaves como Tazirbu y Rebiana por el desierto hasta Egipto (Mangan, 2020:8) y afecta probablemente a Sudán, aunque no existen datos actualizados a 2019 (EUROPOL, 2019:96).

La ciudad de Sabha, en el suroeste del país, también comprende un punto de referencia importante en el tráfico de hachís, mientras que Bengasi al noreste y los puertos de Al-Khoms, Misrata y Tobruk actúan como espacios de almacenamiento para su posterior distribución a los mercados europeos (Mangan, 2020:8 y Micallef, 2019:6). El espacio fronterizo entre Libia y Túnez tampoco queda exento del contrabando de esta droga, aunque en menor medida, mientras que Trípoli actúa como un importante centro de almacenamiento y distribución. La ciudad de Ghadames, fronteriza con Túnez, Argelia y Libia, también es conocida por su papel como punto de entrada preferente de cannabis y sus derivados, especialmente de resina (Micallef, 2019:6).

Similarmente al caso libio, el Sahel y los países del Golfo de Guinea ocupan un papel privilegiado como puertas de entrada y distribución vía marítima y aérea hacia los diferentes puntos del canal de suministro que alcanza el Mediterráneo y las costas europeas, a pesar de no disponer la UNODC del recuento de incautaciones anuales de varios países de África Occidental. Nigeria y Ghana lideran el total de incautaciones anuales de la planta de cannabis en 2019, destinándose un uso doméstico en alrededor del 10% de la población en la región (UNODC, 2021a:20). A ambos países le siguen Costa de Marfil, Liberia, Togo y Burkina Faso, aunque con unas cifras considerablemente menores, por lo que resulta complejo determinar las cantidades reales del volumen de tráfico de cannabis que se distribuye por el Sahel y el resto de los países de su vecindario, así como conocer si esta cifra proporcionada por los países objeto de estudio corresponde con la realidad.

El cuerpo antidroga maliense – Office central des stupéfiants – incautó casi tres toneladas de cannabis escondidas en camiones provenientes de Ghana vía Costa de Marfil en 2018, mientras que importantes plantaciones de cannabis fueron encontradas en la región de Sikasso, en el sur del país, un año antes

(Assanvo, 2018). En Bámako, la capital, se incautaba durante la primera mitad de 2021 la cifra récord 7.745 toneladas de cannabis en Mali, con un valor en el mercado de más de siete millones y medio de euros (Keita, 2021). La constatación empírica a través de las incautaciones de miles de kilogramos de cannabis y sus derivados tanto en 2017 como en años anteriores revela que desde entonces existe una brecha de información y por tanto obstáculos a la hora de acceder a los datos cuantificables por parte de la UNODC, una falta de cesión de datos que podría estar íntimamente relacionada con las crisis políticas que asolan al país desde entonces – y que han desembocado en dos golpes de Estado – y a la incapacidad del Estado de controlar lo que ocurre en buena parte de su territorio, especialmente en la zona norte. Sin embargo, existen sólidas evidencias que sostienen que el país se erige como un importante espacio de tránsito de hachís desde 1990, y desde mediados de los 2000 ha sido testigo de una mayor involucración de otros grupos y actores locales interesados en competir por los beneficios del narcotráfico y la red transnacional de esta droga que opera en la zona (Tinti, 2020:3).

Países como Marruecos, Guinea Bissau, Burkina Faso y Níger se encuentran involucrados en esta red de tráfico saheliano que tiene como puntos de tránsito y destino tanto el interior de África Occidental como países del Magreb (Tinti, 2020:7). En este último se incautaron el récord de 17 toneladas en la doble operación Lionfish coordinada por la INTERPOL en marzo y abril de 2021, por un valor de alrededor de 100 millones de dólares (INTERPOL, 2021). La ciudad de Agadez anteriormente mencionada, ubicada en el centro de Níger, actúa como nudo comercial que comunica con Niamey al suroeste y con Chad al este, mientras que al norte sirve de espacio de contrabando para las ciudades argelinas de Tamanrasset y Djanet y con las ciudades libias de Ubari y Sebha, mientras que al sur comunica con la ciudad nigerina fronteriza de Diffa y al otro lado de la frontera con su vecina Nigeria (Echeverría, 2019:84). Esta ciu-

dad reviste de una gran importancia para el contrabando de la zona: durante 2017, las autoridades nigerinas detenían a 268 presuntos traficantes en esta ciudad considerada como la puerta del desierto del Teneré.

Países como Marruecos, Guinea Bissau, Burkina Faso y Níger se encuentran involucrados en esta red de tráfico saheliano que tiene como puntos de tránsito y destino tanto el interior de África Occidental como países del Magreb

En mayo de 2021, las autoridades de Níger incautaban 17 toneladas de hachís destinado a Libia, con valor de aproximadamente 31 millones de euros, constituyendo el mayor volumen de incautaciones en la historia de África Occidental. Los datos revelarían, similar al caso maliense, que el país continua sirviendo como espacio de exposición de esta droga, a pesar de que las autoridades no proporcionen el registro del volumen de sus incautaciones ni su objeto de destino, tanto a nivel de tránsito como de consumo.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta difícil deducir que las cifras aportadas por los países objeto de estudio estén ajustadas a la realidad de la zona, mientras que la ausencia de datos por parte del resto de países invitan a pensar que la problemática es mucho mayor que la que se encuentra ofrecida en los datos.

En Egipto se ha producido cierto incremento del tránsito de cocaína en 2019, teniendo en cuenta que en años anteriores las incautaciones seguían un considerable descenso, y se posiciona detrás de Sudán en la comparativa de incautaciones de la planta del cannabis continente africano en 2019 (UNODC, 2021a:15). Sin embargo, y considerando un periodo de tiempo más extenso, en el periodo 2009-2019 Egipto se ha convertido en el noveno país a nivel mundial con más cantidades confiscadas de esta droga (UNODC, 2021a:16) y un

país referente en el tránsito de droga entre el norte de África y la Península Arábiga (EUROPOL, 2019:96). Por su parte, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cannabis también se introduce en el espacio central del continente vía Chad y Sudán hacia la Península Arábiga, mientras que diversas fuentes apuntan a que en la República Democrática del Congo, grupos rebeldes y militares han sido relacionados con la producción de cannabis en el país (EUROPOL, 2019:12).

Gráfico 3. El tráfico de cannabis en África

Fuente: INTERPOL y UNODC (2021)
Mapa: Elaboración propia

Desplazando el foco al flanco sur del continente, además de Sudáfrica otros países como Zambia se erigen como un importante foco de tránsito de narcóticos, especialmente de cannabis. En esta región, el consumo y la producción de cannabis es una realidad manifiesta, con Suazilandia como uno de los principales focos de producción y distribución de la región (INTERPOL y ENACT, 2018:12). En la parte oriental de África, el consumo y el tráfico de esta droga tampoco es un asunto baladí, con puntos calientes como Arusha (Tanzania) como importantes productores de cannabis en la región (INTERPOL y ENACT, 2018:12), aunque el país costero presenta un riesgo relativamente más elevado como tránsito de otras sustancias como la heroína y cocaína (UNODC, 2021c:21).

El continente africano se encuentra por tanto condicionado por unos focos intensos de actividad criminal en torno al tráfico de la planta y la resina del cannabis, incidiendo en un número limitado de países en cuanto a su producción (Marruecos, especialmente) pero con un gran abanico de países de tránsito, destacando el norte de África, el espacio occidental y los países ribereños de la geografía oriental y sureña.

6.2. OPIÁCEOS

De entre todas las drogas ilegales que se incluyen dentro de la categoría de los opiáceos destaca la heroína, por sus elevados niveles de adicción y consumo exponencial a nivel global. Sin embargo, recientemente existe una demanda creciente también de otros opiáceos como el tramadol y el fentanilo, a menudo más provechosos para los traficantes por su relativo bajo coste de producción, fácil acceso y por la ausencia de regulación a nivel internacional del primero y de ciertos análogos del segundo (UNODC, 2021a:65). Similar a las tendencias del tráfico de la planta y la resina del cannabis, los espacios occidental, norte y algunos lugares del teatro central de la geografía africana vuelven a apare-

cer como los escenarios donde la crisis de estos opiáceos se ha convertido en una problemática, con un aumento considerable en países como Nigeria o Egipto, aunque la falta de información y datos cuantificables sobre la desviación de estas sustancias hacia los mercados no regulados vuelve a impedir conocer la verdadera magnitud del fenómeno (UNODC, 2021a:66).

Los diferentes puntos de paso de tráfico ilegal de opiáceos, por la naturaleza de su actividad criminal, sufren a menudo cambios o variaciones respecto a la ruta que siguen para llevar a cabo el tránsito de su mercancía. A fecha de 2009, la distribución de esta droga a través de África entraba principalmente a través de los países de la zona oriental, como Tanzania, Kenia o Etiopía, proveniente de los principales productores de dicha droga en el "Golden Triangle" (Myanmar, Laos y Tailandia), y el "Golden Crescent", englobados los países de Afganistán, Pakistán e Irán (Blanco y De la Corte, 2013:7). Posteriormente, la droga se redirigía a la zona occidental, con Nigeria como importante centro neurálgico de distribución, y desde allí se destinaba a los mercados europeos y norteamericanos en su mayor parte.

Actualmente, hay otros espacios que están siendo considerados como aprovechables, sobre todo los países que componen la región del Sahel y los países con acceso al mar. Aun así, los centros de distribución de la última década siguen constituyendo un nudo clave para el tráfico global de heroína y otros opiáceos. Nigeria sigue liderando la comparativa de países de África Occidental que distribuyen la mercancía a los mercados europeos, sirviéndose a menudo de nacionales de los países vecinos como Ghana, Senegal o Gambia para alcanzar a los distribuidores locales en Europa (EUROPOL, 2019:121).

El volumen de incautaciones de opiáceos en África (3% del total) no es tan elevado en comparación con otros espacios de la geografía mundial, como

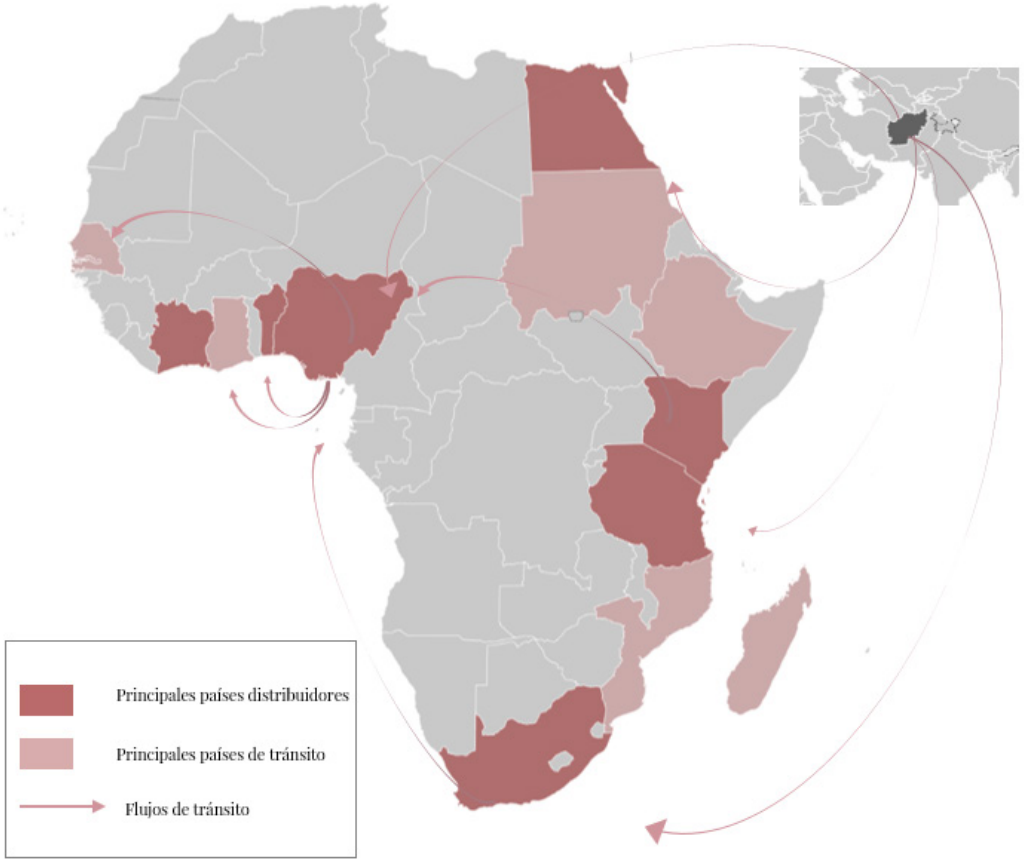
Asia (62%) o Europa (27%). Sin embargo, su rol ha dejado de considerarse residual, y su volumen se ha ido incrementando durante los últimos años. Solo en 2019 se han interceptado alrededor de 4 toneladas de opiáceos, el 99% en heroína, el doble que el año anterior y siete veces más que en 2009 (UNODCa, 2021:91). De esta cantidad, más del 90% se ha incautado en el norte de África, especialmente en Egipto, seguido del espacio oriental del continente, más concretamente en Mozambique y Kenia. En África Occidental, Nigeria y Benín lideran la comparativa de incautaciones de heroína y sus derivados (UNODC, 2021a:91). El análisis en la región central del continente sugiere que, a pesar de ser un espacio por donde transitan grandes cantidades de mercancías relacionadas con el narcotráfico, la zona no comparte las alarmantes estadísticas de tránsito que su vecindario regional, especialmente el occidental. Por el contrario, sí es una región que está experimentando un grave problema de consumo a nivel interno.

Nigeria sigue liderando la comparativa de países de África Occidental que distribuyen la mercancía a los mercados europeos

Por su parte, el espacio oriental del continente opera como uno de los más importantes y crecientes canales de distribución de heroína y otros opiáceos provenientes de la Península Arábiga y Asia central, donde la mercancía descarga en su mayor parte en las costas de Kenia, Tanzania y en el norte de Mozambique (EUROPOL, 2019:118). De hecho, esta ruta a nivel tanto marítimo como aéreo sirve como alternativa al paso de la droga a través de los Balcanes, con un mayor control aduanero, por lo que a pesar de contar con un nivel de información relativamente escaso, se ha podido constatar que esta región opera como punto de distribución tanto al mercado europeo, directamente a

través del norte o vía África occidental, como al vecindario sur, con una demanda creciente en países como Sudáfrica. En la zona del mar rojo, Egipto, Etiopía, Kenia, Madagascar, Mozambique y Tanzania se están erigiendo como principales puntos de partida y tránsito (EUROPOL, 2019:119).

Gráfico 4. El tráfico de opiáceos en África



Fuente: EUROPOL, INTERPOL y UNODC (2018-2019)
Mapa: Elaboración propia

OIET

El "Golden Crescent" en general y Afganistán en particular sigue siendo por excelencia el mayor productor y exportador de opio y derivados a nivel mundial, que se encarga de transportar la mercancía a lo largo de tres rutas principales en África.

La primera comprende el tránsito vía el Canal de Suez a puertos turcos, con Egipto, Etiopía y el resto de los países bañados por el Mar Rojo como objetivos potenciales de tránsito. Egipto actúa como uno de los principales puntos de entrada de heroína al continente africano vía terrestre desde Oriente Medio, vía marítima desde Irán y Pakistán y a través de aeropuertos, para posteriormente redirigir la mercancía a lo largo del Magreb, a Turquía, al resto del continente europeo y para un consumo doméstico en constante crecimiento (INTERPOL y ENACT, 2018:11).

La segunda vía comprende la Península Arábiga con destino vía terrestre a los países mediterráneos y a África oriental. El cargamento sale desde la costa de Makrán (al sur de Beluchistán, entre Irán y Pakistán) hasta las costas africanas orientales y a la parte centro-sur del continente (EUROPOL, 2019:118). Mombasa, en Kenia, Tanzania, Mozambique, Madagascar o Sudáfrica constituyen los puntos intermedios de tránsito del cargamento (UNODC, 2021a:95). Proveniente de Afganistán, el flujo de mercancía de opio se exporta hacia las costas del cuerno de África para posteriormente ser distribuido a la parte occidental del continente, principalmente a Nigeria, o al mercado europeo. El otro sale directamente hacia Nigeria, que se encarga de distribuirlo tanto por la región como hacia el mercado norteamericano y europeo.

Finalmente, la tercera y última vía comúnmente utilizada para el tráfico ilegal de opio afgano surca hacia el sur las costas del cuerno de África con destino tanto a estos países, especialmente Sudáfrica, como hacia el mercado de la parte occidental del continente (UNODC, 2019b:15), actuando también como punto de tránsito hacia Europa. Las islas de la costa oriental del sur de África tienen presumiblemente un rol muy relevante como importadores de la heroína proveniente de Asia vía marítima (INTERPOL y ENACT, 2018:11).

Es bastante revelador que la mayoría de las vías más utilizadas para el tráfico de opio afgano tengan como destino o punto de paso a África Occidental en general y a Nigeria en particular, lo cual consolida la evidencia de que este país se ha convertido en el centro neurálgico del tráfico de opio en África Subsahariana vía la ruta sureña.

Existe un problema creciente de consumo doméstico de opiáceos en ciertos países africanos, especialmente en la parte occidental y central del continente (EUROPOL, 2019:108), por lo que al tráfico ilegal de esta sustancia se le deben añadir otros elementos que enturbian la erradicación de las rutas de paso de la mercancía ilegal hacia su consumidor final. Con todo, y en términos de análisis comparativos, el tráfico de heroína se muestra como un negocio diversificado, donde Nigeria representa el centro neurálgico de buena parte de la mercancía y donde pocos países quedan exentos de las consecuencias del tráfico de droga en el continente.

6.3. COCAÍNA

Se estima que los años 2008 y 2009 fueron los periodos con mayor tráfico de droga en África Occidental, especialmente de cocaína, con un volumen aproximado de 47 toneladas de esta droga incautadas (Tinti, 2020:5). Unos años más tarde, en 2013, un oficial de las Naciones Unidas destinado a Guinea-Bissau afirmaba que pasaban por ese país no menos de 30 toneladas de cocaína anualmente, confirmando la ruta de tránsito que África Occidental supone para el narcotráfico mundial y para la cual los narcotraficantes malienses tienen un rol preferente (Tinti, 2020:6).

La cocaína se produce prácticamente en su totalidad en América del Sur, especialmente en Colombia, Perú y Bolivia, y se distribuye a través de países con

controles débiles como la propia Colombia, Venezuela o a través de ciertos puntos calientes de Brasil en su camino hacia los mercados intercontinentales. En este contexto, África Occidental se ha convertido en la cuarta vía principal de cocaína que penetra en el continente europeo, infiltrando alrededor de 50 toneladas de droga al año valoradas en alrededor de 2.000 millones de dólares (Ortega, 2021). De 2015 a 2019 las cantidades incautadas de cocaína se han multiplicado por diez, con un volumen total de cocaína incautada registrada en casi 13 toneladas en 2019, más del 85% provenientes del espacio norte, occidental y central del continente (UNODC, 2021c:29). De hecho, solo en el 2007 las autoridades colombianas estimaban que más de un tercio de la cocaína proveniente de América del Sur pasaba por algún punto africano en la cadena de suministro antes de llegar a su consumidor final en Europa, un mercado que se habría triplicado en la década de 2010 (Blanco y De la Corte, 2013:6).

Los datos indican que los países costeros que bordean el Atlántico y el Golfo de Guinea (desde Mauritania a Nigeria hasta llegar a Guinea Ecuatorial), son los que reciben en mayor medida la cocaína en la actualidad, especialmente Guinea-Bissau (Rabasa et al, 2017:11), pero también Senegal, Guinea y Mauritania (Tinti, 2020:10). En el primero se incautaron más de 2 toneladas de cocaína en octubre de 2021, mientras que las autoridades de Gambia confiscaron casi 3 toneladas a principios de año (Reuters, 2022). El fenómeno de la piratería marítima, en este sentido, favorece la recepción y distribución del cargamento que llega por mar, en vista de la baja productividad e ingresos que lleva generando la pesca en la zona durante los últimos años (Bell et al, 2021:62).

La conveniente posición geográfica de los países costeros del Golfo para el suministro de cocaína como puerta de entrada en el Atlántico se ha consoli-

dado de una manera tan predominante frente a otro tipo de rutas de entrada que las agencias de enjuiciamiento y especialistas en seguridad han acuñado a esta ruta de tránsito como la "Autopista 10", en referencia a su posición geográfica en el paralelo 10º norte desde América del Sur hasta el Golfo de Guinea.

Los países del Sahel, particularmente Mali y Níger, operan como países de tránsito de la mercancía recibida en las costas del Atlántico hacia el siguiente punto de la cadena de suministro, mientras que Nigeria actúa como principal centro de almacenamiento y distribución de esta droga. Mauritania, aunque todavía constituye una de las rutas más comunes de entrada de la mercancía, ha disminuido en importancia para el tráfico de cocaína para ser progresivamente trasladado a los países costeros del Golfo de Guinea, con Nigeria y Benín a la cabeza de esta comparativa (EUROPOL, 2019:136). En estos espacios, son las redes criminales, especialmente mediante mafias transnacionales de Nigeria, Ghana y Guinea-Bissau, las encargadas de recibir el cargamento e introducirlo en aquellos mercados de su interés. Una condición que favorece a estas redes criminales autóctonas es la flexibilidad que caracteriza a su capacidad operativa, pues a menudo mutan en función de las necesidades de la organización encargada de gestionar la producción de cocaína, así como las del cliente, movilizándose fácilmente para llegar al siguiente punto de la cadena de distribución. Además, cuentan con una estructura logística relativamente pequeña forjada en lazos de amistades, parentesco y vínculos similares, por lo que operan como un clan más que como una red del narcotráfico, resultando así arduo complejo visibilizarlos y encontrar las evidencias suficientes para su detención y disposición judicial.

En Mali, existen evidencias que apuntan a que más de veinte localidades operan como espacios de tránsito de cocaína de manera recurrente ubicadas des-

de las zonas fronterizas con Mauritania y pasando por el espacio central del país, próximas a ríos o en zonas rurales y semidesérticas, hasta llegar al espacio oriental en la zona cercana a Liptako-Gourma, también conocida como la Triple Frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso, y la zona norte, bordeando Argelia (Tinti, 2020:11). Los cargamentos no siguen un itinerario fijado, sino que van modificando la ruta en función de las condiciones de seguridad y la proyección de los grupos armados que operan en las diferentes partes del país. Tanto el cannabis como la cocaína normalmente transitan por la zona fronteriza con Argelia y Níger, para así poder penetrar en las costas del Mediterráneo a través de Argelia o Libia.

A pesar de que el Caribe y África Occidental son áreas de tránsito muy relevantes en el panorama del tráfico mundial de cocaína, América Central y el norte de África están emergiendo como uno de los centros más importantes de tránsito y almacenamiento de cocaína vía aérea y marítima a través sobre todo de Panamá y Marruecos con destino al mercado europeo, uno de los mayores consumidores de cocaína a nivel mundial (EUROPOL, 2019:136). Cabo Verde y las islas cercanas a África Occidental en el Atlántico siguen siendo los principales puntos de distribución de la cocaína vía marítima para ser repartidos a lo largo de los mercados europeos, domésticos (gracias a su creciente consumo), y en el vecindario regional, de nuevo teniendo a Marruecos como referencia, quien a su vez también actúa como proveedor de la droga hacia los países de África Occidental vía aérea. Argelia y Libia, por su parte, también actúan como puntos de tránsito de este narcótico a fin de evitar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de España, aunque a menor escala que Marruecos, lo cual proyecta un posible aumento en su consumo doméstico (EUROPOL, 2019:137). En el informe más reciente de EUROPOL, se constataba que el norte de África emergía como un punto de tránsito relevante de cocaína por vía tanto aérea como marítima destinada a los mercados europeos (EURO-

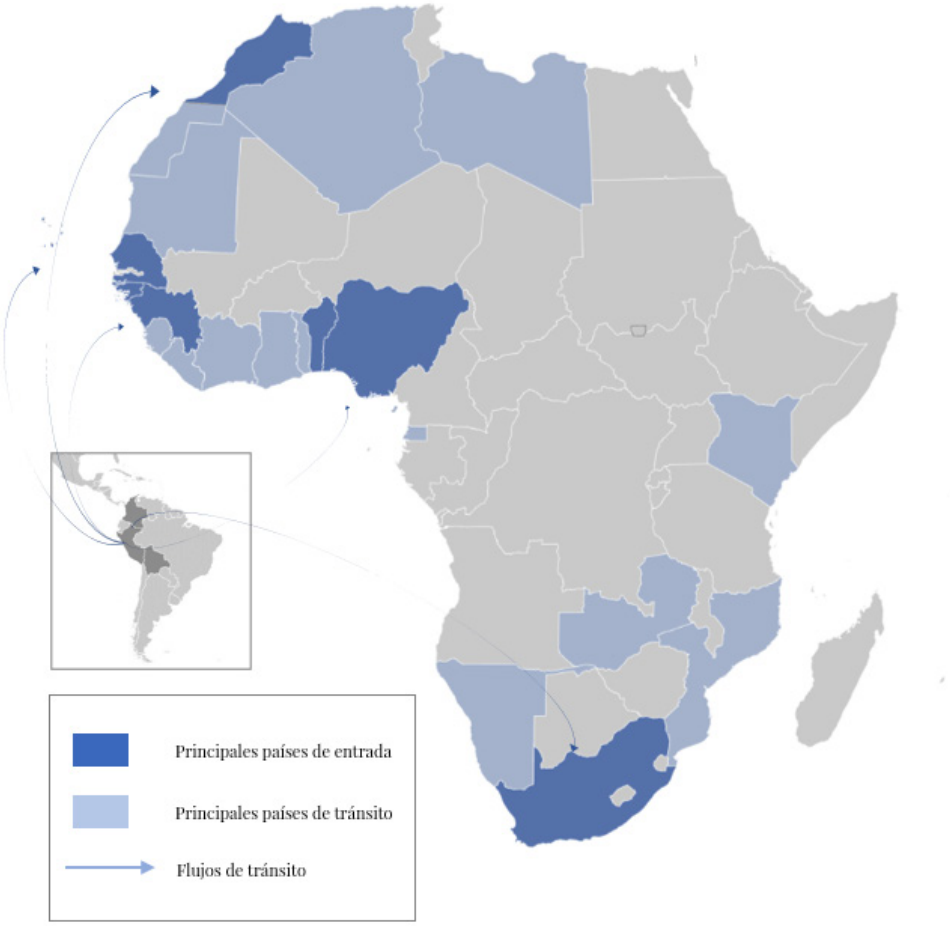
POL, 2019:17), y a nivel terrestre con puntos calientes ubicados en el Sáhara Occidental, a través del extremo norte de Mauritania y en la zona fronteriza entre Argelia, Níger y Libia. Este último, a pesar de hacerlo en menor medida, también transporta largos volúmenes de esta sustancia hasta el continente europeo (Mangan, 2020:11).

En el flanco oriental, Kenia constituye desde 2018 una escala frecuentes en el tránsito de esta droga vía aérea al interior del mercado europeo y hacia el sur del continente. En el sur del continente, las estimaciones apuntan a que la cocaína proveniente del continente americano constituye la droga que más está creciendo tanto en los mercados domésticos como para su exportación al mercado europeo (INTERPOL y ENACT, 2018:11), con Sudáfrica como punto de destino y de tránsito intermedio de la mercancía hasta su consumidor final en Asia. Si se examina la mercancía que llega a las costas europeas, España y Países Bajos se erigen como los destinos más frecuentes, y son comúnmente identificadas como las principales fuentes de origen de las incautaciones llevadas a cabo por los países de la Unión Europea (EUROPOL, 2019:136).

Resulta importante destacar que existen indicios de una reciprocidad en cuanto a los cárteles de cocaína de América del Sur y la resina de cannabis de origen marroquí, que intercambian la mercancía para distribuirla en sus respectivos nichos de mercado (INTERPOL y ENACT, 2018:12). De confirmarse, se evidenciaría un fortalecimiento, consolidación y colaboración de ambas industrias que les permitiría expandir el negocio a nivel internacional y diversificar su mercado para multiplicar exponencialmente sus beneficios económicos, lo que complicaría la lucha contra el crimen organizado transnacional de manera muy marcada. También se identifica a Marruecos como centro neurálgico de cocaína distribuido tanto dentro como fuera del continente, constituyendo un país referente en el entramado de la producción de cannabis y

tráfico de cocaína que difícilmente presenta competencia en el resto de su vecindario regional salvo por la excepción de Nigeria.

Gráfico 5. El tráfico de cocaína en África



Fuente: EUROPOL, RAND y UNODC (2018-2020)
Mapa: Elaboración propia

El panorama del tráfico de cocaína se muestra por tanto diversificado a lo largo de los países costeros bañados por la geografía africana, particularmente centrado en Guinea-Bissau. Sin embargo, Marruecos está emergiendo en cuanto a país tanto intermediario como consumidor de esta droga en detrimento del pequeño país de África Occidental. A pesar de no constituir en principio un fuerte rival para Bisáu, lo cierto es que la industria de la cocaína sudamericana está consiguiendo expandir los países receptores de cargamento y establecer lazos con las redes del narcotráfico en África, añadiendo un riesgo adicional por su dinamismo y rápida adaptación a nuevos escenarios.

Se identifica a Marruecos como centro neurálgico de cocaína distribuido tanto dentro como fuera del continente, constituyendo un país referente en el entramado de la producción de cannabis y tráfico de cocaína que difícilmente presenta competencia en el resto de su vecindario regional

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Transcurridos unos meses desde la irrupción de la pandemia del COVID-19 a nivel global, el Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertaba al Consejo de Seguridad de que los canales de tránsito de la droga estaban redirigiéndose en función de las restricciones de viaje y la seguridad en las fronteras. Este aviso iba en línea con el informe publicado por el Secretario General un año antes, que ponía de manifiesto su preocupación por un posible vínculo del crimen organizado, el tráfico de drogas entre ellos, en la financiación del terrorismo tanto a nivel nacional como a nivel transnacional (UNODC, 2020:1).

Tras contextualizar el entorno de seguridad en África Subsahariana y las tendencias regionales del tráfico de droga, resulta lógico pensar que la cooperación entre el negocio del narcotráfico y los grupos yihadistas no necesariamente tiene que verse en la confluencia de ambos actores en un mismo entorno, pues también pueden ser dos tipos de actividad recurrentes y con líneas de delimitación mutua difusas. Existen casos de individuos capturados por delitos relacionados con el terrorismo que han mostrado evidentes vínculos con el negocio de la droga, dedicando los esfuerzos a ambas actividades criminales. Es el caso de los varios arrestados en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla en el año 2015, individuos con un extenso historial de delitos relacionados con la venta y el tráfico de drogas y armas a los que también se

les incautó diverso material de las actividades de Daesh (EUROPOL, 2019:34). El crimen organizado transnacional tiene una gran influencia en conflictos fuera de su campo de operaciones. El lucrativo negocio del tráfico de armas del norte de África está involucrado con la venta de armamento y explosivos empleados en los conflictos de Siria y Libia, y existen fuertes conexiones entre sólidas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga en Sudamérica con traficantes de armas en Europa del este (EUROPOL, 2019:41).

Son numerosos los casos reportados en cuanto a la relación entre el narcotráfico y el terrorismo, valiendo los ejemplos de los militantes separatistas en Chechenia encabezados por Shamil Basayev y su relación con el tráfico de heroína afgano. También se han dado vínculos entre grupos islamistas de Asia central y cargamentos de droga provenientes de su vecindario más próximo, como ha sido el caso del Movimiento Islámico de Uzbekistán y la protección del tráfico de opio de los talibán (Priego, 2010:6).

Según EUROPOL, en la actualidad el tráfico de drogas supone una importante fuente de financiación para el terrorismo y las milicias insurgentes. De hecho, en grupos como Al Shabaab, Boko Haram o JNIM los ingresos generados gracias al negocio de la droga suponen más de una cuarta parte del total de su financiación (EUROPOL, 2019:33).

A menudo el perfil del terrorista se ve involucrado en actividades criminales de diferente intensidad. Los vínculos entre el narcotráfico y los grupos yihadistas en África adquieren una serie de manifestaciones diversas, ya que pueden ser tanto una colaboración puntual basada en la búsqueda de un negocio de mutuo beneficio o una relación más constante y prolongada en el tiempo, unidos por una serie de factores tanto operacionales como geográficos.

En el primer caso, se han constatado lazos entre Al Qaeda en el Magreb Islámico y el tráfico de drogas en el norte de África y en la parte occidental del continente (EUROPOL, 2019:32), mientras que un informe encargado por la Unión Europea (UE) en 2016 vinculó al grupo somalí Al Shabaab con el tráfico de heroína hacia los mercados europeos y de cocaína a Kenia (Reitano, Clarke y Adal, 2017:12). Un año más tarde, el grupo terrorista nigeriano Boko Haram fue acusado de facilitar el contrabando de heroína y cocaína a través de África Occidental, en una larga lista de casos particulares donde la confluencia de ambos sectores criminales se han encontrado para llevar a cabo una alianza de conveniencia que nada tenía que ver con una relación más consolidada en el tiempo (UNODC, 2017b).

En el segundo escenario, el hub del narcotráfico y el terrorismo es, sin lugar a dudas, ilustrado en el caso de Afganistán liderado por los talibán. Según los registros, llevan décadas beneficiándose de este negocio para financiar sus actividades de adoctrinamiento como herramienta de poder y subversión de la población local así como forma de establecer vínculos económicos, financieros o simplemente de dependencia de actores, organizaciones e individuos dentro y fuera de sus fronteras. La rama talibán en Pakistán, Tehreek-e-Taliban, ha sido asimismo relacionada por algunas fuentes abiertas con el tráfico de heroína y su distribución al extranjero, incluyendo Europa (Dirección General de Políticas Internas de la Unión, 2012:33). El país asiático sirve así de espacio proliferante de actividad yihadista con una economía basada en la producción y tráfico de heroína, distribuyendo su mercancía a lo largo de África y el resto de Asia para llegar a los mercados occidentales, principales clientes y consumidores del opio afgano.

En vistas de lo anterior, resulta necesario desglosar los diferentes subgrupos geográficos de África y las diferentes vinculaciones que emanan entre los ac-

tores yihadistas y el tráfico de droga. Si bien es cierto que el grueso de los tres diferentes grupos de droga no se caracteriza por una homogeneidad en términos geográficos, existen una serie de focos clave donde se determina un riesgo de cooperación entre ambos. África Occidental lidera la comparativa de esta situación, principalmente por el elevado volumen de actividad yihadista operativo a nivel regional, por lo que aquellos espacios donde opera el yihadismo son los que terminan por merecer un especial objeto de análisis a lo largo de los siguientes apartados del documento.

El resultado de las investigaciones apunta a que Mali es el país con mayor número de evidencias relacionadas con la cooperación entre el yihadismo y el tráfico de droga, tanto por los diferentes actores que han transcurrido desde la crisis política de 2012 como por el contexto político, social y económico en declive que actualmente potencia la falta de unidad y de cohesión internas y facilitan la proliferación de este tipo de mercados en la economía informal. Mali y el resto de su vecindario más próximo, especialmente en sus fronteras con Níger, Argelia y Mauritania, son las principales víctimas de esta cooperación que se desprende del análisis, siendo unos países con factores endógenos propicios al surgimiento de esta red de tráfico ilícito y con un importante volumen de actividad yihadista operativo en ellos. Por tanto, África Occidental constituye el primer subgrupo geográfico a analizar, tanto a nivel de grado de cooperación como de los diferentes grupos terroristas de los que se han obtenido evidencias sobre su vinculación con el tráfico de drogas.

7.1. ÁFRICA OCCIDENTAL

El tráfico de comercio transfronterizo en la región de África Occidental no es una novedad, y el espacio que ocupa ofrece grandes oportunidades para el negocio de las drogas en particular. Sus porosas fronteras, sumadas a la fal-

ta de control y orden estatal en grandes espacios de la geografía occidental africana son dos de los principales factores que permiten el tránsito y almacenamiento de la droga, a menudo bajo el beneplácito o incluso el apoyo de los actores regionales que modelan las realidades de la zona.

7.1.1. Mali

Las autoridades de los países vecinos como Mauritania, Níger o Marruecos han confirmado a través de sus operaciones contra el tráfico de droga más recientes (entre los años 2017 y 2020) que Mali es uno de los principales países de tránsito de droga en la región (Tinti, 2020:6). La naturaleza de su gobernanza, sumada a los múltiples usos del tráfico por parte del gobierno, las élites locales o los grupos armados, distinguen al país como un espacio más atractivo para el crimen organizado que otros países de su entorno.

El tráfico de droga en su región noreste – especialmente en las provincias de Gao, Timbuktú y Kidal – está generando un nivel de violencia sin precedentes que se entrelaza con los grupos armados que allí operan. El que era un país esencialmente de tránsito de droga, también es ahora uno de los principales lugares de consumo en África, especialmente su área norte.

Desde la década de los 1990 del negocio de la droga se beneficiaban principalmente las tribus árabes que competían en la zona por el monopolio, cuyas acciones terminaban por causar numerosas tensiones entre las comunidades tradicionales y en la balanza de poder de las jerarquías sociales (International Crisis Group, 2018:4). Sin embargo, es a partir del golpe de Estado de 2012 cuando diversos actores de índole étnica, política y tribal empiezan a interactuar de una manera más sistemática con el negocio de la droga, a pesar de las discrepancias que entre estos pudieran surgir a nivel ideológico, espe-

cialmente para los grupos terroristas. Prominentes individuos pertenecientes a grupos como AQMI, Ansar al-Din y MUJAO han mantenido una cooperación constante con señores del narcotráfico mediante la protección a estos y una serie de peajes que les permitían registrar cuantiosas ganancias (Sangaré, 2021:62). Entre otras motivaciones, confiaban en el negocio de la droga para financiar sus operaciones insurgentes y adquirir material y armas destinadas a sus ataques. La intervención militar a través de la coalición internacional liderada por Francia bajo el nombre de Operación Serval, de hecho, contribuyó al acercamiento entre ambas ramificaciones criminales y el apoyo de los traficantes para que el terrorismo escapara del asedio francés (International Crisis Group, 2018:12). De esta manera, la ayuda mutua ofrecida entre ambos les ha permitido a los terroristas perseguir sus objetivos violentos así como a los traficantes consolidar sus zonas de tránsito y lucrarse de los millonarios beneficios que les provee la industria de la droga, particularmente de hachís y cocaína, sin temor a ser asaltados o que su cargamento se encuentre en peligro gracias a la protección del yihadismo o de individuos prominentes en su comunidad.

Sin embargo, no solo el terrorismo se beneficia del crimen organizado para financiar o colaborar con sus operaciones en Mali. Diversos grupos armados mantienen unos sólidos vínculos con la industria del narcotráfico, e incluso la droga es a menudo el motivo principal de estos enfrentamientos. En una entrevista para International Crisis Group en 2018, la Coordinación de los Movimientos de Azawad (CMA) admitió haber escoltado un cargamento lleno de hachís codiciado por el Movimiento Árabe de Azawad (MAA-Plataforma, facción dentro de la Plataforma parte de los acuerdos de paz de Mali de 2015), terminando en un enfrentamiento entre ambos grupos armados conocido como la ofensiva de Ménaka que fue en parte motivada por los potenciales beneficios de esta droga (International Crisis Group, 2018:15).

Lo económico, por tanto, choca con lo político e incluso ideológico en cuanto a las motivaciones reales a la hora de consolidar la lucha armada entre actores no estatales. De hecho, el control del cargamento de sustancias narcóticas jugó un papel importante en la fragmentación y posterior rivalidad del movimiento rebelde del norte de Mali así como de la obstaculización en la implementación de los Acuerdos de Argel de 2015 (ENACT, 2020:10). Uno de los líderes militares más prominentes de MAA-Plataforma, Mahri Sidi Amar Ben Daha (alias Yoro), fue alto comandante en la policía islámica cuando MUJAO controlaba Gao en 2012, para luego pasarse a MAA-Plataforma. Asesinado en 2020, este individuo fue relacionado con el tráfico de drogas en este área de Mali y demuestra cómo resulta difuso el paso entre el narcotráfico, el terrorismo y los grupos rebeldes en ciertas partes de la geografía maliense en función de las condiciones y las oportunidades que las diferentes coyunturas ofrezcan. Lo mismo ocurrió con Mohamed Ben Ahmed Mahri (alias Rougi), individuo clave del narcotráfico en la región de Gao y colaborador de MUJAO que todavía sigue en busca y captura y en la lista de sanciones de las Naciones Unidas (ENACT, 2020:16). La creación del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA, facción dentro de la CMA) por milicias e individuos recurrentemente relacionados con el contrabando de droga en Timbuktú permitió en cierta manera tomar el poder de la provincia a AQMI; sin embargo, con el tiempo se alejaron de su red de alianzas, buscando distanciar a su plataforma política de individuos y grupos afines al narcotráfico (Lacher, 2013:6).

En abril 2018, miembros de la MAA-Plataforma en colaboración con Ahmoudou Ag Asriw, Jefe del Estado Mayor militar del Grupo de Autodefensa y Aliados Imghad Tuareg (GATIA, por sus siglas en francés) transportaban cuatro toneladas de resina de cannabis en un convoy asaltado por miembros del grupo tuareg rival del MNLA en coordinación con ciertas tribus árabes de la etnia Kounta perteneciente a la CMA y atacantes no identificados de Níger (BOE,

2020). El cargamento fue finalmente desviado a Argelia vía Tinzawatène, al noreste de la frontera con Mali (ENACT, 2020:8). Esto demuestra cómo los narcotraficantes han sabido adaptarse a la nueva realidad maliense, demostrando la permeabilidad y capacidad de adaptación del fenómeno criminal en las dinámicas internas malienses.

Lo revelador de esta realidad es que tanto la CMA como la Plataforma son actores políticos que formaron parte de los procesos de paz que culminaron en los Acuerdos de Argel en 2015 y siguen teniendo un gran peso en el debate político con el gobierno de transición tras los dos golpes de Estado que han asolado al país desde 2020.

No solo las milicias rebeldes se benefician de las ventajas del narcotráfico, pues unidades al servicio de las fuerzas armadas malienses (como el Mecanismo de Coordinación Operacional, encargado de brindar protección y seguridad en el norte del país), la élite política y fuerzas destinadas a la reconstitución del acuerdo de paz también se han visto involucradas en esta actividad criminal. Sin lugar a dudas, el incidente más conocido por el público general llegó a darse en 2009, cuando un Boeing 727 proveniente de Venezuela y registrado en Guinea Bissau se encontró calcinado en la región de Gao, al norte de Mali, y donde se cree que se encontraban más de diez toneladas de cocaína en su interior. El conocido como incidente de la "Cocaína Aérea" (Air Cocaine), llegó a destapar el vínculo entre autoridades malienses y el narcotráfico (Algeria Watch, 2010; Briscoe, 2018:8), mientras que la percepción de un gran nicho de corrupción relacionado con la droga del antiguo presidente maliense Touré fue una de las razones que llevaron a apoyar a buena parte de la sociedad el golpe de Estado contra el mismo en 2012 (Lebovich, 2013). La sociedad es la primera conocedora de las ramificaciones del tráfico de droga en el aparato estatal y en los distintos movimientos que han formado parte

de la historia política maliense reciente. De hecho, en la periferia de Gao (la ciudad más importante del norte de Mali y un hub clave del tráfico de droga), existe un barrio conocido como "cocaine-bougou", el "pueblo de la cocaína" en el idioma bambara (ENACT, 2020:9). El suburbio ha sido catalogado como la viva representación de la frustración y el desaliento de la sociedad maliense con la clase política, perfilándose como un nodo clave de convulsión social e inestabilidad política a nivel regional (Meché, 2021:695).

El norte de Mali ha terminado por emerger como una importante zona de tránsito para la red criminal transnacional. Individuos pertenecientes a comunidades locales actúan, de hecho, como fuertes conectores entre el negocio de la droga y el terrorismo transnacional (Díez, 2021). A pesar de no entenderse el tráfico de drogas como uno de los propulsores del conflicto en el norte de Mali, su existencia sí conlleva a menudo luchas intercomunitarias por el control de las rutas y de los ingresos generados por su contrabando. Así es como los diferentes grupos étnicos y movimientos rebeldes terminan por tejer sus propias redes de protección entre comunidades locales y grupos tribales con un elevado impacto en la economía local y el engrandecimiento en términos monetarios, de influencia y de poder de personalidades involucradas en el tráfico de droga, a menudo líderes prominentes en sus comunidades (ENACT, 2020:13).

Si desplazamos la atención a los grupos terroristas operativos en el país, lo cierto es que se han registrado numerosos casos que vinculan a ciertos grupos con el tráfico de droga, destacando particularmente los grupos AQMI, MUJAO y Ansar al-Din.

AQMI

A finales de 2009, la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Ghana arrestaba a tres individuos yihadistas sospechosos de actuar como facilitadores del narcotráfico en África Occidental: Oumar Issa, Harouna Touré e Idris Abdelrahman. La condena ratificó estos cargos, constituyendo la primera condena probatoria de los vínculos entre AQMI y el narcotráfico (Brown, 2013:22). Un año después, en diciembre de 2010, tres individuos malienses fueron procesados en Estados Unidos por conspiración para cometer actos de terrorismo y vinculándolos a las franquicias de Al Qaeda en África Occidental. Los hombres habrían acordado transportar cocaína a través del Sahel y el Norte de África con el apoyo de AQMI y las FARC. En el juicio, los acusados declararon que AQMI se había aliado con las FARC para transportar la droga a través de los espacios que controlaban, para finalmente llegar a España (Lacher, 2013:3).

Poco después, en una misión desplegada por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon a finales de 2011, encargada de investigar los efectos de la recientemente estallada crisis en Libia, se confirmó que AQMI había comenzado a tejer alianzas con traficantes de droga y otros agentes criminales sobre el terreno, con las consecuencias para la seguridad y la inestabilidad regional que ello implicaba (UNSC, 2012).

De todos los grupos armados, milicias extremistas o movimientos terroristas que han operado en la sabana sahariana, la marca de Al Qaeda en el Magreb Islámico trasciende por su elevada relación con el narcotráfico. En el pasado se le han atribuido relaciones de cooperación con el contrabando de droga mediante la protección de los cárteles originarios de América del Sur en su recorrido por el Sahel de camino a Europa (Reitano, Clarke y Adal, 2017:13),

pero también se han descubierto lazos de integración o incorporación del tráfico de droga como una fuente más de financiación.

Este grupo, que actualmente opera como parte de la coalición JNIM, ha sido liderado por el terrorista probablemente con los lazos más estrechos con el tráfico de bienes ilícitos hasta la fecha: Mojtar Belmojtar. Antiguo combatiente en el escenario afgano contra las tropas soviéticas – donde perdió un ojo y recibió el apodo de "el tuerto" – Belmojtar ha hecho carrera en movimientos y grupos yihadistas tanto en el Magreb como en el Sahel. El terrorista, de origen argelino, fue capaz de establecer vínculos y forjar alianzas con diversas personalidades tribales y fuerzas locales, lo que a menudo le hizo ganarse el apoyo de "el diplomático". En 2015, las fuerzas de seguridad estadounidenses afirmaron que había sido abatido durante ataques aéreos franceses, aunque la confirmación de su muerte permanece una incógnita hasta la fecha.

Fruto de sus habilidades comunicativas y de persuasión, se cree que el dirigente ha sido el actor parte del movimiento islamista cuyos lazos con el narcotráfico han resultado más evidentes, vínculos que a menudo se vuelven complejos de determinar. Belmojtar se encargaba de coordinar operaciones transfronterizas de droga y otros bienes ilícitos desde el espacio occidental del continente hacia la región del norte, donde la mercancía encontraría su siguiente punto de distribución. La creciente demanda y suministro de cocaína en el pasado más reciente le llevó a involucrarse en el tráfico de esta sustancia, ganándose la fama de "narco-islamista" e imponiendo un impuesto de "importación" a todo aquel cargamento que cruzara la zona bajo su dominio, especialmente el norte de Mali, hacia Argelia, su país natal (Rabasa et al, 2017:143).

Así, AQMI surge como una organización con un vínculo de carácter prolongado con el narcotráfico, como mínimo en el periodo de tiempo en el que era liderada por Belmojtar. De hecho, diversos informes surgieron en relación a una "cumbre sobre drogas" celebrada en Guinea-Bissau en octubre de 2010 donde AQMI acudió representada por Abdelkrim al-Targui (alias El tuareg), familiar del actual emir de JNIM, Iyad Ag Ghaly (Mahmoud, 2011:3). También se puede incluir una tercera parte en esta simbiosis, especialmente en personalidades de renombre en la élite política. Es el caso de Deyti Ag Sidimou, diputado maliense por Tessalit (al norte del país) con conexiones a AQMI que fue denunciado y posteriormente absuelto por formar parte de una red de narcotráfico operativa en la zona de la triple frontera entre Argelia, Mali y Níger (Jeune Afrique, 2011).

Sin embargo, las evidencias sobre si la organización en su conjunto optaba por el tráfico de droga como una fuente alternativa de financiación no son tan claras al respecto. En su lugar, se cree que la implicación de AQMI en el contrabando de droga fue mínima, centrando su atención en los secuestros y el contrabando de otra mercancía de la economía ilegal como el tráfico de armas para financiar sus operaciones (Hansen, 2021). Por tanto, un análisis más conservador hace pensar que son ciertas facciones e individuos pertenecientes a la marca regional de Al Qaeda los que han involucrado a la franquicia yihadista en este tipo de actividad, tanto bajo el liderazgo de Belmojtar hasta 2012 como con el Batallón Al Mulatamún (AMB, o "los Firmantes con Sangre"), grupo que surge de la escisión de AQMI bajo liderazgo de Belmojtar y que años después volvería a incorporarse a esta última organización original. Aun así, la relación de AQMI con el tráfico de droga no se teme resuelta en el periodo posterior a Belmojtar. Desde la alianza con MUJAO en 2012, su fuerza conjunta les ha permitido llevar a cabo actividades relacionadas con el tráfico de droga en el Sahel (FATF, 2016:42). En marzo de 2015, nueve miem-

bros de AQMI fueron arrestados en el norte de Níger por tráfico de drogas y armas, revelando la investigación que habían estado vendiendo droga en el sur de Libia y que el dinero recaudado – más de medio millón de euros – era destinado a la financiación del terrorismo (FATF, 2016:19), mientras que cinco años antes, ciertos miembros de AQMI visitaban Guinea-Bissau para llegar a acuerdos con redes criminales de América del Sur, no tanto para comprar o vender mercancía sino para concretar las rutas facilitadas para el paso del cargamento una vez llegaran a suelo africano (Foreign & Commonwealth Office, 2013:6). Por tanto, y aunque esta fuente de financiación no fuera una de las más empleadas, existen evidencias de una integración real de actividades relacionadas con el tráfico de droga por parte de una militancia que tenía como misión recaudar los fondos para financiar a la causa de AQMI.

MUJAO

Similarmente al caso de AQMI, existen evidencias que sostienen que buena parte de la fundación de MUJAO y sus alianzas fueron respaldadas e incluso proporcionadas para mantener los canales de droga previos a sus años de operación (2011-2013), por lo que no es de extrañar que Al Murabitún, como grupo que aunó a MUJAO y el Batallón Al Mulatamún, hubiera mantenido durante y después de su incorporación con AQMI (2015) vínculos con el narcotráfico como forma de ejercer influencia en la región septentrional de Mali. Existen evidencias que apuntan a que contrabandistas de droga árabes apoyaron o promovieron la ocupación de MUJAO a la ciudad de Gao en 2012, con una relación entre ambos grupos criminales tan estrecha que parte de su militancia decidió abandonar el movimiento por "no ser hijos de Dios, sino traficantes de droga" (Foreign & Commonwealth Office, 2013:7). La conexión entre ambos les permitió a los terroristas asegurar el control de la ciudad entre abril de 2012 y enero de 2013, desarrollando una amplia red de conexiones regionales

que se extendían al oeste hacia el desierto del Sáhara Occidental y al este hacia conexiones con árabes de Níger vinculados a las redes criminales de Gao y Timbuktú (Foreign & Commonwealth Office, 2013:7).

La simbiótica relación entre el negocio de la droga y el grupo terrorista también promovía serios enfrentamientos entre los actores que interactuaban en las dinámicas internas de la región por aquel entonces. En noviembre de 2012, el grupo tomó el control de un convoy que transportaba hachís de origen marroquí a través de la zona fronteriza de Mali y Níger en una operación encabezada por un alto comandante tuareg del MNLA. Al año siguiente ocurrió la situación inversa, cuando grupos rivales asociados con el MNLA asaltaron un convoy perteneciente a MUJAO (Lacher, 2013:5). Individuos relacionados con el MNLA (y temporalmente con Ansar al-Din) han tomado parte en ambos lados del conflicto de Mali, mientras que sus vínculos con el narcotráfico también se mostraron evidentes. Se trataría así de una alianza de conveniencia donde ciertos individuos pertenecientes al terrorismo, a los movimientos rebeldes y al aparato estatal habían fraguado una relación persistente con el tráfico de droga a través del maltrecho país saheliano.

Por su parte, MUJAO ha sido conectado con el narcotráfico a través de tres líderes prominentes: Mohamed Ould Ahmed Deya (Rougi), el hombre de negocios del clan Lamhar (perteneciente al subgrupo árabe Tilemsi) Cherif Ould Taher (y a su vez uno de los fundadores de MUJAO) y el traficante y facilitador de AQMI, perteneciente a la comunidad árabe berabiche del norte de Mali, Sultan Ould Badi (Lacher, 2013:5). Estos tres individuos pueden entenderse como los facilitadores de un canal bidireccional entre el narcotráfico y el yihadismo, y sin los cuales dicha relación resultaría algo difusa a la hora de determinar el grado de colaboración. Sin embargo, la presencia que MUJAO tuvo en la región norteña de Gao hacía que los diferentes actores relacionados con

el narcotráfico, bien los propios cárteles o sus intermediarios, tuvieran que lidiar antes o después con el grupo terrorista para hacer negocios si querían que su mercancía transcurriera por la ruta tradicional en ese momento bajo control del yihadismo. Esta cooperación se vería mermada parcialmente, en última instancia, por la presencia e intervención de las tropas francesas en el país saheliano.

Ansar al-Din

A finales de 2018, la DEA en cooperación con las autoridades judiciales croatas desmantelaron a una organización criminal ubicada en Latinoamérica que intentaba llevar a cabo un negocio con Ansar al-Din, grupo terrorista vinculado a Al Qaeda con presencia activa en Mali. El trato consistía en la entrega de misiles tierra-aire a los yihadistas a cambio de cocaína y una ruta de paso segura y bajo la protección del grupo terrorista a través del desierto del Sáhara que les permitiría transportar su negocio de cocaína a través de África (Petrušic y Deškovic, 2018). Fruto de esta investigación se hallaron vínculos entre el narcotraficante colombiano que había sido el cabecilla de la operación con la rama de Al Qaeda activa en Mauritania, Ansar Allah Al Murabitún (AAM). Este grupo, inspirado en la visión radicalizada del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC, precursor de AQMI), ha protagonizado ataques notorios en su vecindario más cercano, destacando su papel activo en la batalla de Aguelhok, al noreste de Mali y su actual capacidad operativa como parte de la coalición JNIM. Los resultados de la investigación de 2018 evidenciarían, pues, una red de conexiones entre el narcotráfico en el continente americano y uno de los actores terroristas más importantes operando en África.

El ámbito de operaciones de Ansar al-Din, ubicado en el espacio septentrional de Kidal en la actualidad, se sitúa en un punto clave de tránsito registrado de cocaína, cannabis y sus derivados en la zona fronteriza entre Mali, Argelia

y Níger, a quien ha menudo se le ha atribuido alianzas de conveniencia con el tráfico de droga (Briscoe, 2018:43), por lo que el riesgo de su confluencia con el crimen organizado transnacional permanece elevado no tanto a nivel de contrabando de droga sino más bien a través de actividades de extorsión a las redes delictivas y el pago de peajes para permitir circular su mercancía (Eizenga y Williams, 2020:3).

Los anteriores casos señalan a Mali como uno de los mayores ejemplos de la cooperación entre la industria del narcotráfico y los grupos terroristas operativos en la zona, atrayendo la atención de nuevos focos de conflicto a medida que la amenaza yihadista avanza en la conquista de nuevos espacios de la región. En este sentido, resulta esencial seguir la pista de la penetración del tránsito de la droga, especialmente de cocaína, en el flanco sureño del país fronterizo con Burkina Faso, en vista de la rápida expansión yihadista que ha deteriorado la seguridad en la zona de Liptako-Gourma y ha abierto nuevos corredores de inestabilidad. En términos teóricos, es posible definir una degradación del espacio geográfico que favorezca la proliferación de nuevos actores criminales aprovechando las ventajas ofrecidas por la carencia o debilidad de las estructuras estatales encargadas de combatir este y otros fenómenos delictivos, como el tráfico de cigarrillos o la explotación ilegal de minas de oro (Tinti, 2020:11).

7.1.2. Nigeria

Nigeria constituye un importante centro de distribución de varios tipos de estupefacientes a lo largo y ancho de la geografía africana. Ya en la última década del siglo pasado el país se erigía como uno de los principales canales de suministro de heroína, cannabis y cocaína hacia Europa. Sin embargo, desde la irrupción de la actividad yihadista en esta región de estudio, la proyección

del riesgo apunta a que no solo continuará con este tipo de economía sumergida, a costa de otras actividades económicas de incontable valor para el desarrollo y la prosperidad de los países de la zona, sino que se están consolidando además importantes bastiones en la industria de narcóticos debido en parte a la complicidad de los grupos terroristas y las milicias rebeldes.

El estado de Borno, en el extremo norte del país, se erige un importante centro neurálgico de distribución y tráfico, especialmente de cocaína y heroína, con individuos que desplazan la droga a través de África Occidental y hacia el este, desde República Centro Africana hacia Europa (Audu, 2016). Este lugar es a su vez epicentro de actividad de uno de los grupos radicales que actuaría como intermediario del crimen organizado en Nigeria actualmente: Boko Haram.

Existe información suficiente como para establecer una relación de cooperación entre la organización terrorista y los cárteles de droga motivada a engrosar los beneficios generados destinados a la financiación de sus actividades en el país, aunque en ningún caso supusiera desviarse de su principal método de financiación: el secuestro a cambio de rescates. El Comité de Contraterrorismo de las Naciones Unidas emitió a finales de 2018 una breve nota informativa que establecía un nexo entre el grupo terrorista nigeriano Boko Haram y el tráfico de droga en la región (Comité de Contraterrorismo de las Naciones Unidas, 2018:3). Además, ya en 2011 la inteligencia argelina encontró evidencias sobre la cooperación entre este grupo y AQMI para aunar fuerzas en su expansión y capacidad operacional en la zona, alianza que no se ha visto intensificada pero que podría revertirse si contaran a su vez con una fuerte red criminal con la que colaborar y proporcionara una fuente adicional de financiación para ambos grupos (Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence, 2011:13).

El hecho de que Boko Haram se encuentre actualmente debilitado por su rival regional del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), franquicia regional de Daesh que abatió al líder del primero en 2021, Abubakar Shekau, puede ofrecer una oportunidad de colaboración única entre ambos, lo cual beneficiaría en gran medida a la capacidad de resiliencia del grupo terrorista en vista de su deterioro de fuerzas por las constantes ofensivas y confrontaciones con ISWAP. Unos lazos entre el crimen organizado y los grupos terroristas, sumados a un eventual apoyo de otras milicias locales y de parte de la sociedad civil, podría propiciar en última instancia una inestabilidad y fragilidad regionales crónicas que favorecieran un contexto del país similar a la zona norte de Mali.

7.1.3. Guinea-Bissau

De entre todos los países con instituciones frágiles destaca Guinea-Bissau como uno de los espacios favoritos para la entrada de droga proveniente de América del Sur. Ocupando la posición 27 de 180, el país registra uno de los peores índices tanto de fragilidad estatal como de corrupción política, y a menudo ha sido considerado como un "narcoestado" por académicos, analistas y medios de comunicación. El país se compone de más de 80 islas además de su pequeña porción de territorio en el continente africano, por lo que la entrada de mercancía puede producirse fácilmente vía marítima o a través de los diversos aeródromos repartidos tanto por las islas como por su zona continental. Además, este pequeño estado de África Occidental cuenta con una crisis política acentuada desde la guerra civil de 1999 y una ausencia de liderazgo efectivo, con un historial de inestabilidad política que ha sido testigo de tres golpes de Estado, guerras civiles y el asesinato del presidente y el jefe del ejército en estas dos últimas décadas.

Los puertos y aeródromos de Guinea-Bissau son los principales lugares receptores de la mercancía de droga proveniente de países de América del Sur, para luego transportarlos hacia el interior del continente, especialmente vía terrestre. En 2019, la operación Carapau, liderada por la Unidad de Crimen Transnacional y la Policía Judicial de Guinea-Bissau, incautó casi 800 kg. de cocaína en un falso fondo de un camión (UNODC, 2019c). En septiembre de 2021, una nueva operación incautó más de 1.8 toneladas de la misma droga en sacos de harina, siendo la mayor incautación policial de la historia del país. Según afirmaba el Subdirector de la Policía Judicial, esta droga incautada pertenecía a la red terrorista de Al Qaeda, y el destino de la mercancía era llegar hasta la región del Magreb (Dabo, 2021), por lo que existe un serio riesgo de penetración yihadista en los países que ejercen como puntos de entrada de la mercancía.

La capacidad mencionada anteriormente de cambiar de rol y pasar inadvertidos para las fuerzas de seguridad, a lo que se añaden los colaboradores y las redes criminales establecidas entre Guinea-Bissau y el resto del Sahel, permite en gran medida ir transportando la mercancía hasta la zona bajo control y dominio del yihadismo sin ser interceptada por las fuerzas de seguridad. Como se ha comentado anteriormente, en 2010 ciertos miembros de AQMI visitaron el pequeño Estado costero para concretar las rutas facilitadas por el grupo terrorista para el paso del cargamento de las redes criminales de América del Sur una vez llegaran a suelo africano (Foreign & Commonwealth Office, 2013:6). AQMI protegía los convoyes de cocaína provenientes de América a cambio del 10% del valor de lo que se transportaba en las rutas bajo su dominio, y posteriores incautaciones de cannabis en Mauritania durante 2011 revelaron que 50.000 dólares era el precio acordado como peaje para el paso de la droga a través de su territorio (Foreign & Commonwealth Office, 2013:6). Años después, operaciones policiales de antidroga incautaban en 2019 más

de diez toneladas de cocaína en los países costeros de Cabo Verde y Guinea Bissau, cuya operación en este último permitió constatar evidencias sobre conexiones entre la red criminal que operaba con esta mercancía y el grupo islamista de Al Qaeda en el Magreb Islámico (Caballero, 2019).

Se constata así una evaluación del riesgo en los países costeros que bordean el Atlántico mayormente golpeados por la actividad delictiva de la entrada y el tránsito de cocaína y otras drogas, a cuya realidad se añade la creciente presión del yihadismo y la amenaza de su expansión a cada vez más puntos de la geografía occidental africana, proyectándose en países de su vecindario próximo como Senegal, Mauritania o Costa de Marfil.

7.2. NORTE DE ÁFRICA

Existen vínculos entre cárteles criminales que cooperan con grupos armados insurgentes en el norte de África con métodos y manifestaciones diversas entre las que se incluyen el pago de impuestos, peajes o el pago puntual de una cantidad determinada por parte de las bandas criminales a cambio de protección de su cargamento a través de las rutas de paso hacia su destino final (INTERPOL y ENACT, 2018:10).

AQMI posee un largo historial de involucración con el narcotráfico, aunque por el momento no ha reactivado una intensa actividad terrorista en las zonas costeras del norte de Argelia ni en el resto de países del Magreb donde ha registrado históricamente su presencia, como Libia o Túnez. Sin embargo, el hecho de que el pequeño país costero de Guinea-Bissau tenga vía libre para llegar hasta Mali o el resto de territorios bajo control del yihadismo de la coalición JNIM, advierte del peligro del narcotráfico y su creciente vinculación con

actividades yihadistas como potencial actor beneficiado por esta actividad criminal a lo largo de la franja saheliana.

El comercio y contrabando ilegal tanto de sustancias ilícitas como de armas, cigarrillos o personas existía ya en la región fronteriza de Argelia y Mali antes de la consolidación de los grupos terroristas de corte yihadista, acelerado con los tiempos de la descolonización y el establecimiento de fronteras artificiales que no necesariamente casaban con la realidad política de la zona. Sin embargo, y tal y como se ha mencionado anteriormente, en el periodo de mayor apogeo de AQMI, el grupo terrorista bajo el mando de Belmojtar aprovechaba los ingresos generados por la protección, el tráfico y la reventa de cocaína en España y Argelia como método de financiación de sus campañas en el norte de África (del Cid Gómez, 2010:11). El grupo ha sido conocido por relacionarse de una manera prolongada con el crimen organizado y servirse de delincuentes locales para llevar a cabo lucrativos secuestros a cambio de rescates, actividad que supone la mayor parte de su financiación[8]. También tienen reconocidas otras actividades de financiación como el contrabando de tabaco, armas y seres humanos.

Por tanto, el terrorismo en el norte del continente se ha beneficiado en los tiempos de mayor vigorización y fortalecimiento de su actividad de la existencia de las rutas del tráfico de droga en la zona bajo su control, exacerbando el debilitamiento de la región en términos de seguridad.

8 Entre los años 2008-2014, se estima que AQMI recaudó aproximadamente 150 millones de dólares en pagos de rescates. Fuente: Yagüe, Javier (2021). Anuario del terrorismo Yihadista 2020. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Pág. 154.

7.3. ÁFRICA CENTRAL, ORIENTAL Y SUR

En términos de evaluación del riesgo en la confluencia entre el narcotráfico y el yihadismo en África Subsahariana, los datos revelan que los espacios central, oriental y sur del continente no cuentan con una gran relación entre ambos actores en comparación con África Occidental y parte del norte de África. Aun así, en ciertas zonas sí se ha constatado que grupos armados y otras fuerzas rebeldes han estado beneficiándose del negocio de la droga mediante su producción y consumo.

En la República Democrática del Congo se constató en 2014 que las milicias rebeldes y miembros de las fuerzas armadas congoleñas estaban involucrados en la producción de cannabis (Shaw, Reitano y Hunter, 2014:8).

En Somalia, la "guerra por el beneficio" (war for profit) generada durante la década de 1990 se extendió a los tiempos modernos con el surgimiento de grupos terroristas locales y su relación cooperativa con el crimen organizado, especialmente de Al Shabaab. Según se mencionaba anteriormente, fuentes de la EUROPOL han llegado a determinar una integración por parte de Al Shabaab de fórmulas delictivas similares a las mafias como método que les proporcionase una importante fuente de financiación al grupo (EUROPOL, 2019:33). Concretamente, su ámbito de actuación se centra en la extorsión y el modus operandi de las mafias a través del pago de un impuesto (zakat) como método preferente de extorsión, incluido a oficiales gubernamentales y fuerzas armadas nacionales (Hansen, 2021), pero también en brindar protección a miembros de la élite política del país y a recibir el apoyo puntual de clanes y líderes civiles para presionar al Gobierno Federal, una relación de conveniencia y protección mutua que termina por perpetuar la escalada de violencia política en Somalia (Menkhaus, 2018:4). Estos impuestos tienen, de hecho, una cantidad mucho mayor que aquellos del propio gobierno somalí.

En cuanto al tráfico de droga, y a pesar de disponer de información limitada en cuanto a su grado de vinculación real, se ha tenido constancia del cobro de estos impuestos por dejar pasar la droga a los contrabandistas como cualquier otra mercancía más a través del territorio que ellos controlan (Petrich, 2019:12).

En las costas orientales, al tráfico de drogas proveniente del espacio asiático debe añadirse otros retos a su seguridad, como la piratería marítima, los cuales añaden un desafío adicional al contexto de seguridad y a la prevalencia de un sistema subregional anárquico del cual se benefician redes criminales y grupos armados. Así con todo, el espacio oriental no queda exento de la virulencia yihadista y su coexistencia, e incluso en algunos casos colaboración, con las mafias y redes criminales que introducen su mercancía en las costas del cuerno de África y del mar Rojo.

8. IMPLICACIONES DE LA COOPERACIÓN ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y EL TERRORISMO

El tráfico de cannabis, cocaína o heroína distribuida a lo largo de los canales de suministro vía África Subsahariana anteriormente mencionados, además de incurrir en serios problemas para la salud, deterioran gravemente el ecosistema social, económico y político del entorno donde transitan, con repercusiones en una multitud de ámbitos de la economía, la sociedad o de problemas de adicción entre los más jóvenes, por citar algunos ejemplos.

No se puede hablar de la delincuencia organizada como causa de la desestabilización de los países objeto de estudio, pues los factores que propician su penetración en el entramado regional de África Occidental o el Sahel ya

marcaban unas condiciones de degradación e inestabilidad antes de que el tráfico de drogas irrumpiera con mayor fuerza. Tampoco se puede hablar de la existencia de dicho tráfico como una condición previa al surgimiento y la consolidación de la actividad yihadista en los países objeto de estudio, pues son varios los factores que inciden en esta casuística y que guardan relación no solo con los índices de delincuencia sino también con vulnerabilidades políticas y sociales particulares de los países analizados. Sin embargo, en la relación entre el yihadismo y el tráfico de droga se puede hablar de un círculo que se retroalimenta (Blanco y De La Corte, 2013:22) y que promueve que a mayor inestabilidad, mayor sea la probabilidad de surgimiento de redes ilícitas de narcóticos y, a mayor proliferación de cárteles criminales, mayor degradación de la estabilidad proporcionada en los focos de conflicto que favorecen al auge y perpetuación de la actividad yihadista.

Una consolidación del tráfico de drogas en África Subsahariana y su vinculación con el terrorismo, tal y como se deprende del presente análisis, tiene una serie de implicaciones que en ningún caso se dan de manera homogénea. Algunos países sufren esta problemática mucho más intensamente que otros, y África Occidental se ha convertido en la principal región perjudicada por esta compleja relación, con un amplio deterioro del contexto de seguridad. Las consecuencias que se desprenden de su relación son diversas, pues se trata de un fenómeno transversal que no se centra en los límites establecidos a nivel fronterizo, y sus implicaciones terminan por incidir principalmente en cuatro dimensiones: en el ámbito económico, a nivel social, en el espectro político y en el terreno de la seguridad. Los cuatro frentes, a su vez, tienen un impacto directo para los intereses y planes estratégicos de los países de su periferia, tanto de forma regional en los países norteafricanos como en el espectro europeo y en los países más próximos en términos geográficos.

8.1. Dimensión social

A nivel social, una cooperación efectiva entre el yihadismo y el tráfico de drogas en África Subsahariana contempla varios desafíos que se añaden al ya de por sí peligro de la existencia de este negocio en la economía sumergida, sobre todo por el hecho de que esta actividad clandestina lucre y refuerce no solo la presencia de los grupos yihadistas que se están haciendo con el control de vastos territorios en el Sahel y amenazan con expandirse hacia el Golfo de Guinea sino también el reto que supondría que esta actividad sirviera de aliciente para alimentar de una manera más expandida y generalizada a la economía local y los grupos tribales. Este arraigo desde la esfera social constituiría un desafío bastante complejo de erradicar, sobre todo al no disponer de fuentes económicas alternativas que suplieran las necesidades de la sociedad en unos márgenes dignos que permitiesen poder prosperar al conjunto de la población. A su vez, y debido al hecho de que los individuos relacionados con el contrabando de droga son capaces de mejorar su prestigio y posición social, estos resultan más influyentes a la hora de gestionar los asuntos públicos y la gobernanza local en determinados espacios locales y sobre la población que reside en ellos, imposibilitando cualquier progreso social que consiguiera erradicar a la delincuencia organizada como vector de desarrollo.

La consolidación de la presencia del entramado del narcotráfico responde a un fenómeno que a menudo se nutre de un clima social convulso, donde el conflicto y la inestabilidad incentivan el desarrollo de este tipo de actividad ilegal y la aparición de una inseguridad generalizada. Lo mismo ocurre con el yihadismo, un actor que frecuentemente adopta el rol que las instituciones locales no consiguen realizar de manera efectiva en ciertas zonas como podría ser la frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso o la cuenca del Lago Chad. El sentimiento de abandono percibido a nivel local tiene efectos positivos en el

reclutamiento de individuos tanto en el crimen organizado como en el terrorismo, siendo motivados en su mayor parte por la remuneración por los servicios prestados, por protección o por la seguridad de los propios individuos y de sus familias a la hora de engrosar una u otra plantilla.

El componente social se debe complementar con el fenómeno migratorio, el cual puede sucederse en caso de que la población decidiera abandonar sus lugares de origen por la violencia y la conflictividad emanadas de los enfrentamientos y los conflictos generados por el tráfico de droga, por lo que las previsibles riquezas generadas por el narcotráfico a líderes de comunidades y grupos locales a menudo se traduce en una coyuntura adversa para el resto de la población. Solo en 2021, la violencia desplazó alrededor de medio millón de personas en el Sahel, según datos de las Naciones Unidas, contribuyendo a aumentar la cifra de los 2.5 millones de desplazados por los conflictos armados en la región durante la última década (Naciones Unidas, 2022).

Finalmente, a la sociedad le afecta también la vinculación del fenómeno del tráfico y el yihadismo en el ámbito de la salud, con un consumo doméstico aumentando precipitadamente, especialmente entre los más jóvenes. El consumo de cannabis en África evidencia una tendencia que agrava la proyección del narcotráfico a través del continente. Según el Índice de Percepción del Uso del Cannabis, el consumo ha aumentado en más de la mitad de los países africanos en el periodo de 2010-2019 (UNODC, 2021a:21). La dependencia de cada vez más sectores de la población indica un problema creciente de adicción a sustancias que obligan a los consumidores de los países de estudio a seguir consumiendo drogas, con unos problemas de adicción y dependencia tan intensos que amenazan con crear repercusiones irreversibles a nivel socioeconómico.

8.2. Dimensión económica

Además del componente social, esta sinergia entre ambas estructuras delictivas alberga la amenaza de permitir una retroalimentación del yihadismo y una importante fuente de financiación por parte del crimen organizado, desembocando en un fortalecimiento de los grupos terroristas que les brindara, en última instancia, la oportunidad de acoger y atraer a una buena parte de la sociedad civil entre sus filas, bien por motivación ideológica o por necesidad económica. Una fuente de financiación de tal magnitud también permitiría aumentar su capacidad de proyección hacia objetivos más ambiciosos y ataques a mayor escala, erigiéndose como un foco de inestabilidad a las regiones más próximas al continente, sobre todo para los países europeos al ser estos principal objetivo de ataque por parte de grupos como Al Qaeda o Daesh.

Se está percibiendo una tendencia creciente en el mercado de la droga en países con un nivel de desarrollo económico escaso (EUROPOL, 2019:77) y una incapacidad permanente en el desarrollo de actividades económicas alternativas para los jóvenes y la clase media, que ven cómo el mercado de la droga proporciona grandes márgenes de beneficios y una sensación de protección colectiva tanto para los trabajadores como sus familias. Por tanto, el riesgo de la cooperación entre ambos espectros delictivos repercute considerablemente en el entorno laboral y conlleva unos perjuicios en el resto de los negocios de la economía formal que se ven impedidos a la hora de competir con las mismas normas y leyes, atrayendo unos efectos negativos en las inversiones y flujos de capital externo.

Por tanto, uno de los impactos a nivel desestabilizador del tráfico de droga pasa por que potencie una mayor dependencia de la economía informal en detrimento de una economía reforzada, con la consecuente obstaculización de un desarrollo y una perspectiva económica de futuro que llega incluso a

conseguir una pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones, un crecimiento en la desigualdad y en la distribución de la riqueza y una reducción de recursos destinados a combatir otro tipo de actuaciones criminales como podrían ser el fraude o la corrupción.

8.3. Dimensión institucional y política

La corrupción endémica y déficit democrático con la que cargan ciertos países africanos juega un papel predominante en la perpetuación de este tipo de actividades criminales, con una débil capacidad de ejecución y aplicación de las leyes que proporcionan una suficiente percepción de impunidad para la actividad criminal.

En México ha sucedido recientemente con el fentanilo, un opiáceo sintético similar a la morfina, que ha provocado una epidemia tanto en el país centroamericano como en Estados Unidos. Las cifras recaudatorias por la venta de este narcótico superan los cientos de millones de dólares, y los cárteles de la droga mexicanos a menudo se encuentran vinculados con cierta parte del aparato político del Estado (Hernández, 2021).

A las consecuencias en los ámbitos social y económico le siguen también una serie de implicaciones políticas, en la medida en que el aparato estatal tendría serias dificultades para hacer imponer su autoridad y asumir el control de lo que sucede en su propio territorio, provocando una sensación de inseguridad social que podría contribuir al auge de milicias rebeldes contra el sistema de gobierno bajo un pretexto de incompetencia política.

Esta falta de credibilidad juega en contra de las dinámicas políticas sucedidas en el último año en el teatro africano. Solo entre 2021 y 2022 se han dado un

total de cuatro golpes de Estado en Mali, Guinea, Sudán y Burkina Faso, mientras que Chad se encuentra sumido en una junta militar de transición desde que su presidente fuera abatido en un enfrentamiento contra grupos rebeldes en el norte del país. Por su parte, las constantes muestras de poder por parte de los grupos terroristas operativos en Mali o Sudán ponen en entredicho la capacidad disuasoria real de las fuerzas de seguridad nacionales, y por extensión la confianza y credibilidad de la sociedad en el gobierno de turno, por lo que una colaboración entre el tráfico de drogas y el yihadismo comprende serios riesgos también para la fragilidad de las instituciones y la deslegitimación de su sistema de gobernanza.

¿Cuál es el papel del Estado en este tipo de sinergias?

Un aparato estatal que se sustenta recíprocamente con el negocio de la droga acarrea consecuencias severas que a la larga impiden la erradicación del narcotráfico en el continente, haciendo de puerta de entrada a la mercancía proveniente de América del Sur que llega a través del Atlántico. También revela que la droga está arraigada en buena parte del organigrama institucional que permite al Estado funcionar a costa de una economía robusta, lastrando las posibilidades de desarrollo del país y de la sociedad en su conjunto con respecto al resto de sus vecinos regionales. Al factor político lo acompaña inevitablemente el componente histórico del país, pues no es sencillo para un Estado con una relativa fragilidad estructural y corrupción endémica alejarse del negocio de la droga por decisión propia.

Aun así, los factores exógenos al país lo hacen inevitablemente responsable de gestionar lo que acontece en su territorio: incluso algunos de los que fueron altos mandos del gobierno maliense en 2012 han reconocido posteriormente que la aquiescencia y complicidad estatal con el crimen organizado provocó la pérdida total de confianza de su población en el norte del país, atrayendo a combatientes tuareg de Libia que pavimentarían el camino hacia la rebelión que tuvo lugar a principios de año (Lacher, 2013:14).

El vínculo entre el yihadismo y el narcotráfico complica los cálculos de resolución de conflictos efectivos en aquellos países con un contexto de inestabilidad prolongada. En el caso de Libia, oficiales estadounidenses estimaron que

los beneficios del narcotráfico han proporcionado a AQMI una ventaja competitiva para monopolizar el mercado del tráfico de armas en Libia desde la caída del régimen de Gadafi en 2011 (Rabasa et al, 2017:103). También apuntan a que los beneficios de la cocaína fortalecieron la presencia y recursos de los islamistas en la lucha por el control del norte de Mali en 2012, por lo que no es de extrañar que la conexión entre ambas actividades criminales, aunque contestada por las investigaciones y menoscabada por ciertos líderes yihadistas, haya encontrado en algunos contextos una ventana de oportunidad para avanzar en la agenda y estrategias del yihadismo local y perpetuar una forma de desgobierno que aliente al terrorismo como forma de violencia política.

8.4. Dimensión de la seguridad

Los riesgos de la confluencia entre el narcotráfico y el yihadismo revisten de una importante magnitud, especialmente por el carácter transnacional de ambos. Su cooperación sobre el terreno, si bien resulta grave, no es tan desafiante en términos de ámbito de actuación como podría considerarse una posible colaboración a la hora de introducir a combatientes yihadistas por las vías de entrada de la mercancía hacia el espacio europeo. Si bien cuenta este aspecto con un fuerte sistema de control y presión policial, especialmente en los países del flanco sur de Europa, el riesgo también se proyecta en la posibilidad de enviar yihadistas al interior de los países europeos para que puedan ejercer de intermediarios entre los cárteles y los distribuidores locales. A pesar de esta posibilidad, resulta evidente que los individuos sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas cuentan con una monitorización y vigilancia mucho mayores que la que pueden tener los narcotraficantes, por lo que en términos realistas esta práctica podría resultar contraproducente para los individuos involucrados en el tráfico de drogas.

Aun así, la naturaleza de este vínculo implica desafíos adicionales y una realidad más heterogénea que a la que las fuerzas y cuerpos de seguridad se enfrentan cuando lidian exclusivamente con la lucha antiterrorista, por lo que es un factor a seguir de cerca en la evolución de este riesgo para la seguridad regional y, especialmente, para los países de la órbita europea y aquellos que, como España, son frontera natural en la entrada y salida de la mercancía ilegal y del terrorismo transnacional.

Otro factor que contribuye a amplificar los riesgos para la seguridad en la confluencia entre el yihadismo y el tráfico de droga, especialmente para el vecindario europeo, es la posible desestabilización de las fronteras directas con el Magreb. Todas estas profundas transformaciones contextuales en la forma de operar en ciertos países tienen la posibilidad de repercutir directamente en la seguridad de las fronteras de los países más próximos, cuya inestabilidad regional podría traducirse en una mayor congestión en la oleada de desplazados y migrantes en busca de mayores oportunidades y huyendo de la grave crisis social, constituyendo por ende un riesgo asociado a la seguridad y, por tanto, a los intereses estratégicos europeos en general y a los países más próximos en las costas del Mediterráneo en particular, especialmente para España.

Al objeto de estudio, asimismo, hay que añadirle las variables exógenas que ocurren paralelamente o sin razón estrictamente ligada al fenómeno de la criminalidad. Uno de esos elementos es el cambio climático, lo que sin duda influirá en la relación entre el tráfico de drogas y el yihadismo a medida que se perciban sus efectos en el nivel de producción de droga, los cambios físicos de las rutas de tránsito y cuando los recursos limitados resulten en una crisis de abastecimiento cada vez más evidente.

El segundo elemento es el factor migratorio. A pesar de no existir evidencias de que la migración sea una herramienta que usen los criminales para introducir la droga en el mercado europeo (EUROPOL, 2019:96), la migración forzosa responde a una de las implicaciones más preocupantes para la estabilidad y seguridad en los países del vecindario regional. En el supuesto en el que la relación entre el tráfico de drogas y el yihadismo se intensificara y retroalimentara las capacidades operativas de ambos actores, consiguiendo expandir su presencia más allá de los actuales límites geográficos, el fenómeno migratorio cobraría especial intensidad en aquellos que necesitaran huir del sistema criminal imperante.

Un factor interesante es el avance del terrorismo como un facilitador del orden social y seguridad pública. Existen zonas donde impera el islamismo más radical, ganando cada vez más terrenos y poblaciones bajo su yugo en ausencia de una seguridad provista por el Estado. Esta progresiva e incipiente forma de proto-estado puede incentivar una vinculación más estrecha entre el narcotráfico y el yihadismo, aunque asumiendo los riesgos de una ofensiva internacional para paliar esa incipiente lucha por la expansión y el dominio de nuevos territorios.

Se ha discutido recientemente sobre la posibilidad de que los países del Sahel experimenten una coyuntura similar a la realidad de Afganistán, en vista del reciente triunfo de los talibán sobre el gobierno central. Sin embargo, esta opción no parece estar reproduciéndose en el teatro africano, dadas las diferentes condiciones sociales, políticas y culturales de ambos escenarios (Comisión General de Información, 2021).

Por tanto, se hablaría de un fenómeno particular del espacio subsahariano y que no es extrapolable a ninguna realidad que se sucede en el ámbito internacional. El caso de estudio en África es una excepción en sí misma, pues los elementos que contribuyen a su confluencia, ya sean de índole económica, social, cultural o política, no son comparables a los que se suceden en cualquier otro punto de la geografía mundial.

Mientras el narcotráfico sí resulta un riesgo evidente para otras regiones del mundo, como serían América del Sur o Asia central, su interacción con el terrorismo de corte yihadista solo resulta evidente y extremadamente interrelacionada en el caso de Afganistán y la relación entre los talibán con el negocio de opio. La presencia yihadista mundial fuera de este caso en particular focaliza su epicentro de actividad en África Subsahariana, por lo que resulta esencial delimitar los riesgos y desafíos teniendo en cuenta las condiciones por separado. Así, los desafíos a los que se enfrentan el Sahel, el Magreb o el vecindario europeo guardan una relación más estrecha con la seguridad territorial, la amenaza terrorista junto con la expansión de ataques y áreas de influencia en cada vez mayores puntos de la región, la consolidación del tráfico no solo de drogas sino también de armas, cigarrillos o personas así como la consolidación de un aparato criminal terrorista que encuentre en el narcotráfico una de las más importantes fuentes de financiación.

8.5. Dimensión geopolítica

La irrupción de nuevos actores que tradicionalmente no experimentaban una presencia tan marcada propone analizar el impacto de la relación entre el narcotráfico y el yihadismo desde una perspectiva geopolítica. En un contexto de cambio de paradigma en el ámbito de la seguridad, la región de África Subsahariana y, dentro de ella, los países comprendidos dentro de la franja

saheliana están experimentando una serie de turbulencias políticas que no en pocos casos ha motivado la expansión de aliados internacionales alejados de los tradicionales ejes franco-europeos. El reciente acercamiento de países como Mali a Rusia y otras potencias fuera del espacio occidental no hace sino poner más incógnitas en la evolución de la cooperación entre los cárteles de la droga y otros grupos armados operantes en los focos de estudio.

El actual contexto, por tanto, obliga a poner el foco en actores externos que tratan de beneficiarse del caos e impregnar su huella geopolítica en el tumultuoso tablero político de África Occidental y en el resto del tablero subsahariano. Es la sospecha de varios análisis sobre Rusia y la extensión de su músculo paramilitar a través del Grupo Wagner, buscando optar a un mayor acceso a los recursos naturales de los países a cambio de protección de dirigentes y élite política y un apoyo militar contra el terrorismo que no necesariamente exige un compromiso con los derechos humanos, las libertades concertadas en el orden liberal internacional o el estado de derecho que exigen como contraprestación los socios europeos. En Mozambique, Madagascar e incluso Libia, este grupo paramilitar también hace acto de presencia (MackInnon, 2021), por lo que el auge de la cooperación entre el narcotráfico y el yihadismo termina por estar en un segundo plano cuando se trata de hacer negocios y de mantenerse en el poder mediante prácticas que no casan con la forma de ofrecer apoyo por parte de las potencias occidentales.

En el caso de China, su presencia inicialmente de índole comercial está dejando paso a un establecimiento cada vez más evidente de bases militares y presión geopolítica. Esto segundo sigue el compás de lo que sucede fuera del contexto del crimen organizado objeto de estudio en el presente informe, donde las potencias revisionistas promueven una agenda estratégica al margen de lo acordado por parte del resto de potencias en un nuevo orden global que

modele y consuma sus aspiraciones e intereses últimos. Un ejemplo evidente es el acontecido en Mali, donde la junta militar transicional dejó un margen de cinco años para convocar elecciones y llevó a las potencias occidentales y a organizaciones regionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) o la Unión Africana[9] a buscar elevar sanciones y suspender la membresía del Estado africano. Sin embargo, tanto Rusia como China votaron en contra de las primeras medidas de represalia económica en el Consejo de Seguridad, yendo en contra de la voluntad del resto de potencias, por lo que las alianzas y los equilibrios de poder en África están siendo testigos de una reconfiguración de una manera cada vez más evidente.

Las alianzas y los equilibrios de poder en África están siendo testigos de una reconfiguración de una manera cada vez más evidente

El declive occidental en las misiones y operaciones de mantenimiento de la paz y lucha contra el terrorismo ha sido evidenciado por el repliegue y reconfiguración de tropas danesas, noruegas y especialmente francesas en el marco de la Operación Barkhane y la Fuerza Especial Takuba, lo cual abre un espacio de explotación para la confección de alianzas con otras potencias que ayuden a los estados regionales a lidiar con el avance yihadista. Sin embargo, la incertidumbre sobre los métodos de actuación y las probabilidades de éxito añaden un desafío adicional al acercamiento de actividades criminales como el tráfico de drogas y el yihadismo, al no encontrar una oposición fuerte que merme sus capacidades de control y colaboración en los espacios donde actualmente cooperan. La reconfiguración de alianzas regionales no necesariamente implica un periodo de caos que pueda explotar el crimen organizado, pero los parámetros por los que se rijan los nuevos socios internacionales

9 Otros países como Burkina Faso, Guinea o Sudán han sido similarmente suspendidos de la Unión Africana por los golpes militares sucedidos en sus territorios.

previsiblemente incidirá en el nivel de impedimento real que supongan para el mercado de la droga en el continente.

Lo anterior revela cómo el impacto social del tráfico de drogas y el yihadismo agrava no solo el contexto de seguridad regional sino también a su población, a su sistema y funcionamiento político y a las alianzas regionales que se encuentran reformulándose a nivel geopolítico. El riesgo del fenómeno resulta así evidente para la agenda estratégica de los responsables públicos, la política internacional y la sociedad civil, teniendo en cuenta que la naturaleza transversal del fenómeno impide satisfacer las demandas de estabilidad y paliación de riesgos en el entorno nacional. Por ello, resulta conveniente orientar una acción estratégica enérgica, abarcando los diferentes ámbitos de incisión del fenómeno y teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido estabilizar esta región para una serie de terceros países en sus planes y estrategias de acción exterior.

9. LINEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA

La porosidad y falta de control efectivo de las fronteras, especialmente en el extremo oriental y occidental del continente, hacen de estas zonas un preocupante y creciente foco de criminalidad tanto de la industria de la droga como de otros ámbitos criminales, como el tráfico de armas, de personas o el yihadismo.

Teniendo en cuenta la multitud de dimensiones que resultan afectadas o pueden comenzar a sufrir los estragos de la relación simbiótica entre uno y otro tipo de crimen organizado, la comunidad internacional ha tratado de anticiparse y desplegar una serie de mecanismos con el foco puesto en la prevención

y la erradicación de ambos fenómenos delictivos. Sin embargo, y a pesar de reconocer en numerosas ocasiones la peligrosidad de su vínculo, a menudo se ha abordado el fenómeno estableciendo objetivos separados y sin tratar de dirigir los esfuerzos a combatir la problemática en su conjunto. Así, y sin restarle peso a la importancia que tienen los instrumentos legales internacionales en la lucha contra una y otra actividad criminal, el ámbito de su aplicación puede resultar limitado en aras de abordar el problema y las causas que contribuyen a perpetuar este tipo de tendencia delictiva.

Con el objetivo de analizar las líneas estratégicas que orientan los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la alianza entre el tráfico de droga y el yihadismo, resulta conveniente identificar cuáles son aquellos instrumentos que se encuentran gobernando en el sistema internacional y que contribuyen a contrarrestar de manera sustancial la inmensa capacidad operativa de ambas actividades operativas en espacios geográficos distantes.

9.1. Instrumentos internacionales vigentes en la lucha contra el tráfico de drogas y el yihadismo

El marco global de instrumentos jurídicos a nivel internacional contra el tráfico de drogas lleva décadas en constante mejora e implementación. El sistema de fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ha ido incorporando nuevos mecanismos que favorecen su aplicación y cumplimiento, consiguiendo cierto triunfo a nivel internacional en el control sobre el uso, consumo y tratamiento de las sustancias de manera legal en prácticamente la totalidad de los países que componen el sistema de las Naciones Unidas (JIFE, 2021:17).

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, también conocida como la Convención de Palermo, marcaba un hito en los instrumentos universales dirigidos a combatir la delincuencia organizada transnacional, reconociendo un creciente vínculo entre esta y los delitos relacionados con el terrorismo (UNODC, 2004:2). Anteriormente a la Convención de Palermo, las tres convenciones contra las drogas se habían dado en 1961 (Convención Única sobre Estupefacientes), junto a su Protocolo de Modificación (1972), en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) y los cuadros de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, reconociendo un desafío transnacional que debía contemplar una respuesta global y no limitarse única y exclusivamente al ámbito de actuación nacional. Más recientemente, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas adoptó en 2019 la Declaración Ministerial para abordar y combatir el desafío mundial de las drogas, limitándose a manifestar la necesidad de hacer cumplir el marco de normativas vigentes sobre políticas relacionadas con la lucha contra la droga y comprometiéndose a revisar dicho cumplimiento en 2029 (UNODC, 2019a).

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, los instrumentos legales internacionales desde 1963 han llegado hasta casi la veintena, y en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 se abordaba específicamente la lucha contra las crecientes vinculaciones entre el terrorismo y su financiación por parte de la delincuencia organizada (Naciones Unidas, 1999:3). En la actualidad, y a modo complementario, existen una serie de mecanismos destinados a combatir el fenómeno del terrorismo a nivel tanto civil como militar, con operaciones conjuntas entre los países más afectados y contando también con apoyo a nivel internacional como hasta muy recientemente el caso de la Operación Barkhane en Mali, liderada por Francia. A

nivel internacional, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) ofrece un apoyo indiscutible en asuntos de estabilización y protección, mientras que en el ámbito europeo, la UE proporciona apoyo a nivel militar a través de la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Mali (EUTM Mali), en República Centroafricana (EUTM RCA), en Somalia (EUTM Somalia) y en Mozambique (EUTM Mozambique) y a nivel civil a través de las Misiones de Capacitación de la Unión Europea en Mali (EUCAP Mali) y Níger (EUCAP Níger), entre otras. Todas estas iniciativas se complementan en su objetivo de dar apoyo, entrenamiento y desarrollar capacidades propias a los estados de la región en su lucha contra una amenaza que corre el riesgo de extenderse a lo largo del Sahel y en toda la periferia que la rodea, buscando una restauración de la paz y una estabilidad que promuevan a su vez el desarrollo humanitario y político. En el entorno subregional, los países saheliano de Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger mantienen un marco de cooperación conjunto a través de varias operaciones contra el terrorismo, donde se añaden países del vecindario amenazados por su expansión como Costa de Marfil, pero también mantienen lazos de colaboración regionales para políticas de seguridad como el G5-Sahel, donde intercambian iniciativas y debates sobre cómo actuar para hacer frente a los acontecimientos de seguridad que suceden en la región. Por su parte, los países del Golfo están intensificando en gran medida sus capacidades e iniciativas de contraterrorismo ante la creciente amenaza que se encuentran en su panorama de riesgos regionales.

En lo que respecta a los mecanismos contra el crimen organizado, y en ausencia de competencia para desplegar capacidades sobre el terreno, la UE ha ejecutado también una serie de mecanismos destinados a monitorizar su fenómeno desde el exterior. La Plataforma Multidisciplinar Europea Contra las Amenazas Criminales (EMPACT por sus siglas en inglés), creada en 2012 y

cuyo compromiso se ha renovado en 2021 para el periodo 2022-2025, permite monitorizar la actividad delictiva en cuanto al tráfico de cannabis, cocaína y heroína en el interior de las fronteras europeas (EUROPOL, 2021). En una línea similar trabaja el proyecto Acción Contra las Drogas y el Crimen Organizado (EU-ACT por sus siglas en inglés), que coopera y coordina la actividad a nivel regional y transnacional para la aplicación de la ley en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de droga, en este caso de heroína y otros opiáceos en África Oriental (EU-ACT, 2021).

Para combatir la distribución de cocaína, la UE ha invertido más de 50 millones de euros en las rutas de tránsito más frecuentadas a lo largo de 40 países a través de programas de protección y control vía terrestre, aérea y marítima: el programa AIRCOP permite el intercambio de información a través de la base de datos en aeropuertos específicos en África, el Caribe y América Latina, mientras que el programa SEACOP se encarga de detectar embarcaciones sospechosas e intercambiar información sobre embarcaciones de África Occidental, América Latina y el Caribe. Por su parte, el programa CRIMJUST se encarga de la cooperación en materia de justicia criminal y se incorpora al trabajo que se realiza desde el Programa de la Ruta de la Cocaína (EUROPOL, 2019:218).

A nivel regional, en África Subsahariana también se han llevado a cabo fuertes iniciativas diseñadas para combatir el narcotráfico. Entre ellas destacan el Plan de Acción de la Unión Africana para la fiscalización de drogas y la prevención del delito (2007-2012) o el Plan de Acción regional de la CEDEAO sobre el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada, que contaba con su fecha de finalización en 2020 (CEDEAO, 2020). Dichos mecanismos han fortalecido la capacidad regional en la lucha contra el tráfico de drogas mediante la cooperación conjunta con otros organismos policiales como la

INTERPOL, con operaciones de éxito como la Operación Atakora, donde la acción conjunta les permitió incautar casi ocho toneladas de droga en las zonas fronterizas de Benín, Togo y Ghana (CEDEAO, 2013:17). La Unión Africana ha llevado a cabo su propio plan de acción en el control de la droga y prevención del crimen (2019), que finalizará en 2023. En un marco más amplio, la Visión Estratégica para África 2030 de las Naciones Unidas resalta la necesidad de proporcionar más seguridad a la sociedad africana, entre otros retos, con respecto a las drogas y el crimen organizado.

A nivel trasatlántico, a través de su Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos también ha sido muy activo en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de países en África Occidental mediante la asistencia y construcción de unidades operativas para combatir el narcotráfico. En Nigeria, por ejemplo, la "guerra contra la delincuencia organizada" se ha implementado a modo excepcional entre el resto del vecindario subregional, lo que revela un ausente ejercicio de comprensión del desafío que supone el crimen organizado en África y su confluencia con el resto de actores no estales en el teatro regional desde una perspectiva africana (Sansó-Rubert, 2018:55). En Guinea-Bissau, la DEA fue capaz de contribuir al arresto de políticos implicados en el negocio de la droga en 2012, lo cual tuvo una gran repercusión en las proyecciones del narcotráfico en el país.

En líneas generales, todas estas iniciativas junto con las que han impulsado organizaciones gubernamentales como las Naciones Unidas o la Unión Europea y sus misiones han provocado que el volumen de incautaciones haya aumentado considerablemente, aunque una vez más, la ausencia de datos que respalden los actuales niveles reales de tráfico de droga previenen una evaluación rigurosa sobre el grado de resultados y éxito en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

A nivel de cooperación internacional, el vecindario más cercano – y por tanto, más proclive a sufrir las consecuencias directas de esta relación simbiótica – encarnado por la Unión Europea ha sido muy activo en los asuntos concernientes a la lucha contra el fenómeno tanto del terrorismo como del crimen organizado, particularmente los Estados miembro más próximos en términos geográficos como es el caso de España. Este último, consciente de su papel privilegiado como puerta de entrada y de salida al continente africano, resulta uno de los actores más involucrados en contrarrestar las proyecciones tanto de la cooperación como de la convergencia entre el tráfico de drogas y el yihadismo.

9.2. El papel de España en la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo

El vínculo entre el narcotráfico y el yihadismo no es una novedad reciente en el panorama de riesgos globales, sino que es un fenómeno que se ha dado en numerosas ocasiones dentro del espectro delictivo. En Marruecos, el tráfico de hachís fue identificado como una de las principales fuentes de financiación de tres incidentes que se relacionan con el terrorismo: el frustrado intento de ataque a un buque de la marina de Estados Unidos en Gibraltar en el año 2002, la serie de atentados suicidas en Casablanca, Marruecos, en el año 2003 y los ataques del 11 de marzo de Madrid en el año 2004 (Naciones Unidas, 2004). Este último caso advierte de la peligrosidad que el uso o venta de droga por parte de yihadistas representa para países ya no solo parte del continente africano sino de su entorno geográfico más próximo. Según el Real Decreto 873/2014 publicado en el BOE, mediante el cual se integran los órganos españoles de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y nace el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), “la vinculación entre terrorismo y crimen organizado es un hecho objetivo” (BOE,

2014) . En España se han dado varios casos de esta combinación o vínculo entre un hecho delictivo y otro, demostrando que a menudo el tráfico de droga es empleado por el yihadismo para financiar parcialmente sus planes terroristas. El caso más destacado, como previamente expuesto, se dio durante la preparación y ejecución de los ataques del 11 de marzo en Madrid, donde se pudo constatar que varios miembros de la célula que planearon los ataques estaban involucrados en el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas para recaudar fondos para la operación, sirviéndose de estos ingresos para la compra de los explosivos que luego usarían para detonar las bombas que acabaron con la vida de 192 personas (del Cid Gómez, 2010:13). De hecho, en el marco de la investigación por los atentados, a uno de los implicados (Rafa Zouhier) se le condenó también por un delito de tráfico de drogas al encontrar en la vivienda de un primo suyo donde residía el acusado casi 60 kg. de hachís y otros estupefacientes (Audiencia Nacional, 2007:396). De hecho, a Zouhier se le acusa de haber actuado como intermediario en el establecimiento de canales de negociación que permitirían a Jamal Ahmidan (alias El Chino) y a sus colaboradores en la planificación de los ataques ponerse en contacto con traficantes españoles e intercambiar droga por explosivos que les permitiesen culminar con sus objetivos terroristas en España (Reinares, 2014:109). Otro de los acusados, Hicham Ahmidam, primo de El Chino, estaba cumpliendo condena por tráfico de drogas en Marruecos cuando tuvo lugar su sentencia por los atentados terroristas de Madrid (Barrenechea, 2017:119).

En el trascurso de la Operación Queixalada, una célula terrorista de origen pakistaní estaba planeando ataques en Barcelona y fue condenada (sentencia 39/2007 de la Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Constitucional) no solo por pertenencia a una organización terrorista sino que a uno de ellos también se le condenó por tráfico de heroína. Dicha organización financiaba a través de locutorios y el sistema de envío hawala fondos para financiar a la red

global de Al Qaeda (CITCO, 2017). Por otro lado, en el marco de la Operación Nova, la Guardia Civil desmanteló el grupo terrorista "Mártires por Marruecos" que realizaba labores de proselitismo en el interior de las prisiones y, entre otros delitos, también se le fue imputado (Sentencia audiencia nacional 8/2011) un delito de tráfico de hachís (CITCO, 2017). En la Operación Tigris, a uno de los acusados se le intervino hachís e instrumentos que implicarían un tráfico de este narcótico (Sentencia Audiencia Nacional 31/2009), mientras que en la Operación Césped dos individuos fueron imputados por financiar a la red de Al Qaeda, mediante delitos comunes entre otras actividades, y cuya financiación serviría para llevar a cabo el atentado contra la Sinagoga de la Ghriba (Túnez) en 2002 (CITCO, 2017).

Por su parte, hasta 2010 AQMI fue conocido por usar los ingresos recabados del tráfico y reventa de cocaína en España y Argelia para financiar sus campañas en el norte de África (del Cid Gómez, 2010:11). La Operación Green de la Guardia Civil también demostró que la organización se financiaba a través de robos en el sur de la Península Ibérica para su posterior comercialización y dedicando las ganancias a financiar al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), precursor de AQMI (CITCO, 2017). Por su parte, la Operación Gamo detectó una célula en Alicante y Granada que empleaban una variedad de actividades delictivas, entre ellas el tráfico de estupefacientes, para financiar al GSPC. Así pues, si se puede hablar de un grupo terrorista con vínculos con el narcotráfico sería indiscutiblemente la marca de Al Qaeda en el Magreb Islámico, quien desde sus inicios, y especialmente bajo el liderazgo del terrorista Mojtar Belmojtar, se constituyeron como piezas clave en la red de financiación del terrorismo entre la cual se incluía el tráfico de droga (Comisión General de Información, 2021).

En la entrevista mantenida con personal de la Comisión General de Información de la Policía Nacional (octubre, 2021) se reafirmó la importancia de la anticipación previa la comisión del hecho o del delito: desplegar medidas de prevención no solo desde el plano operativo sino desde el entramado logístico. Tanto el terrorismo como el crimen organizado se tratan de fenómenos globales que trascienden al ámbito local y nacional. Sin embargo, es manifiesta la existencia de un problema de intercambio y obtención de información (Comisión General de Información, 2021).

Las operaciones antiterroristas, unidas al factor diplomático, emergen como instrumentos imprescindibles para conocer la magnitud y el alcance del fenómeno al que nos enfrentamos, con importantes mecanismos de vigilancia e intervención en los focos de conflicto objetos del presente estudio. España es lugar de destino y tránsito habitual de cannabis o cocaína en muchas de las cadenas de tránsito globales como podrían ser la ruta norte desde el Caribe hasta las Azores hacia Galicia o Portugal, la ruta media desde América del sur hasta las islas en África (incluyendo Canarias) y la ruta africana desde África Occidental y el Golfo de Guinea hasta Marruecos con destino a España (Sansó-Rubert, 2018:41).

Para mitigar esta amenaza, los encargados de velar por la seguridad en España confían la monitorización de los fenómenos que se traducen en amenazas directas para nuestro país a través de grupos especializados, como GAR-SI (Comisión General de Información, 2021): la Guardia Civil lidera proyectos que recaban información destinada a anticiparse a estas amenazas a través de los Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel, en colaboración con Francia, Portugal e Italia o los Equipos conjuntos de Investigación (ECI) de la Policía Nacional en Níger (Ortega, 2021).

Para España es importante mantener una estabilidad en la región del Sahel y en el resto de África Subsahariana en el ámbito de la seguridad civil pero también a nivel político, donde un estallido social a menudo se traduce en un riesgo geopolítico evidente: las cuantiosas bolsas de población a las que abastecer, en ausencia de autoridad y orden social, obligan a atender un riesgo que alimenta la corrupción y el auge del narcotráfico como medio de sustento económico para cualquier nivel social, desde la población general hasta la clase política (Comisión General de Información, 2021). El grado de permeabilidad, además, insta a aumentar los niveles de riesgo asociados a la amenaza tanto del terrorismo como del crimen organizado (Comisión General de Información, 2021). Se cree así por tanto necesario definir la magnitud del problema en unos parámetros que varían en unos márgenes muy limitados y se presentan volátiles y en constante cambio, por lo que la vigilancia desde las zonas fronterizas, la obtención de información y la cooperación tanto a nivel bilateral como multilateral se traducen como mecanismos de gran ayuda en la lucha contra ambos fenómenos por separado así como para entender su cooperación manifiesta.

Según organismos de control fronterizo como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), España constituye uno de los principales puntos de entrada de cocaína hacia los mercados europeos, en detrimento de otras rutas de paso como los Balcanes, que no representan ni el 2% del total del volumen de cocaína que se incauta en las zonas fronterizas de Europa (EUROPOL, 2019:137). Es por ello por lo que España se impone como un país muy activo en la lucha contra el narcotráfico en el Mediterráneo, tanto en la parte occidental, central como oriental, orientando sus esfuerzos en función de las condiciones coyunturales que se ofrezcan (Comisión General de Información, 2021). En términos globales, participa activamente en programas de lucha contra el crimen organizado como el Programa de Cooperación entre

América Latina, el Caribe y la Unión Europea (COPOLAD II), liderado por España. A nivel europeo, los pilares sobre los que se cimienta la cooperación entre los países miembros de la UE son la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) y Eurojust, unidades en las que España participa activamente tanto en sus actividades como en sus iniciativas. Asimismo, el auge de ciertas sustancias para consumo doméstico, como la heroína, evidencian un potenciador del riesgo para España en el componente migratorio, siendo que una degradación en el panorama de salud regional comprende el riesgo de forzar una salida masiva que trajera como resultado una creciente congestión migratoria hacia el continente europeo (Comisión General de Información, 2021).

Por su parte, el terrorismo internacional está presente como una de las principales amenazas para la seguridad nacional de España, y el auge del yihadismo en el Sahel, el Magreb u Oriente Medio se entienden como riesgos cercanos de potencial proyección sobre el país. Por ello, su prevención y lucha se consideran como dos de los ejes prioritarios en su acción exterior. A nivel bilateral, la cooperación judicial, policial y de intercambio de inteligencia suponen los tres principales pilares de colaboración hispano-marroquí, una relación fortalecida especialmente desde los ataques del 11-M que ha permitido a ambos países el intercambio de información sobre todo a nivel de terrorismo, tráfico de drogas y actividades relacionadas con el contrabando y el tráfico ilícito de migrantes (Pérez, 2022:154; Barrenechea y Alonso, 2015:214). A nivel intergubernamental, España es un participante activo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que tiene como misión crear estándares internacionales contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, mientras que en 2020 se aprobaba el Plan Estratégico Nacional contra la Financiación del Terrorismo (PENCFIT), que se proponía "detectar e impedir la transferencia de recursos económicos a favor de las organizaciones terroristas" (DSN, 2021:10).

En cuanto a la problemática de la financiación terrorista por parte del crimen organizado, se han llevado a cabo mecanismos de control en el ciclo de circulación de dinero (DSN, 2020:51). En 2019, se desplegaron dos operaciones de control de movimientos denominadas "Global" y "Daphne", esta última bajo el marco del Plan de Acción del Grupo de Cooperación Aduanera de la UE, con el objetivo de investigar aquellas operaciones de movimiento de dinero sospechosas de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las operaciones fueron complementadas con una serie de reuniones de coordinación para el intercambio de información a través del Grupo Operativo de Inteligencia Financiera (GOIF) con representación de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, el Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria. Se tiene constancia así de una amplia red de colaboraciones e instrumentos multilaterales vigentes en la lucha tanto contra el tráfico de droga como contra el terrorismo en la región objeto de estudio, mecanismos que han proporcionado un fuerte paraguas de protección frente a las amenazas transversales que suponen ambos fenómenos. Sin embargo, existe un largo camino por recorrer en la lucha contra ambos, pasando en primer lugar por reconocer el hecho de que el terrorismo se persigue mucho más intensamente que el tráfico de drogas, competencia este último del ámbito nacional. Es en este último aspecto precisamente donde reside el segundo factor a recalcular, pues el tráfico de droga en su camino hacia su consumidor final no se limita necesariamente al mercado doméstico y, por ende, requiere de una respuesta conjunta por parte de la comunidad internacional y más específicamente de los Estados regionales y del vecindario más próximo.

9.3. Recomendaciones

El primer paso para combatir el tráfico de drogas en el continente es obtener datos y análisis sobre la magnitud real del desafío. En no pocas ocasiones los

datos no revelan fehacientemente la realidad de la situación, y puede resultar contraproducente abordar un desafío sin tener en cuenta la información basada en evidencias. Supone así una necesidad sentida fortalecer la evaluación del riesgo a nivel regional, nacional y local, con un enfoque holístico e integral que monitorice la actividad criminal de lo que ocurre en el interior de los países objeto de estudio en general y en los puntos calientes examinados en particular. También controlar lo que ocurre en el mercado doméstico, para conocer las necesidades del consumidor y el uso que se dan a ciertas sustancias sin control internacional como el tramadol (un tipo de opiáceo muy adictivo) o el fentanilo y sus análogos. El intercambio de inteligencia asimismo es preciso en el entorno de transnacionalización que caracteriza el fenómeno objeto de estudio, por lo que una sugerencia que se desprende de las presentes recomendaciones pasa por fortalecer los canales de comunicación y reciprocidad entre los países del vecindario africano y aquellos donde más conexiones se han encontrado a la hora de establecer los nexos en las rutas de tráfico tanto a nivel marítimo, terrestre y aéreo. En el pasado más reciente, Mauritania interrumpió el intercambio de información sobre asuntos de seguridad con su vecina maliense al impedir esta última procesar por la policía mauritana a un agente estatal acusado de informar a AQMI de una ofensiva planeada, un hecho que se saldó con la baja de varios de sus oficiales (Lacher, 2013:14).

Para España y, por extensión, para la Unión Europea, el estado final deseado en la lucha contra el narcotráfico y su relación con el yihadismo pasa por formar y operar exitosamente a las fuerzas de combate y cuerpos de seguridad locales para que puedan operar eficazmente allá donde el fenómeno objeto de estudio se encuentra más latente, como podría ser Mali o Somalia (Díez, 2021). El problema, sin embargo, se torna contra la propia institución supranacional, pues la efectividad militar en ocasiones es empleada a su voluntad por altos mandos militares y dirigentes políticos (Díez, 2021). Siendo que el mayor

problema institucional en África es albergar a un militar a las órdenes del poder civil, el principal desafío a la hora de abordar el fenómeno del yihadismo y su relación con el narcotráfico reside en la ausencia de una auditoría que establezca unos indicadores y parámetros válidos y que se vele por un régimen de rendición de cuentas que persiga eficazmente las inclinaciones políticas africanas en torno a la corrupción y el clientelismo. Ante la ausencia de dichos indicadores, la Unión Europea se encuentra sumida en una problemática donde, en el momento de la finalización del plazo establecido para enfrentar con un foco específico de conflicto, la problemática no ha terminado por solucionarse y, en caso de haber mejorado, no existe un procedimiento que depure responsabilidades de los distintos actores implicados, incluidos los propios gobiernos (Díez, 2021).

A nivel político, y a pesar de la relativamente débil capacidad estatal para combatir el narcotráfico unilateralmente, a menudo la falta de voluntad política contribuye a que el problema se exacerbe todavía más, en su mayor parte debido a que individuos conocidos en la industria del narcotráfico se suelen ver envueltos con conexiones políticas o una cierta complicidad directa o indirecta. Por ello, y para abrir la participación de todos los actores y partes interesados en la lucha contra el narcotráfico, es necesario invertir esfuerzos en las instituciones formales e informales que contribuyen a la seguridad, haciendo hincapié en entender y monitorizar la actividad delictiva que se encuentren en las áreas de estudio. La corrupción en diversos estamentos de la clase política de los países afectados por el cultivo o el tránsito de mercancía ilegal constituye uno de los principales obstáculos a la hora de combatir el narcotráfico y su potencial eje vehicular con el yihadismo, con ejemplos ilustrativos que se han sucedido en países como Somalia o Mali. De esta situación se aprende también una lección: hay que aplicar mecanismos medibles y exigir una reforma integral del sector de seguridad. Una medida a menudo entendida

como una injerencia por parte de los propios Estados africanos y también de potencias extranjeras interesadas en influir en la agenda regional del teatro africano (Díez, 2021). En definitiva, el foco se centra en compartir información a niveles intra e interregionales con un enfoque transversal entre los países objeto de estudio para conocer hasta qué punto representa una amenaza, así como su impacto, y establecer un sistema de cuantificación hasta el momento inexistente que arroje información y monitorice la actividad de tráfico de drogas y su relación con el terrorismo, la política y los actores involucrados en las dinámicas internas.

En el ámbito de la sociedad, y partiendo de los resultados del análisis institucional de Transparencia Internacional (2021), se pudo comprobar cómo el nivel de capacitación, la protección de las víctimas y testigos así como la escasa participación en el ámbito de la sociedad civil son tres de los factores más débiles a la hora de analizar los mecanismos de investigación en los países objeto de estudio, entre los que se encontraban Ghana y Nigeria (McDevitt y Bullock, 2021:19). En vista de las actuales limitaciones, crear consciencia social sobre la problemática constituye la principal opción para la UE, porque es necesario que los gobiernos y las sociedades locales terminen por reivindicar los cambios exigibles a nivel nacional (Díez, 2021). Mientras eso se encuentra en proceso de desarrollo, una de las propuestas pasa por involucrar a la sociedad civil, líderes tribales y la clase política en la prevención y lucha contra el narcotráfico, así como financiar instrumentos regionales tales como la Reforma del Sector de la Seguridad de la Unión Africana (SSR, por sus siglas en inglés), iniciativa que previene la instrumentalización política o politización de sectores como el militar o el judicial en la lucha por la gobernanza efectiva, el Estado de derecho y los derechos humanos (Mutangadura, 2021).

Las organizaciones regionales pueden jugar un papel decisivo en la monitorización y perfilación de este fenómeno. Por ello, una de las recomendaciones principales se encuentra destinada a proponer medidas a nivel subregional, focalizadas en algunos países de acuerdo a la investigación. Dichas acciones deben trasladarse a nivel local y complementadas con los esfuerzos e iniciativas a nivel regional que luchan por impedir este tipo de sinergias y otros riesgos que ponen en juego la seguridad regional. Algunas instituciones claves en este sentido tienen una sólida presencia y capacidad de monitorización por su influencia sobre los países objeto de estudio, como la Unión Africana, la UNOWAS y la CEDEAO, contando para ello con la sociedad civil y su integración en este paraguas de colaboración constante. Una cooperación entre los Estados miembro de los anteriores organismos regionales, pero también de aquellos limítrofes – como en el norte de África – repercutiría favorablemente en la capacidad y conocimiento de los individuos objeto de persecución.

En cuanto al ecosistema de la legislación nacional, se ha constatado a lo largo del presente informe que los delitos de terrorismo son castigados más gravemente que aquellos relacionados con el tráfico de droga. Similarmente, en cuanto a la persecución del narcotráfico, anteriormente se ha subrayado el hecho de que no se cuenta con una capacidad internacional de perseguir y juzgar ese tipo de delitos, por lo que solo pueden procesarse a nivel nacional. Por tanto, una reforma de la gobernanza ejercida desde el entorno local podría posicionarse como una alternativa que permitiese formar a un mayor número de agentes policiales y de fuerzas del orden, así como adoptar nuevas medidas que permitieran desmantelar las redes criminales que operan en los focos de conflicto y sus posibles vínculos con ciertos sectores tanto políticos como sociales, subsanando y depurando una serie de responsabilidades que permitiese al Estado ejercer una gobernanza más transparente y eficaz. La confianza en las instituciones como garantes de la seguridad y protección de

los tránsitos más frecuentados por los narcotraficantes, y como medio de fortalecimiento de control en las aduanas tanto de puertos como de aeropuertos y entradas marítimas, resulta esencial para la persecución de este tipo de actuaciones delictivas.

En el caso de las sanciones, una de las propuestas que barajan los especialistas pasa por sancionar más intensamente a los narcotraficantes así como desmilitarizarlos, descartando la posibilidad de sufrir unas penas más leves que les permitan reincidir al cabo de poco tiempo (International Crisis Group, 2018:23). A la hora de combatir el fenómeno dual del tráfico de drogas y el terrorismo, la intensa cooperación policial y de las fuerzas de seguridad a nivel intrarregional que se da en la actualidad resulta imperiosa, a pesar del hecho de que los Estados necesiten realizar un esfuerzo mucho mayor a la hora de compartir información e inteligencia sobre individuos clave en el contrabando de drogas. Perseguir a nacionales de otros países y exponerlos públicamente serviría en este sentido ya no tanto para arrestos o extradiciones sino más bien para prevenir que estos individuos puedan seguir escalando posiciones en el aparato estatal en sus respectivas naciones.

Lo anterior revela la importancia que tiene el esfuerzo y la participación proactiva de los países de la región y la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que regulan ambos delitos a nivel nacional, aunque también exhibe la necesidad de formular una regulación a nivel internacional sobre ciertas sustancias hasta la fecha ausente en lo que concierne al mercado ilícito de ciertas sustancias, como el tramadol y ciertos precursores del fentanilo, ya que su accesibilidad en farmacias y en el mercado regulado ofrece una oportunidad para su explotación en el mercado negro. Como se exponía en la sección 6, recientemente existe una demanda creciente de otras sustancias pertenecientes a la familia de los opiáceos como el tramadol y el fentanilo, por lo que per-

seguir estas regulaciones se sostiene como un paso más en la persecución de estas actividades delictivas en el panorama del tráfico de droga en África. A nivel regional, se han establecido una serie de iniciativas que asientan las claves para abordar la problemática desde su base en el área de blanqueo de dinero, como el Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) en el marco de los programas de lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales de la CEDEAO. Otros mecanismos que complementan los programas de lucha contra el blanqueo de capitales son el Middle East and North Africa Financial Action Task Force o el Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group. Sin embargo, existen algunos retos en la implementación de este tipo de instrumentos, especialmente los que giran en torno a las lagunas legales en la aplicación de las leyes nacionales y sistemas de inteligencia de los países más afectados. En definitiva, es una problemática a nivel transnacional por la naturaleza de la amenaza, por lo que la respuesta debe adaptarse a las circunstancias de manera integral y coordinado con el resto de los territorios involucrados.

Teniendo en cuenta los anteriores razonamientos, es lógico pensar que las líneas de actuación estratégica deben actualizarse al compás de la evolución del riesgo. Toda medida destinada a mermar la capacidad yihadista que se nutre parcial o enteramente del negocio del narcotráfico debe poner el foco en la necesidad de disipar las condiciones coyunturales que contribuyen a que esta relación ocurra, algo que en la práctica resulta complejo de abordar. Sin embargo, reducir la lucha contra el narcotráfico a un asunto eminentemente centrado en el fenómeno yihadista puede resultar ilusorio e incluso contraproducente. Por tanto, una de las recomendaciones adicionales pasa por abordar directamente una repuesta contra el narcotráfico, centrando así esfuerzos en reformar las estrategias de gobernanza local y los mecanismos que permitan una rendición de cuentas de la élite local y los agentes estatales. En este sen-

tido, se pueden aprovechar aquellas facciones que busquen alejarse de negociar y colaborar con los cárteles, reconociendo y apoyando estas formas de movimientos sociales que ayuden a mermar la popularidad del narcotráfico en ciertas zonas de interés.

En el ámbito exterior, la UE invierte sumas cantidades de dinero en el control de la droga en África en aquellos países donde tiene mayor presencia su producción y transporte, por lo que resulta necesario fortalecer los canales de cooperación entre el soporte financiero a nivel europeo y el músculo operativo a nivel local a la hora de prevenir la proliferación de este tipo de actividades delictivas. La UE ha implementado planes de acción y apoya planes de asistencia en terceros países a nivel bilateral, subregional y regional en África, especialmente en la parte occidental del continente, para abordar las vías de tránsito de droga al interior del continente europeo, especialmente de cocaína (EUROPOL, 2019:198). Un ejemplo de lo anterior es el proyecto "Fomentando la Respuesta de África al Crimen Organizado Transnacional" (Enhancing Africa's Response to Transnational Organised Crime, ENACT), que sigue el pensamiento y los objetivos del Plan de Acción de la UE sobre Drogas 2017-2020 en el marco de la Estrategia de la UE contra las Drogas (2013-2020) para proporcionar asistencia al desarrollo de mecanismos de evaluación del riesgo y contribuir a atajar las rutas de tránsito ilegal de narcóticos.

Las misiones exteriores de la Unión Europea buscan en cierta forma proporcionar herramientas de lucha contra la delincuencia organizada, concretamente en el Sahel a través de la Misión de Capacitación de la Unión Europea en Níger (EUCAP Níger) y la Misión de Capacitación de la Unión Europea en Mali (EUCAP Mali). El primero tiene entre sus objetivos a los retos de seguridad el tráfico ilícito y las redes de contrabando, mientras que el segundo apunta directamente a la lucha contra la presencia de traficantes, la corrupción y el crimen

organizado. Sin embargo, no se ha desplegado hasta la fecha una misión para combatir el crimen organizado, ya que esta competencia debe contar con la autorización del gobierno del país objeto de la misión, y lo más cercano que se ha conseguido ha sido establecer un contingente permanente de EUCAP Níger en la ciudad de Agadez para la prevención de la migración y el tráfico ilícito, proyecto todavía en curso. Entramos en este sentido en un círculo vicioso donde las redes que conectan a la dimensión política a nivel local impiden una persecución efectiva del narcotráfico y para cuya solución inevitablemente requiere una firme actuación gubernamental desde las propias instituciones estatales (Díez, 2021).

A nivel operativo, y tras examinar ciertos vínculos entre el narcotráfico y el yihadismo así como entender bajo qué condiciones ambos actores se benefician mutuamente, es deducible pensar que una eventual disminución de la fuerza y poder de uno va a tener una repercusión tanto directa como indirectamente en el otro. Por ello, contraatacar las capacidades del crimen organizado se presenta como una ventaja única en la lucha antiterrorista a nivel de financiación de estos últimos, mientras que una lucha contra el terrorismo local en África alteraría las rutas de tránsito de la droga y dificultaría su protección y seguridad en su paso al mercado regional y al europeo, constituyendo un doble triunfo en la lucha contra el crimen organizado trasnacional. Ahora bien, la relación entre el tráfico de drogas y el yihadismo es una relación que se retroalimenta a pesar de que las herramientas destinadas a la lucha contra el terrorismo superan con creces aquellas destinadas a combatir la delincuencia organizada (Echeverría, 2019:73). Nos encontramos con uno de los últimos desafíos a exponer a la hora de prevenir tanto la expansión de uno u otro fenómeno así como de su cooperación mutua, con unas políticas destina-

das a combatir esta relación demostradas hasta el momento inefectivas y, por ende, no resulta realista imaginar que se podrá mitigar este desafío incidiendo exclusivamente en la lucha contra uno o contra ambos por separado.

Las líneas de acción estratégica deben por tanto ir destinadas a la lucha contra su potencial cooperación mutua incluyendo a los diferentes actores involucrados en esta problemática, desde los principales protagonistas de esta actividad criminal hasta la dimensión política, la sociedad civil y la opinión pública en general.

LINEAS DE ACCIÓN

- Fortalecer la evaluación del riesgo a nivel regional, nacional y local

- Establecer un sistema de cuantificación y obtención de datos sobre la cooperación del fenómeno objeto de estudio

- Monitorización de las tendencias del consumo de drogas a nivel doméstico

- Fortalecer los canales de comunicación y de intercambio de inteligencia entre los países del vecindario regional

- Auditar las instituciones políticas a través de indicadores y parámetros que permitan establecer un régimen de rendición de cuentas

- Invertir esfuerzos en las instituciones formales e informales, con especial énfasis en los organismos regionales y la sociedad civil

- Reforma en la gobernanza local que forme, sensibilice y fomente a nivel social la confianza en las instituciones

- Fortalecer los mecanismos legales que regulan ambos delitos a nivel nacional en coordinación con la legislación de los países vecinos

- Combatir la potencial cooperación entre ambos sectores criminales incluyendo a los diferentes actores involucrados, desde la clase política hasta la sociedad civil, las autoridades informales y la opinión pública

10. CONCLUSIONES

El presente informe ha puesto de manifiesto que la relación entre el narcotráfico y el yihadismo se da en circunstancias muy específicas y bajo las cuales es difícil establecer unos parámetros concretos sobre el modo de actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad. A lo largo de las presentes páginas se ha establecido un escenario de riesgo marcado por un constante cambio y adaptación en la relación entre el fenómeno yihadista y el tráfico de drogas, más aún en un contexto de conflictividad en aumento y dificultado por unas circunstancias políticas adversas.

Existe una literatura todavía hoy escasa a la hora de abordar el fenómeno objeto de estudio, cuya información a menudo proviene del ámbito estatal, por lo que la dificultad de encontrar evidencias sobre el grado de cooperación se ha determinado elevada. Aun así, el presente documento ha podido establecer una serie de focos de cooperación que contribuyen a elevar los niveles de riesgo para la seguridad regional y, en extensión, para los países que se encuentran geográficamente más próximos al riesgo.

El espacio de África Subsahariana ha dejado de jugar un papel residual para posicionarse como un foco de tránsito de droga emergente, así como un espacio de creciente consumo a nivel doméstico, por lo que esta alternativa a la economía formal ha pasado a constituirse como una ventajosa fuente de enriquecimiento a través del Sáhara y uno de los retos principales a nivel global. El rol del crimen organizado transnacional en el continente resulta evidente, aprovechando los vínculos con redes criminales locales y explotando aquellas zonas grises de bajo o ausente control estatal que les ha permitido introducir drogas como la cocaína o la heroína con una relativa mayor facilidad que introduciéndolos directamente en el mercado final de los países más ricos en Europa y Norteamérica, principales consumidores. La inefectividad e inca-

pacidad de imponer la ley en concretos pero amplios espacios así como las elevadas conexiones con las redes locales proporcionan una ventana de oportunidad excepcional a la hora de establecer un sistema de economía informal donde relaciones y lazos personales sustituyen a los vínculos propios de la economía legal, actuando propiamente como clanes que se benefician de los vacíos de poder del Estado. Por tanto, el tráfico de drogas en el flanco sur de Europa Occidental termina por encontrar su espacio de consolidación a nivel regional, especialmente en África Occidental, así como en ciertos territorios del área oriental, coexistiendo y en ciertas ocasiones cooperando con grupos armados locales y regionales que han sabido sacar rédito de los beneficios económicos generados por el negocio de la droga.

Para entender la evolución del narcotráfico y sus rutas de tránsito hacia su consumidor final es necesario poner el foco en aquellos espacios que se interrelacionan entre sí: en el caso de la cocaína, por un lado se encontrarían la región de América del Sur, con Colombia, Perú y Bolivia como los países productores, consumidores y exportadores, y por otro lado el espacio del África Subsahariana, donde áreas geográficas como el espacio occidental y la ruta norte del continente siguen creciendo como principales lugares de tránsito y, recientemente, de consumo. En cuanto al tráfico de cannabis, el principal país productor, consumidor y exportador hacia sus consumidores finales sigue siendo Marruecos, empleando rutas a lo largo del norte de África y en la franja del Sahel para acceder a la mayor parte de mercado que le sea posible. Finalmente encontraríamos el negocio de los opiáceos, concretamente de heroína, con Afganistán como líder en su producción y distribución que comprende tres rutas principales a través de África para llegar a sus clientes finales. Así, el fenómeno del crimen organizado involucrado en el tráfico de droga se mantiene diversificado, en constante mutación y adaptación, así como volátil en

lo concerniente a las alianzas creadas para poder llevar a cabo su lucrativo negocio a nivel transnacional.

Al mismo tiempo que la capacidad estatal para proporcionar seguridad en su territorio disminuye y la insurgencia rebelde comienza su periodo de expansión, se han colocado sobre el tablero otros actores que están interfiriendo en la estabilidad de buena parte del África Subsahariana, especialmente los grupos terroristas. Desplazando el centro gravitacional de la actividad yihadista del Magreb al Sahel, el avance del terrorismo constituye a día de hoy una de las mayores amenazas para la estabilidad y la seguridad de buena parte de los países de la parte occidental, central y oriental del continente.

Hace una década, los grupos terroristas de mayor actividad como AQMI o MUJAO consiguieron llegar a controlar una buena parte de territorio en sus áreas de influencia, coexistiendo y a menudo cooperando con otras redes delincuenciales del crimen organizado como el tráfico de armas y de drogas. Aun así, resulta necesario ser cuidadosos con los niveles de relación empírica que vinculan al yihadismo con este último, pues no se trata de una relación ampliamente consolidada y sus alianzas se producen en contextos muy específicos y limitados. La fuente principal de financiación de prominentes grupos y organizaciones terroristas en África tanto entonces como en la actualidad continúa siendo los secuestros a cambio de rescates, aunque ello no implique que el narcotráfico a veces ayude o contribuya a recaudar fondos mediante peajes y protección en ciertas zonas. Si bien es cierto que el alcance y la magnitud de la colaboración entre ambas actividades criminales no puede darse por sentado en regiones y circunstancias dispares, se han establecido una serie de focos de conflicto donde la cooperación entre el tráfico de drogas y el yihadismo se da de una manera más evidente, específicamente en la región del Sahel en general y la zona norte de Mali en particular. Sin embargo, dirimir

el grado de colaboración y la continuidad de este resultan extremadamente complejos, al contar con una ausencia de datos que avalen el nivel de actividad y apoyo mutuos.

En vista de lo anterior, los esfuerzos para la identificación, prevención y reacción de esta cooperación entre ambos sectores criminales ha conseguido grandes avances a través de mecanismos e iniciativas en el panorama regional e internacional. Sin embargo, queda todavía un largo camino por recorrer, al ser una amenaza que se encuentra cada vez con más vectores de propagación del riesgo y para lo cual cabe esperar contramedidas que se traduzcan en un panorama más halagüeño en comparación con el que encontramos en el actual contexto de seguridad regional.

11. REFERENCIAS

Aguilera, A. (2022), Tendencias del Yihadismo en el Horizonte 2025, en Igualada, C. et al (2022). Anuario del Terrorismo Yihadista 2021. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. 1-200. https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2022/03/ANUARIO-2021-version-final.pdf

Algeria Watch (2010). Au Sahel, narcotrafiquants et terroristes se partagent le terrain. Algeria Watch. https://algeria-watch.org/?p=33499

Assanvo, W. (2018). Mali's drug problems are its silent enemy. Institute for Security Studies. https://issafrica.org/iss-today/malis-drug-problems-are-its-silent-enemy

Audu, O. (2016). Boko Haram: Nigerian agency laments increase in cocaine, illicit drug use in IDP camps. Premium Times Nigeria. https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/200115-boko-haram-nigerian-agency-laments-increase-cocaine-illicit-drug-use-idp-camps.html

Banco Mundial, 2021a. Crecimiento del PIB anual, África al sur del Sáhara. Banco Mundial. https://datos.bancomundial.org/

Banco Mundial, 2021b. Población, África Subsahariana. Banco Mundial. https://datos.bancomundial.org/

Barrenechea, L. (2017). Análisis de cuatro casos concretos de cooperación hispano-marroquí derivados del 11M. Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 44. 115-135. https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-91876/UNISCIDP44-6BARRENECHEA.pdf

Barrenechea, L. y Alonso, R. en Argumosa, J. et al (2015). Cuadernos de Estrategia 173 – La Internacional Yihadista. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 1-239. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_173.pdf

Bell et al, 2021. Pirates of the Gulf of Guinea: A Cost Analysis for Coastal States. Stable Sea. 1-68. https://www.stableseas.org/post/pirates-of-the-gulf-of-guinea-a-cost-analysis-for-coastal-states

Blanco, J.M. (2015). Hezbollah, el partido de Dios. Documento de investigación 01/2015. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 1-32. https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV01-2015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf

Blanco, J.M. y De la Corte, L. (2013). Terrorismo y tráfico de drogas en África Subsahariana. Documento de trabajo. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 1-77. https://www.ieee.

es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET01-2013_IEEE-IMDEP.pdf

Briscoe, I. (2018). Crime after Jihad: armed groups, the state and illicit business in post-conflict Mali. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations. 1-65. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/01/Clingendael_Crime-after-Jihad.pdf

Brown, D. (2013). The challenge of drug trafficking to democratic governance and human security in West Africa. Strategic Studies Institute, US Army War College. 1-103. https://www.jstor.org/stable/resrep11261?seq=1#metadata_info_tab_contents

Boletín Oficial del Estado (BOE), 2014. Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. BOE. https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/10/10/873

Boletín Oficial del Estado (BOE), 2020. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2020/118 DEL CONSEJO de 27 de enero de 2020 por la que se aplica la Decisión (PESC) 2017/1775 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Mali. BOE. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80090

Caballero, C. (2019). Droga y terrorismo van de la mano en el Sahel. El País. https://elpais.com/elpais/2019/03/18/africa_no_es_un_pais/1552933180_326955.html

CEDEAO (2013). 2012 Annual Report: Integration and Political Stability in West Africa. CEDEAO. 1-131. https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2017/11/2012_Annual-report-.pdf?baaaimophdbiecba

CEDEAO (2020). ECOWAS Drug Action Plan to Address Illicit Drug Trafficking, Organised Crime and Drug Abuse in West Africa. Portal de la Unidad de Drogas de la CEDEAO. https://edup.ecowas.int/ecowas-drug-action-plan-to-address-illicit-drug-trafficking-organised-crime-and-drug-abuse-in-west-africa/

Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, 2017). Vinculaciones Crimen Organizado – Terrorismo: Experiencia de España. CITCO. 1-16. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/125241/olivera.pdf

Comité de Contraterrorismo de las Naciones Unidas (2018). The nexus between international terrorism and transnational organized crime. Chair's Summary. https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/ctc-chair-opening-remarks.pdf

Cottee, S. (2016). Reborn Into Terrorism: Why are so many ISIS recruits ex-cons and con-

verts?. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/isis-criminals-converts/426822/

Dabo, A. (2021). Guinea-Bissau police say 1.8 tonnes of cocaine seized in biggest ever haul. REUTERS. https://www.reuters.com/article/us-bissau-drugs-idUSKCN1VO1VU

Del Cid Gómez, J. M. (2010). A financial profile of the terrorism of Al-Qaeda and its affiliates. Perspectives on Terrorism 4(4). 3-17. https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2010/issue-4/a-financial-profile-of-the-terrorism-of-al-qaeda-and-its-affiliates--juan-miguel-del-cid-gomez.pdf

Departamento de Seguridad Nacional (DSN), 2020. Informe Anual de Seguridad Nacional 2019. Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 1-280. https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2019

Departamento de Seguridad Nacional (DSN), 2021. Informe Anual de Seguridad Nacional 2020. Gobierno de España. 1-390. https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2020

Dirección General de Políticas Internas de la Unión (2012). Europe's Crime-Terror Nexus: Links Between Terrorist and Organised Crime Groups in the European Union. Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Civil Liberties, Justice and Home Affairs. 1-66. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf

Echeverría, C. (2019). El Sahel. Tráfico y terrorismo. Cuaderno de estrategia 202. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 67-102. https://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2020/Cuaderno_202.html

Eizenga, D. y Williams, W. (2020). The Puzzle of JNIM and Militant Islamist Groups in the Sahel. Africa Security Brief No. 38. Africa Center for Strategic Studies. 1-8. https://africacenter.org/publication/puzzle-jnim-militant-islamist-groups-sahel/

Entrevista de la autora a especialistas antiterroristas de la Comisión General de Información el 28 de octubre de 2021.

Entrevista de la autora a Jesús Díez, vocal asesor del Departamento de Seguridad Nacional el 28 de octubre de 2021.

Estrategia de Seguridad Nacional, 2021. Crimen Organizado y Delincuencia Grave. Gobierno de España. 1-109. https://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017

EU-ACT (2021). EU-ACT. Global Illicit Flows Programme of the European Union. https://illicitflows.eu/es/proyectos/eu-act/

EUROPOL (2019). EU-Drug Markets Report 2019. EUROPOL. 1-260. https://www.europol.europa.eu/publications-documents/drug-markets-report-2019

EUROPOL (2021). EU Policy Cycle – EMPACT: EMPACT 2022+ Fighting crime together. EUROPOL. https://www.europol.europa.eu/empact

FATF (2016). Terrorist Financing in West and Central Africa. FATF-GIABA-GABAC. 1-50. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf

FATF-GAFI (2008). Financial Action Task Force – Terrorist Financing. FATF-OECD. 1-37. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Terrorist%20Financing%20Typologies%20Report.pdf

Fernández, S. (2019). España mantiene el liderazgo en la entrada de hachís procedente de Marruecos en la Unión Europea. ABC Andalucía. https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-espana-mantiene-liderazgo-entrada-hachis-procedente-marruecos-union-europea-201912222137_noticia.html

Foreign & Commonwealth Office (2013). Traffickers and Terrorists: drugs and violent jihad in Mali and the wider Sahel. Foreign & Commonwealth Office. 1-8. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/256619/Oct_2013_Traffickers_and_Terrorists.pdf

González, L.A. (2020). Psicotrópicos, narcotráfico y terrorismo yihadista. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. https://observatorioterrorismo.com/actividades/psicotropicos-narcotrafico-y-terrorismo-yihadista/

Hansen, S. (2021). Into Darkness? Scrutinizing Economic Explanations for African Jihad. Hudson Institute. https://www.hudson.org/research/17330-into-darkness-scrutinizing-economic-explanations-for-african-jihad

Hernández, A. (2021). El Talibán y los carteles de la droga mexicanos: ¿qué tienen en común?. DW Noticias. https://www.dw.com/es/el-talib%C3%A1n-y-los-carteles-de-la-droga-mexicanos-qu%C3%A9-tienen-en-com%C3%BAn/a-59043309

Igualada, C. en Igualada, C. et al (2021). Anuario del Terrorismo Yihadista 2020. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. 1-238. https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2021/03/Anuario-del-Terrorismo-Yihadista-2020.pdf

Índice de Estados Frágiles (2021). Global data. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org/global-data/

Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2021). Cabo Delgado insurgency: The shifting shape of the illicit economy in northern Mozambique. Daily Maverick. https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-05-02-cabo-delgado-insurgency-the-shifting-shape-of-the-illicit-economy-in-northern-mozambique/

INTERPOL y ENACT (2018). Overview of Serious and Organized Crime in Africa. Analytical Report. 1-44. INTERPOL y ENACT. https://enactafrica.org/research/analytical-reports/interpol-overview-of-serious-and-organised-crime-in-africa-2018#:~:text=Transnational%20organised%20crime%20in%20Africa%20is%20a%20growing%20issue.&text=Organised%20crime%20in%20Africa%20generates,continent%20and%20often%20heading%20offshore.

International Crisis Group (2018). Drug Trafficking, Violence and Politics in Northern Mali. Africa Report N°267. International Crisis Group. 1-43. https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/267-narcotrafic-violence-et-politique-au-nord-du-mali

International Crisis Group (2020). Reversing Central Mali's Descent into Communal Violence. Africa Report Nº293. International Crisis Group. 1–46. https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/293-enrayer-la-communautarisation-de-la-violence-au-centre-du-mali

Jeune Afrique (2011). Mali: «Tessalit connection» avec Deity Ag Sidimou. Jeune Afrique https://www.jeuneafrique.com/189772/politique/mali-tessalit-connection-avec-deity-ag-sidimou/

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), 2021. Celebración de los 60 años de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y los 50 años del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. E/INCB/2020/1/Supp. 1. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 1-46. https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2020/Supplement/20-07609_INCB_Supp_Ebook_S.pdf

Kasraoui, S. (2021). Security Services Arrest Dozens of Terror Suspects Across Morocco. Morocco World News. https://www.moroccoworldnews.com/2021/12/345904/security-services-arrest-dozens-of-terror-suspects-across-morocco

Keita (2021). Mali: Business des stupéfiants, la douane Malienne met le grappin sur 7,745 tonnes de cannabis. Afrimag. https://afrimag.net/Mali-business-stupefiants-douane-Malienne-met-grappin/

Labrousse, A. (2011). Geopolítica de las drogas. Editorial Marea. 1-112.

Lacher, W. (2012). Organized crime and conflict in the Sahel-Sahara region. The Carnegie Papers. Carnegie Endowment for International Peace. 1-32. https://carnegieendowment.org/files/sahel_sahara.pdf

Lacher, W. (2013). Challenging the Myth of the Drug-Terror Nexus in the Sahel. WACD Background Paper No. 4. West Africa Commission on Drugs. 1-16. http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2017/02/Challenging-the-Myth-of-the-Drug-Terror-Nexus-in-the-Sahel-2013-09-12.pdf

Le Roux, P. (2019). Confronting Central Mali's Extremist Threat. Africa Center for Strategic Studies. https://africacenter.org/spotlight/confronting-central-malis-extremist-threat/

Lebovich, A. (2013). Mali's Bad Trip. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2013/03/15/Malis-bad-trip/

MackInnon, A. (2021). Who Blessed the Vlads Down in Africa?. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/09/24/russia-wagner-group-Mali-africa-putin-libya/

Mahmoud, M. (2011). The Many Faces of Al Qaeda in the Islamic Maghreb. Geneva Centre for Security Policy. GCSP Policy Paper n°15. 1-6. https://www.files.ethz.ch/isn/129338/GCSP%20Policy%20Paper%2015.pdf

Mangan, F. (2020). Illicit Drug Trafficking and Use in Libya. Peaceworks. United States Institute of Peace (USIP). Nº 161. 1-36. https://www.usip.org/sites/default/files/2020-05/20200528-pw_161-illicit_drug_trafficking_and_use_in_libya_highs_and_lows-pw.pdf

McDevitt A. y Bullock, J. (2021). Resistir la corrupción en las rutas del narcotráfico: Un análisis de instituciones de justicia penal en América Latina y África Occidental. Transparencia Internacional. 1-44. https://images.transparencycdn.org/images/ES-2021-Report-Resisting-corruption-along-drug-trafficking-routes-Crimjust.pdf

Meché, B. (2021). Development, the Drug War, and the Limits of Security Sector Reform in the West African Sahel. ACME. International Journal for Critical Geographies, 2021, 20(6): 687-706. https://www.acme-journal.org/index.php/acme/article/view/2101

Micallef, M. (2019). Shifting sands — Libya's changing drug trafficking dynamics on the coastal and desert borders. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. 1-29. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/11/EDMR2019_BackgroundReport_Libya.pdf

Mutangadura, C. (2021). Africa must prevent its soldiers and police from becoming drivers of instability. Institute for Security Studies. https://issafrica.org/iss-today/africa-must-pre-

vent-its-soldiers-and-police-from-becoming-drivers-of-instability

Naciones Unidas (1999). International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Naciones Unidas. 1-17. https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf

Naciones Unidas (2004). UN warns about nexus between drugs, crime and terrorism. Press Release. SOC/CP/311. https://www.un.org/press/en/2004/soccp311.doc.htm

Naciones Unidas (2022). Decade of Sahel conflict leaves 2.5 million people displaced. UN News. https://news.un.org/en/story/2022/01/1109772

Ortega, P. (2021). España ataca la ruta africana de la droga en el Sahel. El País. https://elpais.com/espana/2021-10-06/espana-ataca-la-ruta-africana-de-la-droga-en-el-sahel.html

Pagola, J. y Muñoz, P. (2014). Una decena de sentencias vinculan el narcotráfico con el terrorismo yihadista. ABC. https://www.abc.es/espana/20141028/abci-sentencias-terrorismo-yihadista-201410271448.html

Panel de Expertos (2019). Letter dated 21 February 2019 from the Panel of Experts established pursuant to resolution 2374 (2017) on Mali addressed to the President of the Security Council. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 1-91. https://daccess-ods.un.org/tmp/7857786.41700745.html

Pérez, D. en Igualada, C. et al (2022). Anuario del Terrorismo Yihadista 2021. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. 1-200. https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2022/03/ANUARIO-2021-version-final.pdf

Petrich, K. (2019). Cows, Charcoal, and Cocaine: Al-Shabaab's Criminal Activities in the Horn of Africa. Studies in Conflict & Terrorism. 1-23. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1057610X.2019.1678873?journalCode=uter20

Petrušic, C. y Deškovic, M. (2018). Eksplozivni detalji uhicenja troclane narkobande na plesu. Jutarnji. https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/eksplozivni-detalji-uhicenja-troclane-narkobande-na-plesudosli-u-hrvatsku-kupiti-ruske-rakete-zemlja-zrak-planiraliih-platiti-kokainom/8009258/

Priego, A. (2010). Droga, Inestabilidad y Subdesarrollo en Afganistán: Soluciones al Círculo Vicioso. Documento de opinión 15/2010. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 1-18. https://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2010/DIEEEO15-2010DrogaAfganistan.html

Priego, P. (2019), La Política de la UE hacia el Sahel en Echeverría, C. et al (2019). Docu-

mentos de Seguridad y Defensa. Nº 80. La estabilidad en el Sahel: Un análisis prospectivo. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 1-150. https://publicaciones.defensa.gob.es/la-estabilidad-en-el-sahel-un-analisis-prospectivo-n-80-libros-ebook.html

Rabasa et al (2017). Counternetwork: Countering the Expansion of Transnational Criminal networks. Santa Mónica, CA. RAND Corporation. 1-215. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1481.html

Ranstorp, M. (2016). Microfinancing the Caliphate: How the Islamic State is Unlocking the Assets of European Recruits. CTC Sentinel. Volume 9. Issue 5. 1-36. https://ctc.usma.edu/microfinancing-the-caliphate-how-the-islamic-state-is-unlocking-the-assets-of-european-recruits/

Reinares, F. (2014). ¡Matadlos!. Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España. Galaxia Gutenberg. ISBN 9788416072002. 1-320.

Reitano, T., Clarke, C. y Adal, L. (2017). Examining the Nexus between Organised Crime and Terrorism and its Implications for EU Programming. CT MORSE. Counter-terrorism monitoring, reporting and support mechanism. 1-28. https://icct.nl/publication/examining-the-nexus-between-organised-crime-and-terrorism-and-its-implications-for-eu-programming/

Reuters (2022). Niger police find cocaine worth nearly $9 million in mayor's truck. CNN. https://edition.cnn.com/2022/01/03/africa/niger-mayor-cocaine-seize-intl-scli/index.html

Sangaré., I. (2021). Hibridación del terrorismo y crimen organizado desde áfrica occidental hasta América latina vs derechos humanos. Revista Ciencia Jurídica y Política, 51-65. http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/446/4462808004/html/index.html

Sansó-Rubert, D. (2018). ¿Por qué África?: desentrañando la geopolítica criminal del tráfico ilícito de cocaína entre América Latina y Europa (vía España). Documento de trabajo 7/2018. Real Instituto Elcano. 1-55. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/2902f0df-7d6b-442d-8856-c70ae58ad121/DT7-2018-SansoRubertPascual-Africa-geopolitica-transito-cocaina-America-Latina-Europa-Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=-2902f0df-7d6b-442d-8856-c70ae58ad121

Semmami, S. (2015), Los Movimientos Yihadistas en África en Argumosa, J. et al (2015). Cuadernos de Estrategia 173 – La Internacional Yihadista. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 1-239. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_173.pdf

Shaw M. y Gomes A. (2020). Breaking the vicious cycle: Cocaine politics in Guinea-Bissau. Policy Brief. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. 1-26. https://globalini-

tiative.net/wp-content/uploads/2020/05/Guinea-Bissau_Policy-Brief_Final2.pdf

Shaw M., Reitano T. y Hunter M. (2014). Comprehensive Assessment of Drug Trafficking and Organised Crime in West and Central Africa. African Union. 1-25. https://au.int/sites/default/files/documents/30220-doc-organized_crime_in_west_and_central_africa_-_july_2014_-_abridged_summary_english.pdf

Situación del Terrorismo y Tendencias de la Unión Europea (TESAT), 2021. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2021. EUROPOL. 1-113. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/tesat_2021_0.pdf

Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence (2011). BOKO HARAM: Emerging Threat to the U.S. Homeland. Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence, Committee on Homeland Security, House of Representatives. 1-29. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-112HPRT71725/pdf/CPRT-112HPRT71725.pdf

Summers, M. (2021), Actividad Yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental en Igualada, C. et al (2021). Anuario del Terrorismo Yihadista 2020. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. 1-238. https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2021/03/Anuario-del-Terrorismo-Yihadista-2020.pdf

Summers, M. (2022), Actividad Yihadista en el Magreb y Sahel Occidental 2021 en Igualada, C. et al (2022). Anuario del Terrorismo Yihadista 2021. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. 1-200. https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2022/03/ANUARIO-2021-version-final.pdf

The Guardian (2010). US embassy cables: Cocaine trafficking across northern Mali risks armed conflict. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/246471

Tinti, P. (2020). Drug trafficking in northern Mali: A tenuous criminal equilibrium. Research Paper, Issue 14. ENACT. 1-24. https://enactafrica.org/research/research-papers/drug-trafficking-in-northern-mali-a-tenuous-criminal-equilibrium

Transparencia Internacional, 2021. Corruption Perceptions Index, 2021. Transparencia Internacional. https://www.transparency.org/en/cpi/2021

UNDP, 2020. La próxima frontera: el desarrollo humano y el Antropoceno. Informe sobre Desarrollo Humano 2020. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 1-456. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf

UNODC (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada

transnacional y sus protocolos. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 1-96. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

UNODC (2017a). Results and Activities: Sahel Programme, Progress Report June 2017. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 1-52. https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica/UNODC_Sahel_Programme_Results_and_Activities_-_June_2017.pdf

UNODC (2017b). Terrorism and drug trafficking. Module 16: Linkages between Organized Crime and Terrorism. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-16/key-issues/terrorism-and-drug-trafficking.html

UNODC (2018). E4J University Module Series: Organized Crime. Case Studies. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-1/exercises/case-studies.html

UNODC (2019a). Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/unodc/es/commissions/CND/index.html

UNODC (2019b). Annual Report 2018. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 1-146. https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/Annual-Report_2018.pdf

UNODC (2019c). Bissau-Guinean authorities achieve largest ever drug seizure in the history of Guinea-Bissau. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, África Occidental y Central. https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/2019-03-15-seizure-guinea-bissau.html

UNODC (2019d). Cannabis and Hallucinogens. World Drug Report 2019. Booklet 5. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 1-76. https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_5_CANNABIS_HALLUCINOGENS.pdf

UNODC (2020). Medidas adoptadas por los Estados Miembros y las entidades de las Naciones Unidas para abordar la cuestión de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada. Informe del Secretario General. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. S/2020/754. 1-22. https://undocs.org/es/S/2020/754

UNODC (2021a). Drug Market Trends: Cannabis Opioids. World Drug Report 2021. Booklet 3. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 1-121. https://www.unodc.org/res/

wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf

UNODC (2021b). UNODC Strategic Vision for Africa 2030. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 1-32. https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC_Strategic_Vision_for_Africa_2030-web.pdf

UNODC (2021c). Drug Market Trends: Cocaine Amphetamine-type Stimulants. World Drug Report 2021. Booklet 4. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 1-103. https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_4.pdf

UNOWA (2011). Praia Declaration on Elections and Stability in West Africa. United Nations Office For West Africa. 1-4. https://unowa.unmissions.org/sites/default/files/PRAIA%20DECL_ANG_0.pdf

UNSC (2012). Secretary-General's remarks to the Security Council on the Impact of Transnational Organized Crime on Peace, Security and Stability in West Africa and the Sahel. United Nations Secretary-General. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2012-02-21/secretary-generals-remarks-security-council-impact-transnational

12. ANEXOS

Anexo I. Acrónimos y abreviaciones

ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

AAM	Ansar Allah Al Murabitún
AMB	Batallón Al Mulatamún
AQMI	Al Qaeda en el Magreb Islámico
CEDEAO	Comunidad Económica de Estados de África Occidental
CITCO	Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
CMA	Coordinación de los Movimientos de Azawad
COPOLAD II	Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea
DEA	Administración de Control de Drogas
ECI	Equipos conjuntos de Investigación
EIGS	Estado Islámico del Gran Sáhara
EMPACT	Plataforma Multidisciplinar Europea Contra las Amenazas Criminales
ENACT	Fomentando la Respuesta de África al Crimen Organizado Transnacional
EU-ACT	Acción Contra las Drogas y el Crimen Organizado
EUCAP MALI	Misión de Capacitación de la Unión Europea en Mali
EUCAP NIGER	Misión de Capacitación de la Unión Europea en Níger
EUTM MALI	Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Mali
EUTM MOZAMBIQUE	Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Mozambique
EUTM RCA	Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en República Centroafricana
EUTM SOMALIA	Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Somalia
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FRONTEX	Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GATIA	Grupo de Autodefensa y Aliados Imghad Tuareg
GIABA	Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
GOIF	Grupo Operativo de Inteligencia Financiera
GSPC	Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
IDH	Índice de Desarrollo Humano
ISCAP	Estado Islámico en África Central
ISWAP	Estado Islámico de África Occidental
JNIM	Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
MAA-PLATAFORMA	Movimiento Árabe de Azawad – Plataforma
MINUSMA	Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
MNLA	Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad
MUJAO	Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental
OLAF	Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
PENCFIT	Plan Estratégico Nacional contra la Financiación del Terrorismo
PKK	Partido de los Trabajadores de Kurdistán
SSR	Reforma del Sector de la Seguridad de la Unión Africana
TESAT	Situación del Terrorismo y Tendencias de la Unión Europea
UE	Unión Europea
UNDP	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNODC	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

13. AGRADECIMIENTOS

Agradecer a las diferentes fuentes que han contribuido al presente documento de investigación, conocimientos sin los cuales no hubiera sido posible la elaboración de la obra. Reconocer, por un lado, la predisposición de especialistas pertenecientes a la Comisión General de Información de la Policía Nacional a la hora de contribuir con la perfilación de los actuales potenciadores del riesgo para España en torno al fenómeno del yihadismo y su relación con el crimen organizado. Agradecer en la misma línea el apoyo y los conocimientos prestados por el Departamento de Seguridad Nacional, contribuyendo a enmarcar los diferentes riesgos que se desprenden de la relación entre el tráfico de drogas y el yihadismo así como de las implicaciones para una serie de dimensiones multilaterales, como la seguridad, la economía o el impacto a nivel político e institucional.

OIET
OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN